

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA**



**“LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA
CONSTITUCIONAL EN MÉXICO CON MOTIVO DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL DE 2011”**

PRESENTA

ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN

**PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

JUNIO 2017

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA



**“LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA
CONSTITUCIONAL EN MÉXICO CON MOTIVO DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL DE 2011”**

**PRESENTA
ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN**

**PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD**

**DIRECTOR DE TESIS
DR. MICHAEL G. NÚÑEZ TORRES**

JUNIO 2017

ÍNDICE

Introducción.....	5
Capítulo I. Tipos de sistemas de control constitucional.....	13
1.1 Control constitucional difuso.....	13
a) Antecedentes.....	13
b) Características que lo distinguen.....	22
c) Marco conceptual.....	26
1.2 Control constitucional concentrado.....	30
a) Antecedentes.....	30
b) Características principales.....	39
c) Marco conceptual.....	44
1.3 Control constitucional mixto.....	48
a) Antecedentes.....	48
b) Características principales.....	50
c) Marco conceptual.....	56
d) Desarrollo actual en distintos ámbitos de aplicación.....	59
Capítulo II. El control constitucional en México antes de la reforma constitucional de junio de dos mil once.....	64
2.1 Marco constitucional y legal.....	64
2.2 El control constitucional y su aplicación en el ámbito judicial	
a) Interpretación, jurisprudencia y sentencias relevantes antes de la reforma constitucional de dos mil once.....	83
2.3 Control constitucional mixto predominantemente concentrado.....	94

Capítulo III. Reforma constitucional en México de junio de 2011.....	102
3.1 Dictamen de la reforma constitucional.....	102
3.2 Inclusión del control de la convencionalidad en México y su diferencia al control de constitucionalidad.....	114
3.3 Ampliación de facultades a las autoridades para ejercer control constitucional.....	118
Capítulo IV. Transformación del sistema constitucional en México de carácter mixto predominantemente concentrado a mixto con acentuación difusa.....	132
4.1 Nuevo sistema de justicia constitucional en México.....	132
a) características inherentes al control difuso.....	132
b) características propias del control concentrado	148
c) conversión de un sistema de control constitucional de naturaleza mixta, ahora con acentuación difusa.....	151
4.2 Aplicación actual en el ámbito judicial.....	158
a) Sentencias y criterios jurisprudenciales relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.....	158
b) Sentencias y criterios jurisprudenciales relevantes de los Tribunales Colegiados de Circuito.....	183
Conclusiones.....	199
Bibliografía.....	207

Introducción

En la historia, México se ha destacado tanto en la creación de normas vanguardistas que otorgan a sus individuos derechos fundamentales como en la instauración de medios de defensa que, a su vez, permiten que éstos se salvaguarden.

En consideración a lo anterior, me gustaría iniciar esa tesis haciendo alusión a una frase de José María Morelos y Pavón, creador del histórico documento *"Sentimientos de la Nación"*, que implementó las primeras normas proscriptoras del esclavismo en el continente, y a quien se le atribuye el lema que hoy se encuentra visible en la mayoría de los tribunales del país, que dice: *"Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario"*; lo que revela la vocación nacional de crear medios jurisdiccionales que defiendan a los ciudadanos de la vulneración de sus derechos.

De igual modo, quisiera rememorar el caso del célebre *"Amparo Verástegui"*, nombre que se le da comúnmente a la primera sentencia de amparo, dictada el trece de agosto de mil ochocientos cuarenta y nueve. Para ello, hay que recordar que la figura del juicio de amparo se instauró constitucionalmente con las reformas de mil ochocientos cuarenta y siete, pero su reglamentación no se dio hasta la ley respectiva publicada en el año de 1861.

En dicho juicio, Manuel Verástegui reclamó ante el Juez Pedro Sámano -quien se encontraba en funciones por ausencia del titular- la orden de aprehensión dictada por el Gobernador de San Luis Potosí; previo a dicho juicio, diferentes demandas de amparo se habían desechado en el país por no haberse creado un ordenamiento que legislara la figura que la Constitución sí preveía, sin embargo, el juzgador en un nuevo criterio, admitió la demanda con la intención de

proteger los derechos fundamentales de quien instaba la protección de la Justicia Federal, y determinó hacer efectivo el derecho contenido directamente en la Constitución, y suspender la ejecución de los actos reclamados como inconstitucionales.

Otro ejemplo de la gran vocación nacional de proteger los derechos fundamentales lo encontramos en la Constitución de 1917, que fue la primera en el mundo, en reconocer los derechos sociales a los individuos, lo que trajo importantes cambios en la Nación, que a la postre permearon en el sistema jurídico mexicano con la creación de tribunales laborales y agrarios, así como la instauración de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de grupos vulnerables.

En la época actual, con la Reforma Constitucional de 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió sus facultades como Tribunal Constitucional, lo que la llevó a tener un papel más participativo como órgano de Control Constitucional a través de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

Los anteriores actos legislativos, constituyeron verdaderos parteaguas que resultaron innovadores en su época que, una vez superados los retos para su implementación, generaron cambios trascendentales en la práctica judicial.

En la presente tesis, se invitará al lector a analizar la reforma a la Constitución de junio de 2011, la que considero, es aquella que abre un nuevo paradigma en la vida jurídica del país, tanto en derechos humanos como en los medios de control constitucional.

El tema que será eje de esta tesis, consiste en la afectación al sistema jurídico constitucional en el país -bajo la óptica del Derecho Procesal Constitucional- con motivo de dicha Reforma.

Así, se tratará de lograr un análisis detallado del modelo de control constitucional previo y posterior a la reforma constitucional, con el fin de dejar patente los cambios que en su caso pudieron derivar de su promulgación.

Con base en ese análisis, y por medio de un estudio interpretativo de la Constitución, la legislación ordinaria y las resoluciones de los organismos jurisdiccionales, se establecerá que el sistema de justicia constitucional en México antes de la reforma constitucional de 2011, era mixto, pero predominantemente concentrado, toda vez que carecía de la característica, que se estima medular e inherente al control difuso, consistente en que todos los órganos judiciales de un estado puedan ejercer un control constitucional y desaplicar una norma general, por estimarla contraria al texto constitucional, así como de la subsecuente característica del conocimiento de control constitucional vía excepción.

Luego, después de un estudio de la reforma constitucional de 2011, tanto en el marco constitucional, legal como jurisprudencial, se demostrará que el sistema de justicia continúa siendo híbrido o mixto, pero predominantemente difuso, pues ahora tiene más de los elementos principales de este último modelo, particularmente la característica esencial de que todos los jueces del país ejercen un control de constitucionalidad de las normas legales que aplican, aunado a que los mecanismos para ejercer dicho control son, con excepción de uno, de carácter concreto, y en su mayoría, la determinación de inconstitucionalidad de la ley solo tiene efectos para las partes y no generales.

Si bien la anterior hipótesis constituye el eje en la presente tesis, será necesario realizar un estudio histórico y comparativo de los diversos modelos de

control constitucional tanto nacionales como internacionales; así como un análisis a los medios de control constitucionales bajo su previsión en la Constitución en forma previa y posterior; y por último, un acercamiento a las decisiones de los tribunales de control constitucional, en específico, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder advertir si el alcance de sus sentencias efectivamente revelan la inclinación hacia el modelo difuso o concentrado.

Para llegar a la demostración antes apuntada, se utilizará *como método teórico* el *lógico-histórico*, al proyectarse la evolución del Control Constitucional en el país, apoyado también con el *método descriptivo* y el *método analítico*, al tratar de abordar en su totalidad el paradigma constitucional al que se enfrenta el sistema constitucional mexicano, en su totalidad como en forma particularizada; y también la presente tesis se apoyará en el *método comparativo*, al analizar los diversos sistemas constitucionales de otros países.

Asimismo, el *objeto* de la presente tesis lo es precisamente la afectación de la reforma Constitucional de junio de 2011, en el sistema de justicia constitucional mexicano, a la luz de la Constitución, los ordenamientos nacionales e internacionales y la jurisprudencia.

El *problema* que se plantea en la presente tesis consiste en la interrogante derivada de la reforma de junio de 2011, en el sentido de que si dicha modificación cambió el modelo de control constitucional imperante en México; en función de la forma en que se modificaron los medios de control constitucional, así como los tribunales respectivos.

La *hipótesis* que se plantea consiste, precisamente, en que la reforma constitucional modificó el modelo constitucional en uno mixto o híbrido, pero predominantemente difuso, y excepcionalmente concentrado.

Asimismo, como introducción se describen los capítulos que a continuación se verán.

En el capítulo I, denominado "Tipos de sistemas de control constitucional", se mostrará al lector las características de modelo de control constitucional, analizando así el de control concentrado, y se explicará que en dicho sistema cualquier cuestión de constitucionalidad recae en un solo órgano jurisdiccional denominado Tribunal Constitucional, mismo que se encarga de la aplicación e inaplicación de las normas, y en algunos casos, del control previo de su constitucionalidad, y como ideal no es solo integrado por juristas, sino por distintos expertos en diversas materias.

También se hablará del modelo de control difuso, en el que se analizará que, contrario del modelo concentrado, éste considera la figura del juez como máximo intérprete de la norma, siendo quien le da sentido a la ley y no el legislador.

Un tema interesante, y sobre el cual se hablará predominantemente en el desarrollo de la tesis, es respecto al modelo de control mixto, que como su nombre lo indica, es el modelo que tiene elementos del control concentrado y difuso, es decir, se tiene un Tribunal Constitucional que se pronuncia exclusivamente sobre las cuestiones de Constitucionalidad; sin embargo, existe también la posibilidad de que los jueces se pronuncien sobre la aplicación o inaplicación de las normas si estas se tildan de inconstitucionales.

En el capítulo II, denominado "*El control constitucional en México antes de la reforma constitucional de junio de dos mil once*", se realizará un estudio sobre el caso mexicano en cuanto a control constitucional, en específico, en forma previa a la reforma de junio de dos mil once.

En el capítulo respectivo, se revelará que el caso de México es una excepción al modelo de control concentrado, pues nuestra Constitución fue establecida bajo los matices del sistema Europeo y Estadounidense, por lo que contempla un modelo difuso a nivel Constitucional en su precepto 133; no obstante, dicho modelo, principalmente por la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no era implementado en su totalidad, sino que lo fue a raíz de la reformas de junio de 2011, cuando se estableció el denominado control de convencionalidad, que constituye una figura creada para darle un ámbito de aplicación a los modelos que permean nuestra Constitución.

En este apartado, se dará respuesta a una de las principales cuestiones que resultan esenciales para la hipótesis de la tesis, en específico, determinar con precisión el tipo de modelo que tenía el sistema de justicia constitucional en México antes de la reforma constitucional de 2011, con el fin de demostrar de que forma evolucionó en forma posterior a la reforma.

En el tercer capítulo de la tesis, denominado "*Reforma constitucional en México de junio de 2011*" se estudiará en forma profundizada dicha reforma constitucional, por medio de la cual el Estado Mexicano reconoció y se obligó a respetar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que es parte.

También se ponderará sobre dicha reforma, y se invitará al lector a reflexionar sobre la obligación surgida a partir de dicha modificación constitucional, que tienen todos los jueces del país de dejar de aplicar las normas ordinarias cuando estimen que son contrarias a los derechos humanos y preferir las contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia, lo que debe interpretarse como una ampliación de facultades a la autoridad judicial del fuero común para ejercer un control constitucional de que carecía antes de la mencionada reforma constitucional.

En el cuarto y último capítulo, denominado "*Transformación del sistema constitucional en México de carácter mixto predominantemente concentrado a mixto con acentuación difusa*", se observara que nuestro modelo constitucional actual se divide en dos vertientes, que lo son, el control directo de la Constitución por parte del Poder Judicial Federal, y el que se debe aplicar por el resto de los jueces de forma *ex officio* en los juicios de su competencia.

Posteriormente, se evidenciará la evolución del sistema jurídico mexicano, pues con anterioridad no se ejercía un control difuso de la Constitución por todos los jueces del país, sino solamente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, como máximo órgano del control constitucional; y, ahora, por las reformas de junio de 2011, si bien el control directo de la constitucionalidad sigue existiendo bajo el resguardo del Poder Judicial Federal, bajo sus diversos mecanismos de defensa, también lo es que los tribunales distintos a los que integran el Poder Judicial de la Federación pueden inaplicar las normas que estimen contrarias a los derechos humanos.

Finalmente , se hará un análisis del rol que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido como operador de derecho en el nuevo paradigma de derechos humanos, a la luz de la jurisprudencia y de las tesis aisladas que ha emitido en forma posterior a la multicitada reforma de junio de dos mil once; tratando de expresar la tendencia y la opinión del Máximo Tribunal como Tribunal Constitucional, con el fin de materializar los conceptos tratados en esta tesis, en la aplicación real que ha acontecido en los tribunales del país.

De igual forma, se realizará ese mismo estudio, respecto a los criterios que se estimen relevantes de los Tribunales Colegiado de Circuito.

Es con base en estos análisis que sustentan la presente tesis doctoral, con las que se espera realizar un estudio sobre el actual paradigma nacional acontecido por medio de la citada reforma constitucional; con el anhelo de poder reflejar el verdadero cambio que acontece en nuestro sistema jurídico para todos los operadores de derecho.

Capítulo I. Tipos de sistemas de control constitucional

1.1 Control constitucional difuso.

a) Antecedentes

El control constitucional difuso, también conocido como americano por comenzar a practicarse en los Estados Unidos de América, donde aún subsiste, se originó a través de la doctrina entre octubre de mil setecientos ochenta y siete y mayo de mil setecientos ochenta y ocho, a través de publicaciones en diversos periódicos de la ciudad de Nueva York, por tres autores –Alexander Hamilton, John Jay y James Madison-, quienes comentaron la estructura y el contenido de la Constitución recién creada de aquel país.

La reunión de esos artículos –junto con otros ocho- en forma de libro apareció bajo el título de “*El Federalista*”, en el cual destacan los comentarios de Alexander Hamilton relativos a las funciones de los tribunales, en el sentido de que: “*Defendió que éstos pudieran declarar nulos los actos de la Legislatura, bajo el argumento de que el poder del pueblo traducido en la formación de la Constitución, prevalece sobre las actividades tanto del Poder Legislativo como del Judicial.*”

Según Hamilton, la voluntad de los legisladores no puede contravenir a la del pueblo, es decir, la expedición de una ley inconstitucional es, al mismo tiempo, contraria a la voluntad popular. Por tanto, como en la propia Constitución se había establecido su supremacía –artículo VI, sección segunda-, los jueces debían preferirla a cualquier otra ley, con tal de no menoscabar las aspiraciones populares”¹.

¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Los Tribunales Constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, Tercera Edición, Aquarela Gráficos, México, 2014, pág. 41.

En mil setecientos ochenta y siete, durante la etapa de ratificación de la Constitución de los Estados Unidos de América, en el ánimo de la gente de las antiguas colonias no existía un concepto claro sobre el llamado *judicial review*. Para que no hubiera dudas sobre su sentido, de igual forma Alexander Hamilton publicó un artículo sobre este tema que fue coleccionado en “*El Federalista*”, para que así quedara demostrado que: “*en el Constituyente se discutió la facultad revisora de los actos legislativos y que esta institución formó parte de las ideas de varios constituyentes*”².

En este sentido, Alexander Hamilton, en el número LXXVIII de *El Federalista* manifestó, en lo conducente, lo siguiente:

“La independencia completa de los Tribunales de Justicia es particularmente esencial en una Constitución limitada. Por Constitución limitada entiendo la que contiene ciertas prohibiciones expresas aplicables a la autoridad legislativa, como, por ejemplo, la de no dictar decretos que impongan penas e incapacidades sin previo juicio, leyes retroactivas (ex post facto) y otras semejantes.

Las limitaciones de esta índole sólo pueden mantenerse en la práctica a través de los Tribunales de Justicia, cuyo deber es el declarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Constitución. Sin esto, todas las reservas que se hagan con respecto a determinados derechos o privilegios serán letra muerta.

El Derecho de los tribunales a declarar nulos los actos de la legislatura pensando que son contrarios a la Constitución, ha suscitado ciertas dudas como resultado de la idea errónea de que la doctrina que lo sostiene implicaría la

² Cabrera Acevedo, Lucio. *El Constituyente de Filadelfia de 1787 y la Judicial Review*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Edición, México, 2015, pág. 85.

*superioridad del Poder Judicial frente al Legislativo. Se argumenta que la autoridad que puede declarar nulos los actos de otra necesariamente será superior a aquella de quien proceden los actos nulificados. Como esta doctrina es de importancia en la totalidad de las constituciones americanas, no estará de más discutir brevemente las bases en que descansa.”*³

Cabe precisar que, el artículo VI, sección 2, de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América de mil setecientos ochenta y siete, textualmente dice: *“The Constitution, and the Laws of United States which be made in persuance thereof, and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States shall be bound the supreme Law of the Land; and Judges in every States shall be bound therey, anything in the Constitution or Laws of any State to Contrary notwithstanding.”*; lo cual se traduce en sentido de que: *“Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se arreglen a la misma y todos hechos, o que se hicieren, bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la Ley Suprema del Territorio; y los jueces de cada Estado se sujetarán a la misma, a pesar de que las Constituciones o leyes locales contemplen disposiciones en contrario.”*

Posteriormente, el control constitucional difuso o *“el también llamado sistema americano de control judicial de la constitucionalidad, surgió a partir de 1803, cuando la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, al fallar el caso Marbury vs Madison, declaró contraria a la Constitución una ley que creaba cargos judiciales de índole menor, ejerciendo así su facultad controladora de leyes, en atención a la supremacía de la Constitución, es decir, la revisión judicial de las leyes o judicial review”*.⁴

³ Hamilton, Alexander. *El Federalista*, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, pág. 322.

⁴ Reyes Reyes, Pablo E. *La acción de Inconstitucionalidad*, Editorial Oxford, México, 2000, pág. 92.

Esto es, el control difuso, como control de constitucionalidad de leyes, reconoce a la Constitución el carácter de Norma Suprema y le da a los jueces la función de velar por la protección de la misma. Al juez lo obliga la ley y por encima de ésta la Constitución. La gran confianza que existía en los jueces llevó a atribuirles el poder de ejercer el control de constitucionalidad como medio para mantener la supremacía de la Constitución. *“La revisión judicial surgió por la necesidad de limitar el poder de las legislaturas que sólo representaban los intereses de “las mayorías circunstanciales, irracionales y apasionadas”, en perjuicio de las minorías.”*⁵

En el sistema de revisión de la constitución, *-judicial review -*, inaugurado por el juez Marshall (quien aplicó el método difuso en el caso *Marbury versus Madison* en mil ochocientos tres en Estados Unidos de América) todos los jueces y todos los tribunales deben decidir sobre los casos concretos que les son sometidos de conformidad con la Constitución, desistiendo de la ley inconstitucional. Lo que constituye la verdadera esencia del deber judicial. Sin embargo, en este sistema de control de la constitucionalidad, este papel le corresponde a todos los tribunales y no a uno en particular, y no debe considerarse sólo como un poder, sino como un deber que les está impuesto para decidir sobre la conformidad de las leyes con la Constitución, inaplicándolas cuando sean contrarias a sus normas.

A fin de comprender el contexto histórico en que se dictó la sentencia referida en el párrafo que antecede, *-Marbury versus Madison-*,⁶ resulta necesario resaltar los hechos que motivaron a la misma y que en líneas generales fueron los siguientes:

⁵ Highton, Elena I. *Sistemas Concentrado y Difuso de Control Constitucional*, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, págs. 111-112.

⁶ Cabrera Acevedo, Lucio. *El Constituyente de Filadelfia de 1787 y la Judicial Review*. op. cit., págs. 83-88.

En los últimos años de su período presidencial, John Adams nombró, con la aprobación del Senado, a su anterior Secretario de Estado, John Marshall como Chief Justice (lo que se equipararía al Ministro Presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación) y a William Marbury para el cargo de Juez Federal del Distrito de Colombia. Una vez concluida la gestión de John Adams le sucedió a la presidencia Jefferson. Sin embargo, el decreto de nombramiento para el cargo de juez federal aún no se había otorgado a William Marbury.

Asimismo, no se le había entregado la credencial correspondiente a su cargo que había sido otorgada por el Secretario de Estado Madison, nombrado por el Presidente Jefferson, quien en realidad le había ordenado a éste que retuviera la credencial.

Ante tal situación, Marbury ejerció una acción judicial ante el Tribunal Supremo a fin de que se le notificara a Madison que cumpliera por la entrega de su nombramiento, invocando una ley (judiciary act de 1789), que permitía en casos semejantes expeditar los nombramientos.

Correspondió al juez Marshall emitir el fallo correspondiente en el que reconoció el nombramiento de Marbury y el derecho que le asistía de entregar dicha credencial y precisó que tal notificación no es un poder discrecional del Presidente o del Secretario de Estado, sin embargo, especificó también que según la Constitución de los Estados Unidos de América, el Tribunal Supremo es sólo una instancia de apelación, por lo que la ley invocada por Marbury (judiciary act de 1789), que estudiaba la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo para que éste emitiera órdenes a la Administración Federal, resultaba inconstitucional y el propio Tribunal Supremo que él presidía debía declararla inaplicable por esas consideraciones.

Debiendo precisarse que, en la sentencia *-Marbury versus Madison-*, se consideró, en lo conducente, *“que la Suprema Corte, que está obligada por el mismo artículo III constitucional a resolver todo caso o controversia que surja de la aplicación de las leyes federales y de la Constitución, decida y declare nula y sin vigencia la disposición contenida en el artículo 13 de la ley mencionada; Marshall es explícito: sólo el Poder Judicial de la Federación, sólo la Suprema Corte, puede hacerlo. La grandilocuencia con que lo anuncia representa una lección para Jefferson: después de demostrarle que ha violado la ley en detrimento de los derechos investidos en unos jueces de paz, no llega a asestarle el golpe político de una orden de mandamus, sino que Marshall retrocede y con toda humildad reconoce no tener competencia; pero, al hacerlo afirma -beneficio de las instituciones judiciales- que sólo los Tribunales Federales, y a la Suprema Corte en definitiva, les corresponde el ejercicio del control de la constitucionalidad de las leyes, el judicial review”*.⁷

Por lo que, conforme al propio texto de la sentencia en análisis, se sostiene la tesis de la supremacía constitucional y de la facultad de todos los jueces de desaplicar las leyes contrarias a la constitución, y se establece, sustancialmente, que cualquier norma que contravenga la Constitución permite al ciudadano promover ante los tribunales su anulación, por lo que los poderes del Poder Legislativo son controlables por la Suprema Corte. En la parte conclusiva de la citada opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, se establece: *“...la fraseología particular de la Constitución de los Estados Unidos confirma y refuerza el principio, que se supone esencial en todas las constituciones escritas, de que una ley contraria a la Constitución es nula, y que los tribunales, igual que las demás dependencias, están vinculadas a ese instrumento.”*⁸

⁷ González Oropeza, Manuel. *Constitución y Derechos Humanos, Orígenes del Control Jurisdiccional*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México, 2009, pág. 106.

Luego que pueda decirse que *“el control difuso nació al fallar el caso Marbury vs. Madison. John Marshall, presidente de la Corte a la sazón y autor de la sentencia, aclaró que el deber del juez estadounidense consistía en preferir la Constitución a cualquier otra ley, dado que aquélla controlaba todos los actos legislativos. Permitir la eficacia de una norma inconforme con el texto del que debía haber prevenido, implicaba destruir el principio de supremacía constitucional y, en consecuencia, acotar las libertades Civiles. Así, al estudiar un caso concreto que involucraba una ley inconstitucional, los jueces debían implicarla”*.⁹

En este sentido, *“el modelo americano, encarnado en la figura del juez John Marshall, Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1801 y 1835 y redactor de la célebre decisión Marbury vs Madison, es innato a la práctica jurisdiccional propia de los Estados Unidos de América, donde el mecanismo del control de constitucionalidad de las leyes no se encontraba expresamente previsto en el texto de la Constitución de 1787. La cuestión no había sido tratada de forma clara en los debates de los redactores de la Constitución, y el artículo III de dicho texto constitucional se limitaba a designar y transferir las competencias propias del poder judicial a un tribunal superior y a aquellos tribunales inferiores que el Congreso determinara, caso por caso, solicitar y establecer. El mecanismo actualmente conocido como judicial review es, por tanto, fruto de las circunstancias y de la labor asentada de la jurisprudencia norteamericana a lo largo de décadas. A través de la célebre decisión del Tribunal Supremo norteamericano de 1803, el poder judicial comenzaría a auto-habilitarse para ejercer de este modo el control de la constitucionalidad de las leyes.”*¹⁰

⁸ Cabrera Acevedo, Lucio. *El Constituyente de Filadelfia de 1787 y la Judicial Review.*, op. cit. págs. 121-128

⁹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Los Tribunales Constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, op. cit. Pág. 42.

La *judicial review* resalta a partir de la obra de Alexis De Toqueville denominada “*La Democracia en América*”,¹¹ quien al narrar el funcionamiento del Poder Judicial de los Estados Unidos de Norteamérica, señaló: “*Cuando un Estado de la Unión produce una ley de esa naturaleza (contraria a la Constitución), los ciudadanos lesionados por la ejecución de la misma pueden apelar a las Cortes Federales. Así, la jurisdicción de las Cortes Federales se extiende no solamente a todos los procesos que tienen su fuente en las leyes de la Unión, sino también a todos aquéllos que nacen de las leyes que los Estados particulares han confeccionado, contrarias a la Constitución.*”¹².

Algunos autores consideran que la jurisdicción constitucional tiene sus orígenes en el siglo XVII, con las controversias entre las leyes del Parlamento y las ordenanzas del Rey, particularmente en Inglaterra en 1806, cuando el juez Edward Coke, al resolver el caso del doctor Thomas Bonham, afirmó que el derecho natural (commom law) estaba por encima de las prerrogativas del rey, e incluso que estaba arriba del Parlamento inglés, con lo que expresó que aquéllos no eran ilimitados, sino el commom law, lo que posteriormente, opinan, le dio un sustento jurídico a las colonias inglesas para crear las bases del derecho constitucional en los Estados Unidos de América.¹³

Al respecto, Dowling nos dice que en el siglo XVIII, fue identificado en las colonias el common law, como una ley fundamental y con influencia de la Revolución inglesa así como del puritanismo, y que fue aceptada en dichas colonias la frase de Oliver Cromwell de que “*en cada Gobierno debe haber una*

¹⁰ Tusseau Guillaume. *Para acabar con los “modelos” de jurisdicción constitucional, un ensayo de crítica*, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Editorial Porrúa, México, 2011, pág. 17.

¹¹ De Toqueville, Alexis. *La Democracia en América*. Fondo de Cultura Económica, México, 1984, pág. 138.

¹² *Ídem*, pág. 139.

¹³ García Belaunde, Domingo. *De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional*, en *Derecho Procesal Constitucional*, FERRER MAC-GREGOR, Coordinador, Porrúa, México, 2001, págs. 303 y 304.

*ley fundamental, algo semejante a una Carta Magna, que sea legítima e inalterable.”*¹⁴

En este orden, se puede decir que el caso Marbury versus Madison es el más emblemático, aunque no el primero, para hablar del control constitucional difuso. El razonamiento jurídico del “*chief justice*” (ministro presidente) Marshall sobre este caso estableció el modelo a seguir en Estados Unidos de América para los jueces que se encontraran, en un proceso concreto, frente a un conflicto entre lo señalado en una ley ordinaria y lo establecido en la Constitución, en el cual el juez debe preferir a la Constitución y no aplicar la ley incompatible con la Norma Fundamental.

Así, el control constitucional ejercido por parte de los jueces en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes pone de manifiesto la justiciabilidad de que ningún acto legislativo contrario a la Constitución pueda ser válido (supremacía judicial). Si la Constitución es la norma de la cual se desprende el resto del orden jurídico y la función principal de los jueces es dar efectiva aplicabilidad a los derechos es decir, hacerlos justiciables, se entendería que éstos están obligados a ejercer permanentemente un control de constitucionalidad.¹⁵

Acorde a lo anterior, Gerardo Eto Cruz considera que “...*inicia formalmente el modelo de jurisdicción constitucional americano, en oposición al modelo europeo que se expresa en un órgano concentrado: El Tribunal Constitucional...*”¹⁶ es decir, esta sentencia, se toma como punto de partida para el control difuso de la Constitución.

¹⁴ Dowling, Noel. *Cases on Constitutional Law*. Fourth Edition, Brooklyn, 1950. pág. 14.

¹⁵ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *El Control de convencionalidad y el Poder Judicial en México, mecanismo de protección nacional e internacional de los derechos humanos*, México, pág.51

¹⁶ Eto Cruz, Gerardo, *John Marsahall y la sentencia Marbury vs. Madisón*. FERRER MAC-GREGOR, Coordinador, *Derecho Procesal Constitucional*, Cuarta Edición, Porrúa, México, 2003, pág. 58.

b) Características que las distinguen.

Enrique Carpizo Aguilar caracteriza al control difuso de una manera simplificada afirmando que: *“el control difuso o americano permite a los jueces locales inaplicar una norma que contravenga el texto constitucional; y sus parámetros de referencia son: a) la Carta Magna; b) la costumbre; y; c) la interpretación judicial preexistente.”*¹⁷

En el mismo sentido se pronuncia Elena Highton, quien sostiene que *“en el sistema de control difuso, el juez tiene el deber de realizar una interpretación para llegar a un juicio con respecto a la constitucionalidad de la norma. La decisión del juez ordinario es tan legítima como la decisión del Supremo Tribunal, ya que tanto el juez ordinario como el Supremo Tribunal, tiene legitimidad constitucional para tratar de la cuestión de constitucionalidad.”*¹⁸

Agrega Tausseau Guillaume, que: *“El control de constitucionalidad de las leyes es descentralizado o difuso, dado que éste le es confiado a todos los tribunales –federales o estatales-, con independencia de cuál fuera su posición en el organigrama de las instituciones jurisdiccionales y con independencia del tipo de litigio del que se ocuparan.”*¹⁹

Tal característica de multiplicidad de órganos a quienes se les ha encomendado la misión de velar por la Constitución es reconocida también por Pérez Lozano, quien sostiene que: *“El control difuso se distribuye entre varios órganos judiciales ordinarios, por virtud del cual se logra ajustar a la ley suprema*

¹⁷ Carpizo Aguilar, Enrique. *El control constitucional y el convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos*, op. cit., págs. 23-24.

¹⁸ Highton, Elena I. *Sistemas Concentrado y Difuso de Control Constitucional*, op. cit., pág. 113.

¹⁹ Tusseau, Guillaume. *Para acabar con los “modelos” de jurisdicción constitucional, un ensayo de crítica*, op. cit., pág. 17.

del país los actos y leyes de los poderes públicos. Es conocido como sistema americano de control de la Constitución, que permite a un juez ordinario determinar la inconstitucionalidad de una ley y su inaplicación.”²⁰

Por su parte, Alberto Castillo del Valle considera que: *“Quienes afirman que la Ley Fundamental consagra esta clase de control (difuso) sostienen su postura en que los jueces tienen no sólo la facultad, sino la obligación de juzgar si la ley, que una de las partes invoca, en cierto litigio, como fundamento de sus peticiones y que la otra tilda de inconstitucional, es o no acorde con los mandamientos relativos (e incluso decidir sobre la aplicación preferente de la ley federal en vez de la local en el caso concreto), para negarle la obediencia y no aplicar dicha ley inconstitucional o transgresora de la competencia federal, pues sería ilógico y anti jurídico pretender que se cumpliera con esa obligación si no tuvieran a la vez la facultad correlativa de discernir si las leyes se ajustan o no a la Constitución, por lo que aceptar la tesis contraria sería imponer a los jueces un deber sin darles los medios necesarios para cumplirlo, máxime que el artículo 128 de la propia Constitución Federal impone que todo funcionario público antes de tomar posesión de su encargo deberá protestar guardar la Carta Magna y las leyes que de ella emanen.”²¹*

Respecto al mismo tópico, Jaime Flores Cruz establece, en relación a los puntos distintivos del control constitucional difuso, que: *“El sistema americano consiste principalmente en el reconocimiento a los juzgadores, sea cual sea su categoría, de no aplicar las leyes secundarias que consideren contrarias a la Constitución, más el efecto de dicha declaratoria de inaplicabilidad es únicamente para el caso en concreto, ya que la resolución dictada surte efectos sólo entre las partes que plantearon la controversia, aunque esta barrera puede ser eliminada a*

²⁰ Pérez Lozano, Andrés. *El Control de Convencionalidad en el Sistema Jurídico Mexicano*. Editorial Novum. México, 2011, págs. 63-64.

través del principio stare decisis o “doctrina de los precedentes”, que señala que las decisiones tomadas en casos particulares adquieren obligatoriedad en los casos análogos siguientes, por lo que materialmente adquieren efectos generales.

En otras palabras, la particularidad de este sistema de control constitucional consiste en dotar a todo el aparato judicial de la vigilancia, cumplimiento y observancia del texto constitucional, es decir, se deposita la confianza a todos los tribunales, para hacer valer la Constitución, como norma superior a cualquier otra emanada en el Parlamento, por lo que en el caso de que esta última sea contraria a la Carta Magna, los tribunales no están obligados a cumplirla.

De lo anterior podemos concluir que a este sistema se le denomina difuso, por las razones siguientes:

1.- Porque habilita a los juzgadores, sin importar su jerarquía, para inaplicar una ley que se considere contraria a la Constitución;

2.- Porque la resolución de las cuestiones constitucionales no se distingue de la jurisdicción ordinaria.

El punto medular es la supremacía de la Constitución, de ahí que lo importante sea defenderla a cualquier nivel y en cualquier materia, sin la necesidad de un órgano especializado en la resolución de conflictos meramente constitucionales. Los tribunales son los órganos encargados de decidir el derecho aplicable y de mantener el control constitucional de los actos de poder, esto es, corresponde a los tribunales interpretar y aplicar la Constitución.

²¹ Castillo del Valle, Alberto. *La Defensa Jurídica de la Constitución en México*, Grupo Herrero, México, 1994, pág. 38.

Los Jueces ordinarios, pueden aplicar directamente la Constitución, por lo que pueden dejar de aplicar la ley, lo que tiene su sustento en la supremacía de la propia Constitución y en la confianza que se tiene hacia los jueces, como su aplicador natural.

Lo anterior, se sintetiza de la forma siguiente:

1.- La Constitución es la norma básica; toda norma que está en contra de la misma es nula, por lo que se debe aplicar la primera.

2.- Los Tribunales aplican la ley, por lo tanto, todos los Tribunales ordinarios deben aplicar la Constitución.

3.- Se otorgan a las sentencias efectos interpartes, en un principio, luego se les da efectos erga omnes.²²

Así, se puede decir que el sistema de control constitucional difuso tiene las siguientes características sustanciales que lo distinguen:

- a) Otorga exclusivamente a los órganos jurisdiccionales la facultad de estudiar la constitucionalidad de una ley o acto,
- b) Le es confiado a todos los tribunales- federales o estatales-, con independencia de cuál es su posición en el organigrama de las instituciones jurisdiccionales y con independencia del tipo de litigio del que se ocuparan.
- c) Es concreto, dado que el juez decide acerca del valor de

²² Flores Cruz, Jaime. *Interpretación Constitucional y Control sobre Órganos de Control Constitucional*, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, 2006, págs. 11-13

constitucionalidad con ocasión de la aplicación de una ley o de una norma a un caso particular, por lo que siempre se ejerce en el marco de un litigio que se presenta entre varias partes. En este sentido, la Constitución norteamericana tan solo confiere competencia al poder judicial cuando específicamente se trate de “cases or controversies”.

- d) La cuestión de constitucionalidad se examina por vía de excepción; es decir, al Juez no se le interroga directamente y exclusivamente acerca del problema de la constitucionalidad de una norma, sino que, por el contrario, su intervención es requerida con ocasión de un litigio en el que una de las partes pone en duda la constitucionalidad de una determinada norma. La cuestión de constitucionalidad resulta ser por tanto accesorio y, en cualquier caso, anterior a la resolución del litigio.
- e) La decisión sobre la cuestión de constitucionalidad de las leyes- tanto si la misma concluye con la inconstitucionalidad de la norma encausada como con su constitucionalidad- tiene únicamente valor inter partes. Esto último quiere decir que si la inconstitucionalidad es constatada, la norma encausada podrá resultar inaplicable a un caso concreto y en aquellos supuestos específicos en los que se planteara el problema; por el contrario, cuando se den otras hipótesis, la misma norma se considerará válida y podrá ser perfectamente aplicada.
- f) El control de constitucionalidad de las leyes en este modelo se ejerce a posteriori, siempre que se trate de una norma ya promulgada y que se encuentra ya en vigor.

c) Marco Conceptual

Mauro Capelleti al examinar los dos grandes sistemas de control jurisdiccional, desde el punto de vista subjetivo (relativo a los órganos judiciales a los que se encomienda dicho control) identifica al difuso como *“aquel en el cual el poder de control corresponde a todos los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico dado, que lo ejercitan incidentalmente, con ocasión de la decisión de las causas de su competencia.”*²³

Agregando Capelleti que, en el control difuso, *“Todos los órganos judiciales, inferiores o superiores, federales o estatales, tienen como se ha dicho el poder y el deber de no aplicar leyes inconstitucionales.”*²⁴

El control difuso se traduce en la facultad que tienen todos los órganos jurisdiccionales, en vía de excepción, de estudiar la constitucionalidad de normas generales, especialmente, y omitir su aplicación en un caso concreto o, si se tratase de actos stricto sensu, declarar la nulidad; así, quienes afirman que la Ley Fundamental consagra esta clase de control sostienen que: *“los jueces tienen no sólo la facultad, sino la obligación de juzgar si la ley, que una de las partes invoca, en cierto litigio, como fundamento de sus peticiones y que la otra tilda de inconstitucional, es o no acorde con los mandamientos relativos (e incluso decidir sobre la aplicación preferente de la ley federal en vez de la local en el caso concreto), para negarle obediencia y no aplicar dicha ley inconstitucional o transgresora de la competencia federal, pues sería ilógico y antijurídico pretender que se cumpliera con esa obligación si no tuvieran a la vez la facultad correlativa de discernir si las leyes se ajustan o no a la Constitución, por lo que aceptar la*

²³ Capelleti, Mauro. *La justicia constitucional (estudios de derecho comparado)*. UNAM. Facultad de Derecho, México 1987, pág. 60.

²⁴ *Ibidem*.

*tesis contraria sería imponer a los jueces un deber sin darles los medios necesarios para cumplirlo.”*²⁵

En este sentido, de igual forma se establece que: *“Se trata de un tipo de control (difuso) que permite a cualquier juez, sin importar su fuero, defender la constitucionalidad de las leyes. En otras palabras, todo juez debe, ante un caso concreto, inaplicar una ley inconstitucional y fallar mediante una sentencia con efectos relativos, es decir, vinculantes sólo para las partes en conflicto. En síntesis, es un control difuso, incidental, especial y declarativo”.*²⁶

Así, el sistema americano o difuso consiste en la facultad de los jueces, sea cual sea su categoría, de no aplicar leyes que consideren contrarias a la Constitución, con la particularidad de que el efecto de la declaratoria de inaplicabilidad es únicamente para el caso concreto motivo de análisis, por lo que surte efectos sólo entre las partes que plantearon la controversia.

En este sistema el examen de validez lo puede llevar a cabo cualquier juez respecto a un caso concreto que se le pueda presentar. En el supuesto de estimar que cierta disposición es inconstitucional, sólo puede desaplicar la disposición del caso concreto, resolviendo como si ésta no existiera, sin hacer una declaración de inconstitucionalidad de la ley. Cabe precisar que esta limitante se matiza de cierta manera si se considera la “doctrina de los precedentes”, a través de la cual las decisiones tomadas en casos particulares adquieren obligatoriedad en los casos análogos siguientes, por lo que materialmente adquieren efectos generales.

En el control difuso de la constitucionalidad se ha conceptualizado *“en la posibilidad de los jueces de simple legalidad decidan, de acuerdo con el propio*

²⁵ Suárez Camacho, Humberto. *El Sistema de Control Constitucional en México*, Editorial Porrúa, Cuarta Edición, México, 2014, pág. 47.

²⁶ Suprema Corte de Justicia de la Nación. *Los Tribunales Constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, op. cit., págs. 44-45.

principio de supremacía constitucional, aplicar un dispositivo constitucional en lugar de una ley secundaria o, en otras palabras, decidir sobre la constitucionalidad de leyes secundarias, para la resolución de casos concretos de su competencia.”²⁷

Una de las ventajas de este sistema es que la cuestión de constitucionalidad de las normas es resuelta no de manera puramente hipotética y sin información sobre la manera en que la norma en cuestión pudiera ser aplicada, sino que es resuelta en el momento mismo en el que se plantea la controversia en cuestión, en la que el juez, salvo que estime inconstitucional la norma, deberá aplicarla al caso concreto.

Precisándose respecto al control difuso, que “*el principal inconveniente que encontramos consiste en que dicho método puede poner seriamente en peligro la seguridad jurídica. Dado el efecto relativo de las decisiones jurisdiccionales, el modelo jurisdiccional americano deja abierta la posibilidad de que una norma declarada inconstitucional por un tribunal en un caso concreto fuera, por el contrario, considerada constitucional en otro caso diferente o por otro tribunal en un caso similar. Asimismo, el hecho de que la decisión judicial intervenga siempre a posteriori expone a cualquier norma a poder ser declarada inconstitucional más adelante, incluso cuando la misma hubiera producido sus efectos durante varios años y, lo que es más significativo, incluso cuando ésta hubiera producido ya una serie de derechos en beneficio de los individuos*²⁸.”

²⁷ Garza García, César Flores Carlos. *Derecho Constitucional Mexicano*. Editorial McGraw-Hill, México, 1977, pág.181.

1.2 Control constitucional concentrado

a) Antecedentes.

En Europa, el papel de los jueces en la sociedad derivó de ideas filosóficas que detonaron movimientos sociales relevantes, entre otros de Rousseau y Montesquieu. En esa época se aceptaba la preeminencia del órgano legislativo como único depositario de la voluntad general por lo que no se contemplaba la posibilidad de que los jueces cuestionaran las leyes, sino que a ellos les correspondía aplicarlas, no criticarlas. Según Montesquieu *“los jueces de la nación no son (...) más que el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes.”*²⁹

La implementación de tribunales constitucionales, entendidos como organismos jurisdiccionales especializados y autónomos, ajenos al poder judicial, comenzó en la Constitución de la entonces Checoslovaquia.

No obstante el modelo a seguir de la justicia constitucional en Europa lo fue el tribunal constitucional austríaco, creado en la constitución de ese país de 1920, a instancia del jurista Hans Kelsen.

En 1874 en Suiza se aprobó una Constitución que estableció un sistema confederal que evolucionaría progresivamente hacia el federalismo, y para asegurar la supremacía de la Federación sobre los cantones, se introdujo la posibilidad de que una Sala del Tribunal Supremo anulara las leyes cantonales; y esa técnica fue recogida por Alemania en la Constitución de Weimar de 1919.

²⁸ Tusseau, Guillaume. *Para acabar con los “modelos” de jurisdicción constitucional un ensayo de crítica, op. cit.*, págs. 19-20.

²⁹ Montesquieu. *Del espíritu de las leyes*, trad. Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Barcelona Altaya, 1987, pág. 120.

En 1919, la actual República Federal de Austria, se independizó del Reino de Austro-Hungría; y en 1920, emitió su nueva Constitución, en la que se plantea igualmente la conveniencia de crear un tribunal que pudiera anular las leyes de los estados federados que fueran contrarias a la Constitución. Pero en este país surge la diferencia, de que el tribunal no sólo podía conocer de la inconstitucionalidad de las leyes de los Lander (provincias), sino también las leyes de la Federación si no respetaban el régimen de distribución de competencias establecido por la Constitución; además de que dicha constitución austriaca permitió al Tribunal Constitucional enjuiciar las leyes cuando en cualquier proceso del que entendiera tuviera que aplicar una ley inconstitucional.³⁰

Fue Kelsen, a quien se le encomendó la elaboración de la Constitución para la novel república, quien elaboró diversos proyectos con lo que se tomaban diversas posibilidades políticas. La elaboración de la Constitución austriaca de 1920, y la introducción del enjuiciamiento de leyes con base en la Constitución, fue la creación pionera del mundo, de un Tribunal Constitucional que iba a tener la potestad de impartir justicia en materia constitucional³¹.

Así, *“la tendencia contraria al control difuso se concretó en 1920 al expedirse la Constitución austriaca, proyectada por Kelsen, donde se previó instalar un Tribunal Constitucional dedicado a resolver, de modo exclusivo – concentrado-, las cuestiones de inconstitucionalidad, de manera principal y a través de sentencia con efectos erga omnes”*.³²

El control concentrado se le conoce como modelo austriaco o modelo europeo; austriaco, en atención al país en el que por primera vez se planteó la

³⁰ Tajadura Tejeda, Javier. *La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional*, Volumen I, pág. 955.

³¹ Eto Cruz, Gerardo. *Derecho Procesal Constitucional*, págs. 83 y 84.

³² Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Los Tribunales Constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, op. cit., pág. 46.

creación de un tribunal constitucional, y europeo, por el continente que lo adoptó y desarrolló (en varios de los países que lo integran).

De esta manera, el control constitucional de las leyes se introdujo en Europa como fórmula para resolver los conflictos que enfrentaban la Federación y los Estados de manera concentrada, en aquellas naciones en donde la Constitución establecía un sistema federal. Esto es, un sistema de control constitucional concentrado.

Kelsen, en su obra, *Teoría General del Derecho*, a la par de establecer una teoría del Estado federal constituido por los conceptos de la centralización y la descentralización de un orden jurídico, planteó la problemática de que casi todas las constituciones modernas privan a los jueces y demás órganos encargados de la aplicación de las leyes, la facultad de examinar la constitucionalidad de dichos ordenamientos generales respecto a su creación y, en consecuencia, les negaban posibilidad de declararlas nulas cuando consideraran que eran inconstitucionales. En contraposición, mencionó a las constituciones democráticas-republicanas, en las que existía de modo ilimitado el derecho judicial de examinar la constitucionalidad de la ley, en las que se le atribuía a una “jurisdicción constitucional” la misión de suspender o anular las leyes anticonstitucionales.³³

Kelsen influyó en la redacción de la Constitución Austriaca de 1920, en lo que respecta, entre otros puntos esenciales, en la jurisdicción constitucional, pues por sugerencia de él, en el artículo 140 de dicho ordenamiento constitucional, se estableció, la competencia del tribunal constitucional para examinar de oficio leyes que el propio tribunal constitucional tiene que aplicar en otro contexto; competencia que le permitió al tribunal constitucional desarrollarse y transformarse de un mero árbitro entre la Federación y los Lander – como originalmente se había

³³ Kelsen, Hans. *Teoría General del Estado*, Editorial Labor, trad. Luis Lagaz y Lacambra, Editorial Nacional, México, 1934. págs. 332 y 333.

concebido por los legisladores austriacos-, a un guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales.³⁴

Al principio, el control derivado de las constituciones, correspondía a un solo Tribunal, y no a los jueces ordinarios porque éstos seguían sometidos al principio de legalidad, y los únicos órganos legitimados para recurrir las leyes eran los gobiernos de la Federación o de los Lander o Cantones.

Posteriormente, se extendió la idea de atribuir a los tribunales constitucionales la facultad de anular toda ley que fuera contraria a la Constitución, por cualquier razón y no sólo por vulnerar la distribución de competencias.

La doctrina de Kelsen se sustentaba en que debía encargarse la anulación de los actos inconstitucionales a un órgano diferente e independiente del Parlamento, así como de cualquier otra autoridad estatal, esto es, a una jurisdicción o tribunal constitucional, la que no debería considerarse que estuviera en contradicción del principio de separación de poderes, sino que se trataba de una afirmación de éste, pues la actividad del legislador negativo, propia de la jurisdicción constitucional, está absolutamente determinada por la Constitución, debido a que constituye principalmente a la aplicación del derecho y solamente en una débil medida, a la creación del derecho. Kelsen atribuía a la jurisdicción constitucional el conocimiento de la regularidad de todos los actos inmediatos subordinados a la Constitución.³⁵

El sistema de control constitucional introducido por Kelsen, en la Constitución austriaca se presentó como una vía para superar las que el citado

³⁴ Ohlinger, Theo. *Hans Kelsen y el Derecho Constitucional Federal Austriaco. Una retrospectiva crítica*. FERRER MAC-GREGOR, coordinador. Editorial Porrúa, México, 2001, págs. 219 y 230.

³⁵ Kelsen, Hans. *La Garantía Jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional)*, UNAM, México, 2001, págs. 53 a 63.

autor consideraba evidentes imperfecciones técnicas o mecanismos jurídicamente imperfectos del sistema *judicial review*, que tenía el mismo fin.³⁶

En este sentido, Hans Kelsen, quien fue miembro del Tribunal Constitucional de Austria hasta su fin en mil novecientos treinta y tres; sostuvo la tesis consistente en que *“anular una ley equivale a establecer una norma general, puesto que la anulación de una ley tiene el mismo carácter de generalidad que su confección. No siendo, por así decirlo, más que una confección con signo negativo, la anulación de una leyes, entonces, una función legislativa y el tribunal que tiene el poder de anular las leyes es, por consiguiente, un órgano del Poder Legislativo.”*³⁷

En relación a lo anterior, Kelsen agregó: *“Las imperfecciones y la insuficiencia de una anulación limitada al caso concreto son evidentes. Sobre todo la falta de unidad de las soluciones y la inseguridad que desagradablemente se hacen sentir cuando un tribunal se abstiene de aplicar un reglamento, o incluso, una ley por irregulares, mientras que otro tribunal hace lo contrario... La centralización del poder para examinar la regularidad de las normas generales, se justifica ciertamente en todos los aspectos. Pero si se resuelve en confiar este control a una autoridad única, entonces es posible abandonar la limitación de la anulación para el caso concreto en favor del sistema de la anulación total, es decir, para todos los casos en que la norma hubiera tenido que ser aplicada. Se entiende que un poder tan considerable no puede ser confiado sino a una instancia central suprema.”*³⁸

³⁶ Judicial Review of Legislation. *A comparative Study of the Austrian and the American Constitution. The Journal of Politics*. 1942, Volumen 4, pág. 192. Citado por Marian Ahumada. *La Jurisdicción Constitucional en Europa. Bases Teóricas y Políticas*. Editorial Civitas. 2005.

³⁷ Kelsen Hans, *La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)*, op. cit. pág. 22.

³⁸ *Ibidem*.

Kelsen fue enfático en precisar que la anulación de una ley constituye una facultad de legislación negativa, por lo que quien la ejerciera debía ser un Tribunal, en virtud de su independencia frente al Parlamento como frente al gobierno, puesto que son precisamente el Parlamento y el gobierno, en tanto que constituyen órganos participantes del procedimiento legislativo, los que deben estar controlados por la jurisdicción constitucional.

Carl Schmitt presentó una postura diferente, toda vez que él indicaba que a la hora de confrontar, según el esquema de Kelsen, la ley ordinaria con la ley constitucional, consideraba que el hecho de que el Tribunal Constitucional pueda dictaminar sobre la validez o invalidez de una ley aunque su decisión se adopte conforme a un procedimiento judicial implica, en palabras de Schmitt, una invasión clara de la justicia en la legislación que a lo único que conduce es a la destrucción del principio orgánico de distribución del poder, manifestando que ninguna ficción, por extrema que fuese, podría impedir que cualquier persona considerara semejante Tribunal como una instancia política, y lo valorara como tal.

Dicho con otras palabras, Schmitt consideraba que con el control de normas la jurisdicción constitucional transgrede los límites de la propia función jurisdiccional; ésta tiene que interpretar normas generales que le vienen dadas por un legislador vinculante, en tanto que un juicio sobre las mismas leyes - simplemente a causa de la indeterminación de las normas constitucionales- es una decisión política.

Al respecto, Carl Schmit sostuvo que para evitar la politización de la justicia y mantener vigente el principio de distribución del Poder, debía atribuirse la función de defensa de la Constitución al jefe del Estado plebiscitado directamente por el pueblo e independiente de los partidos. A la hora de buscar un defensor de la Constitución, *"no se aspira tanto a una instancia judicial como a una instancia neutral e independiente, pues sólo se desea utilizar el carácter judicial como el*

medio más seguro y evidente de conseguir una independencia garantizada por los preceptos constitucionales" ³⁹

En cuanto al debate Kelsen-Schmitt la doctrina concluye sin dificultad que Kelsen configura su modelo de justicia constitucional concentrado como el supremo sistema de defensa jurídica de unas constituciones liberales garantistas y limitadoras de la acción de los poderes públicos, cuyo propósito no es otro que garantizar la supervivencia de una idea de Constitución.

Al respecto, Pedro de Vega, con la siguiente definición, se inclina más por el modelo kelseniano: *"...o bien considerar que los Tribunales Constitucionales, como guardianes y supremos intérpretes de la Constitución asumen con independencia absoluta la interpretación de una normativa ambigua, en cuyo caso, en cuanto legisladores negativos, en buena medida pasan a ocupar el lugar del Parlamento, lo que el mismo Kelsen criticaba con dureza; o bien entender que los Tribunales Constitucionales, condicionados por presiones políticas, o autolimitados por renunciias propias, establecen un modus operandi de compromiso con el resto de los poderes del Estado, en cuyo supuesto su condición de órganos independientes y de guardianes de la Constitución queda definitivamente lastimada."* ⁴⁰

Por su parte, Tajadura Tejada estima que la historia de los últimos cincuenta años se ha encargado de resolver el dilema entre Kelsen y Schmitt, y lo ha hecho de una forma notablemente satisfactoria, aunque planteando, a su vez, nuevos y complejos problemas, pues estima que la justicia constitucional ha contribuido a la consolidación de numerosos regímenes democráticos y ha permitido configurar de forma real y efectiva los textos constitucionales como auténticas normas jurídicas supremas, y señala que, para alcanzar dichos

³⁹ Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución, Editorial Nacional, México, 1966, pág. 48.

resultados los tribunales constitucionales han abandonado hace ya mucho tiempo su condición de legislador negativo. Los tribunales constitucionales son hoy legisladores positivos en la medida en que a través de lo que comúnmente se conoce como sentencias intermedias, crean auténticas normas jurídicas.⁴¹

La consolidación de los tribunales constitucionales se hizo evidente con el paso de los años, pues aun cuando el Tribunal Constitucional de Austria sucumbió bajo los ataques del totalitarismo nazi en 1933, los tribunales constitucionales checoslovaco (1920), austriaco (1920) y español (1931), fungieron como precedentes a partir de la Segunda Guerra Mundial, para el modelo de defensa de la Constitución ideado por Kelsen, es decir, un Tribunal Constitucional se impuso definitivamente en la mayor parte de los Estados democráticos europeos.

Esto es así, pues la primera y principal preocupación de las nuevas constituciones, lo fue establecer garantías de su aplicación y del respeto de su contenido por el legislador, lo que aconteció con el restablecimiento de los tribunales constitucionales en la Constitución Austriaca de 1945.

Asimismo, las Nuevas Constituciones democráticas de Italia (1948), y en la República Federal de Alemania (1949), establecieron Tribunales Constitucionales que podían anular las leyes contrarias a las normas constitucionales de cualquier tipo.⁴² Posteriormente, comenta Favoreu, los antecedentes históricos de la Justicia Constitucional en Francia, con el *Conseil constitutionnel*, previsto por la Constitución de 1958 con funciones limitadas, y Bélgica con la *Cour d'arbitrage*. Asimismo, en Chipre (1960), en Turquía (1961) y en Yugoslavia (1963), se instauraron sistemas de justicia constitucional concentrados en un tribunal. Luego, con el fin de los regímenes dictatoriales, se consolidaron en Portugal (Constitución

⁴⁰ De Vega, Pedro. La Defensa de la Constitución: estudio acerca de las diversas especies de salvaguardia de la Constitución. Editorial Tecnos, 2ª. Edición, España, pág. 78.

⁴¹ Tajadura Tejeda, Javier. *La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional*, op.cit. pág. 957.

⁴² Tajadura Tejeda, Javier. *La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional*, op. cit., pág. 957.

de 1976 revisada en 1982), en España (Constitución de 1978) y en Grecia (1975), y con la culminación de los regímenes socialistas, en varios países de Europa occidental también comenzó a surgir la justicia constitucional, como en el caso de Polonia (1985) y de Hungría (1989). Posteriormente se implementaron tribunales constitucionales en Rusia, Bulgaria, Lituania, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Eslovenia, Croacia, Albania, Moldavia, Letonia y Estonia. Por último, la justicia constitucional bajo un modelo concentrado fundado en un tribunal constitucional se estableció en Asia, principalmente en Tailandia, Corea del Sur, algunos Estados surgidos con motivo de la desaparición de la URSS y en África en algunos de los países de influencia francesa como Argelia, Marruecos y Túnez.⁴³

En los últimos años, según investigaciones del Instituto Iberoamericano,⁴⁴ el Tribunal Constitucional -partiendo de una base de modelo austriaco de control concentrado de la constitucionalidad de leyes- se ha convertido en una instancia irrenunciable para las democracias, como medio de resolución de controversias entre titulares del poder estatal y como un control de actuación para el legislador en nombre de la constitución, superando las ideas de la soberanía parlamentaria y de la irreversibilidad de la ley.

Como antecedente de tales principios, se encuentra la Declaración sobre la Justicia Constitucional aprobada por el Consejo sobre la Justicia Constitucional en el Derecho Comparado, efectuada en mayo de 1992 en Antigua Guatemala, donde se estableció lo siguiente:

1. *“La existencia de una justicia constitucional se ha convertido en un elemento esencial de la garantía de la libertad y de los otros derechos fundamentales. Ello postula en primer lugar la existencia de*

⁴³ Favoreu, Louis. *Los Tribunales Constitucionales*, Editorial Ariel, Barcelona, 1994, pág. 14.

procedimientos específicos y eficaces tales como para asegurar la protección inmediata de tales derechos ya sea en relación con las normas...ya sea en relación con los actos inconstitucionales de los poderes públicos o de los sujetos privados...”

2. *“La eficacia de esta garantía presupone que sea atribuida a otra institución del Estado la competencia necesaria para controlar jurídicamente, como instancia final, la conformidad a la Constitución de los actos emanados ya sea de los otros poderes o de los sujetos privados. –eso implica la existencia de un órgano especializado de justicia constitucional, pudiendo éste constituir un tribunal autónomo o ser una sección especializada de una corte suprema.”*⁴⁵

b) Características principales.

El control constitucional concentrado, o también conocido como control constitucional "austriaco", debido a su origen derivado de la Constitución austriaca de 1920, implica la atribución a un órgano especializado denominado corte o tribunal constitucional, y cuya naturaleza -que es objeto de debate- es resolver todas las cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes, que no pueden ser resueltas por jueces ordinarios.

Este sistema de control constitucional se deposita en un solo órgano con integración y funciones específicas que además, no forma parte de alguno de los poderes. *“En este sistema, a diferencia del americano, sí existe un contencioso constitucional. Mientras que el control difuso se produce con independencia del tipo de conflicto sometido al conocimiento de un juzgador, en el sistema*

⁴⁴ Instituto Iberoamericano. *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Proceso y Constitución*, Número 1, Editorial Porrúa, México, 2004, pág. 7.

⁴⁵ *Ibidem*.

concentrado el asunto debe ser del orden constitucional. Asimismo, es abstracto, pues los casos a resolver por el Tribunal Constitucional no entrañan una controversia jurídica entre dos partes. De hecho, el tribunal se limita a declarar, con efectos generales, si una ley se adecua o no a los postulados de la Constitución, previo estudio de medios procesales o procedimentales que sólo pueden promover órganos políticos.”⁴⁶

El control concentrado puede calificarse así, en virtud de que su naturaleza radica en que es a un solo órgano al que corresponde determinar si una ley o un acto son o no, constitucionales; así mismo tiene las características de principal, general y constitutivo, esto es, *“principal en tanto que el punto a dirimir no se desprende de una controversia, sino que es la controversia misma. En tercer término, la generalidad responde al alcance de los fallos, que pueden generar no una simple inaplicación, sino la desaparición de una ley del orden normativo, circunstancia válida para todas las personas que se ubicaban bajo los supuestos de aplicación de leyes desaparecidas. Finalmente, se trata de un control constitutivo porque da lugar a sentencias constitutivas, que fijan una nueva situación de derecho, distinta de la previa y con efectos para el futuro.”⁴⁷*

Este modelo de justicia constitucional solamente acepta el realizado por vía de acción, pues al efecto *“los juzgadores no tienen ni pueden tener la facultad de examinar si las leyes secundarias cuya inaplicación les pide una de las partes en un juicio ordinario son o no constitucionales, pues si tuvieran esa atribución vendría el caos en la administración de justicia, en razón de que se permitiría que se resolvieran, en un procedimiento de legalidad, cuestiones tan complejas como pueden llegar a serlo las constitucionales, además de que se dejaría a su libre*

⁴⁶ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Los Tribunales Constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, op. cit., pág. 47.

⁴⁷ *Ibídem*.

arbitrio la facultad de cumplir o no con la ley, bajo el pretexto de considerarla contraria a la Constitución.”⁴⁸

Guillaume Tusseau establece cuatro características definidoras del control concentrado, a saber:

“(1) El control constitucional es, en primer lugar, centralizado o concentrado. Un tribunal único, ad hoc y situado al margen del aparato jurisdiccional tradicional se ocupa de realizar esta tarea. En esta misión de estricta especialización, dicho tribunal ejercerá su labor de forma excluyente respecto a cualquier otro órgano y de forma exclusiva dado que ejercerá esta única función.

(2) Según este modelo, el control constitucional de leyes es abstracto ya que el litigio, directamente centrado en el análisis de la constitucionalidad de una determinada norma, se presenta al margen de cualquier otra cuestión jurídica alternativa. La labor del juez consiste, pues, no ya en resolver una posible controversia entre las partes –sirviéndose para ello de las normas adecuadas-, si no que su labor consiste más bien en confrontar normas inferiores y superiores entre sí, independientemente de cualquier elemento factual concreto o de la aplicación específica de una norma a un caso determinado.

(3) El juez es declarado competente para resolver la cuestión de constitucionalidad de la norma vía de acción. En efecto, el juez es declarado competente no como consecuencia de un litigio anterior cuya cuestión de constitucionalidad constituiría un apéndice de este segundo si no que, por el contrario, el juez dispone de competencia para resolver directamente la cuestión de la conformidad de la norma encausada con la Constitución; es decir, el juez dispone de competencia para resolver los litigios de constitucionalidad de las

⁴⁸ Suárez Camacho, Humberto. *El Sistema de Control Constitucional en México*, op. cit. pág. 47.

normas a título principal e independientemente de cualquier otra cuestión adicional.

(4) Según dispone este segundo modelo, la decisión que se promulgue sobre la cuestión de constitucionalidad de las normas tiene valor erga omnes. En efecto, la norma que se declara inconstitucional no será únicamente separada de la situación o de la circunstancia en base a la cual dicha sentencia jurisdiccional es pronunciada, si no que la misma será anulada y, en consecuencia, radicalmente expulsada del orden jurídico.”⁴⁹

En este sentido, las cuestiones de constitucionalidad deben ser planteadas siempre en la vía principal o vía de acción (mediante los órganos del Estado afectados por el ordenamiento constitucional), en el entendimiento de que el fallo del citado tribunal especializado declaratorio de la inconstitucionalidad produce efectos generales (erga omnes), esto es, supone la ineficacia de la respectiva ley desde el momento en que se publica la decisión de inconstitucionalidad.

La tesis de Kelsen parte de un principio básico, la jerarquía de las leyes que existen en el orden jurídico, esto es, las normas generales se encuentran en diferentes niveles, por lo que la ley jerárquicamente superior determina a su inferior, de ahí que la Constitución se sitúe en la cúspide de la pirámide de jerarquías, y ésta es la que determina la forma y contenido de sus inferiores. Entonces, como se ha dicho, debe existir un órgano al cual se le encargara el control constitucional de las leyes denominado Tribunal Constitucional.

Por lo que el sistema kelseniano confía el control constitucional a un solo órgano, un Tribunal Constitucional, el cual es el encargado de resolver los conflictos que se presentan al confrontar el texto de una ley con el de la

⁴⁹ Tusseau, Guillaume. *Para acabar con los “modelos de jurisdicción constitucional un ensayo de crítica, op. cit. pág. 21.*

Constitución, a efecto de determinar si la primera es acorde con esta última, por ende, los tribunales ordinarios carecen de facultades para poder “inaplicar” una ley o simplemente para juzgar esta ley o determinar que es contraria a la Constitución.

De los conflictos en materia meramente constitucional no pueden conocer los jueces ordinarios, solo el tribunal *ad hoc*, en el entendido de que su fallo tendrá efectos generales o *erga omnes*, ya que “el ilustre maestro de Viena, Kelsen, decía que si un órgano jurisdiccional enjuicia la constitucionalidad de una norma general y abstracta como es la ley, su sentencia, en consecuencia, deberá tener efectos generales”.⁵⁰

En esta secuencia: La norma que regula la producción es una norma superior, mientras que la producida conforme a esa determinación es la norma inferior. El orden jurídico no es, por consiguiente, un sistema de normas de derecho ubicadas en el mismo plano, equivalentemente ordenadas, sino una construcción escalonada de diversos estratos de normas jurídicas. La norma fundante básica, hipotética en ese sentido, constituye el fundamento de validez suprema, que apoya la unidad de esta relación de producción

Ahora, los tribunales constitucionales, quienes son los que ejercen el control concentrado de constitucionalidad en un Estado, ejercen ese control abstracto de constitucionalidad paralelamente de la ley que regula dicho procedimiento, y por lo tanto, como resultado inobjetable de ello, la competencia y atribución para conocer de este mecanismo de regularidad constitucional de la ley, así como los internacionales, se atribuye fundamentalmente a un órgano jurisdiccional, articulándose así su función de salvaguardar y garantizar la Constitución.

⁵⁰ Soberanes Fernández José Luis. *La Reforma Judicial de 1991, en Crónica Legislativa*, Cámara de Diputados, año IV, Nueva Época, Número 2, Revista ARS IURIS, Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Número 13 Especial, Reforma Judicial, México, 1995, pág.16.

Por ello, la jurisdicción constitucional que deriva del Tribunal Constitucional, juega un papel fundamental en el Estado moderno, ya que ésta se configura como una especie de interlocutor entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, derivado del poder con que cuenta, al ser el único órgano constitucional que posee la difícil tarea de interpretar la Constitución, y al interpretarla y realizar un ejercicio de contraste entre la Ley Suprema y el ordenamiento impugnado, tener conferido el enorme poder de declarar inconstitucional y traer como consecuencia su expulsión del ordenamiento jurídico.

c) **Marco conceptual.**

El control concentrado constitucional es definido como: *“la facultad contenida en un determinado órgano jurídico de aplicar (o en su caso inaplicar) o interpretar la constitucionalidad de sus actos o de los ajenos, que sólo pertenece a una autoridad y que no comparte con otras más.”*⁵¹

Mauro Capelleti en relación al sistema de control concentrado dice que es aquel *“en el cual el poder de control se concentra por el contrario en un órgano judicial solamente.”*⁵²

En la doctrina el ejercicio del control concentrado solamente acepta el realizado por vía de acción, *“afirmando que tales juzgadores no tienen ni pueden tener la facultad de examinar si las leyes secundarias cuya inaplicación les pide una de las partes en un juicio ordinario son o no inconstitucionales, pues si tuvieran esa atribución vendría el caos en la administración de justicia, en razón de que se permitiría que se resolvieran, en un procedimiento de legalidad, cuestiones tan complejas como pueden llegar a serlo las constitucionales, además*

⁵¹ Orozco Mendoza, Carlos Alberto. *Control concentrado, control difuso y control de convencionalidad*. Universidad Panamericana. Facultad de Derecho. México. 2014. Pág.2.

⁵² Capelleti, Mauro. *La justicia constitucional (estudios de derecho comparado)*. op. cit.pág.68.

*de que se dejaría a su libre arbitrio la facultad de cumplir o no con la ley, bajo el pretexto de considerarla contraria a la Constitución.”*⁵³

Este modelo de control de constitucionalidad se sustenta principalmente en el peligro que conllevaba para la seguridad jurídica, el conceder a cada Juez o Tribunal, el poder de apreciar la constitucionalidad de las leyes, pues ello generó en la práctica la falta de uniformidad en cuestiones constitucionales, fenómeno que cada vez fue más grande; así lo constató Kelsen en Austria, puesto que el control de constitucionalidad encomendado a una jurisdicción especializada, como el Tribunal Constitucional, *"nace como un acto de desconfianza en los Jueces, encaminado a salvaguardar el principio de seguridad jurídica y a restablecer la supremacía del Parlamento, puesta en serio peligro por la batalla iniciada por amplios sectores del mundo jurídico a favor del control jurisdiccional (difuso) de las leyes, lo que entrañaba dejar en manos de una casta judicial, en amplia medida de extracción aristocrática y vocación autoritaria, un instrumento de extraordinaria relevancia en la vida de un Estado de Derecho"*.⁵⁴

El citado jurista austriaco, en su obra, Teoría General del Estado, a la par de establecer una teoría del Estado Federal constituido por los conceptos de centralización y descentralización de un orden jurídico, planteó la problemática de que casi todas las constituciones modernas privaban a los jueces y demás órganos encargados de la aplicación de las leyes, de la facultad de examinar la constitucionalidad de dichos ordenamientos generales respecto a su creación y, en consecuencia, les negaban la posibilidad de declararlas nulas cuando consideran que eran inconstitucionales. En contraposición, mencionó a las constituciones democráticas-republicanas, en las que existía de modo ilimitado el derecho judicial de examinar la constitucionalidad de leyes, en las que se le

⁵³ Suárez Camacho, Humberto. *El Sistema de Control Constitucional en México. op. cit.*, pág.47

⁵⁴ García Belaunde, Domingo. *Derecho Procesal Constitucional*, Editorial Temis, Bogotá 2001, pág. 18.

atribuía a una jurisdicción constitucional la misión de suspender o anular las leyes anticonstitucionales.⁵⁵

Por lo que, la doctrina de Kelsen -sistema constitucional concentrado-, se sustentó en que se debía encargar la anulación de los actos inconstitucionales a un órgano deferente e independiente del Parlamento, así como de cualquier otra autoridad estatal, esto es, a una jurisdiccional o tribunal constitucional, la que no debería considerarse que estuviera en contradicción del principio de separación de poderes, sino que se trataba de una afirmación de éste, pues la actividad del legislador negativo, propia de la jurisdicción constitucional, está absolutamente determinada por la Constitución, debido a que constituye principalmente la aplicación del derecho solamente en una débil medida. Kelsen atribuía a la jurisdicción constitucional el conocimiento de la regularidad de todos los actos inmediatos subordinados a la Constitución.⁵⁶

Favoreu considera que el tribunal constitucional es el único que conoce de la justicia constitucional, esto es, constituye una jurisdicción especialmente creada con ese objeto y que tiene el monopolio de esta ámbito, por lo que a diferencia del sistema americano, los jueces ordinarios no pueden conocer de lo contencioso constitucional, esto es, que este tribunal únicamente conoce de la materia constitucional, además, como un Alto Tribunal de Justicia encargado por ejemplo, de juzgar a los ministros que sean objeto de acusación, o Tribunal Central de conflicto, o atribuirle otras competencias a fin de ahorrarse la institución de jurisdicciones especiales.⁵⁷

⁵⁵ Kelsen, Hans. *Teoría General del Estado*, op. cit. págs. 332 y 333.

⁵⁶ Kelsen Hans, *La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)*, op. cit. págs. 52-63.

⁵⁷ Favoreu, Louis. *Los Tribunales Constitucionales*, op. cit. pág. 15.

En ese aspecto, tal y como lo menciona el maestro Gutiérrez Zapata⁵⁸, el control directo de constitucionalidad de la ley en su articulación procesal es la herramienta que contribuye a la depuración del ordenamiento jurídico, y a una nueva concepción democrática, que va más allá de la división de poderes, transformándose, en realidad, bajo una concepción contemporánea, en un medio que dota a la jurisdicción constitucional de la competencia necesaria, para que se efectué en cualquier nación un renovado y verdadero principio de equilibrio y colaboración entre poderes.

Por su parte, Jaime Flores Cruz hace una distinción entre el control constitucional difuso y el concentrado desde el punto doctrinal, en el sentido de que *“los sistemas de control constitucional conocidos como americano y europeo, en virtud de su nacimiento, respectivamente, en Estados Unidos de Norteamérica y en Austria, cuentan doctrinalmente con características antológicas. El primero de ellos deposita el control de constitucionalidad de leyes a todo el aparato judicial y la declaratoria que resulta únicamente tiene efectos inter partes, esto es, se desaplican las disposiciones legales impugnadas “retroactivamente”. En el segundo gran sistema –control concentrado o europeo-, los conflictos constitucionales sólo pueden ser conocidos por la corte o tribunal especializado erigido para ese efecto, haciendo una clara distinción con los tribunales ordinarios, en el caso, si la resolución de este órgano constitucional ad hoc, es en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de la ley, adquiere efectos erga omnes, hacia el futuro”*⁵⁹

⁵⁸ Gutiérrez Zapata, Iván Carlo. *Los problemas del control directo de constitucionalidad*, www.juridicas.unam.mx

1.3 Control constitucional mixto.

a) Antecedentes.

La reforma constitucional austriaca de 1929, tuvo por efecto hacer flexible la supuesta solidez de las diferencias entre el control difuso y el concentrado, y así, comenzó entonces la tendencia de convergencia entre ambos modelos, tal reforma modificó la redacción del artículo 140 de la Carta Federal de Austria, ampliando la legitimación para recurrir las leyes por vicios de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo y Tribunal de Justicia Administrativa esto es, cualquier parte de una litis de la que conociera uno de esos órganos ordinarios se podía plantear el problema de la constitucionalidad de una ley aplicable al caso concreto, aunque la cuestión propiamente dicha debía someterse exclusivamente a la consideración del Tribunal Constitucional.⁶⁰

En los países de América Latina se ha desarrollado un modelo de control constitucional que: *“revela características de los sistemas concentrado y difuso. Se trata de un control mixto que entraña la combinación del control abstracto de la constitucionalidad a cargo de un órgano jurisdiccional supremo, con la facultad de todos los jueces de no aplicar las leyes que estimen inconstitucional. Al tiempo que hay un órgano que desde la cúspide del Poder Judicial ejerce funciones de control abstracto y concentrado, el resto de los tribunales tienen competencia para realizar un examen incidental y difuso, que los conduce a inaplicar leyes inconstitucionales.”*⁶¹

⁵⁹ Flores Cruz Jaime, *“Interpretación Constitucional y Control sobre el Órgano de Control Constitucional”*, op. cit., págs. 17-18.

⁶⁰ Fernández Segado, Francisco. *La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano*, México, UNAM, 2004, págs. 27-30.

⁶¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Los Tribunales Constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, op.cit., pág. 49.

Guillaume Tusseau cita, a manera de antecedentes del control constitucional mixto que: *“Tras constatar la insuficiencia de la tipología dual que caracteriza a la tesis de los modelos, Favoreu –tras numerosos trabajos dedicados al análisis de la jurisdicción constitucional en el mundo-, optaría por elaborar nuevos modelos de estudio que, lejos de sustituir los anteriores, serían contrariamente añadidos a los métodos antagónicos tradicionales. De forma especialmente notable, este autor propone dicha solución respecto a dos series diferenciadas de sistemas de jurisdicción constitucional. Mediante la constatación de que una mayoría de Estados situados en el continente de América del sur combinan las características de los modelos tradicionales en análisis –modelo europeo y americano, respectivamente-, este autor considera que, para poder describir eficazmente la organización de la jurisdicción constitucional, resulta necesario considerar la posibilidad de un tercer modelo. Particularmente favorable a esta opción muestra este autor cuando escribe que “en materia de jurisdicción constitucional, los países de América Latina no han tenido que elegir entre los modelos americano y europeo, respectivamente, si no que han permitido que coexista un control concentrado y difuso de forma simultánea”. En efecto, podemos considerar que al lado de los modelos americano y europeo existe también un modelo sudamericano. Sin embargo, este autor así mismo propone concebir otro modelo diferente de jurisdicción constitucional caracterizado, esta vez, por la especialización de una Sala del Tribunal Supremo en el derecho procesal constitucional. Este modelo –especialmente presente, según nuestro autor, en el continente africano- se trata de un sistema original, imposible de encontrar en ningún otro lugar.”*⁶²

Agregando el autor, que: *“Lucio Pegoraro ha llevado a cabo la tentativa doctrinal del mismo tipo y, con este objeto, concibe la posibilidad de un control concentrado que se inicia, de manera difusa, por un juez ordinario quien, a su vez,*

⁶² Tusseau, Guillaume. *Para acabar con los “modelos de jurisdicción constitucional un ensayo de crítica*, op. cit. págs. 112-113.

*esta capacitado para formular una cuestión prejudicial. Tal disposición institucional constituye para dicho autor, un tertium genus, híbrida, de jurisdicción constitucional. Sin embargo, desde una perspectiva de análisis empírica, este segundo autor, se ve en la obligación de proponer a continuación un modelo suplementario –un quartum genus- que, aplicado en países como Grecia, Portugal o determinados Estados de América del sur, se caracterizaría esencialmente por la coexistencia de un control difuso y de un control concentrado en forma simultánea.”*⁶³

Los jueces o tribunales que realizan una labor complicada y trascendental son los que se encuentran facultados para interpretar, en forma explícita, la Constitución o norma suprema, siendo sus interpretaciones el último recurso constitucional, siendo éstos las Cortes Supremas de acuerdo al sistema norteamericano o como los tribunales especializados constitucionales en el sistema europeo.

En la actualidad se puede apreciar que los sistemas difuso y concentrado no son completamente incompatibles entre sí. Los distintos países al incorporarlos a sus ordenamientos, les han asignado características propias, lo cual suscitó la aparición de sistemas mixtos que no son otra cosa que el acercamiento real entre los sistemas difuso y concentrado.

b) Características principales.

De acuerdo a la doctrina, en el sistema mixto los órganos de la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional, comparten las funciones de control de constitucionalidad y las acciones de tutela; en otras palabras, un sistema será mixto cuando se produce una mezcla de elementos constitutivos de los dos modelos clásicos, que dan lugar a un tercero, que no es lo que son los dos

anteriores pero tampoco algo enteramente autóctono y original; en rigor, se tendría que señalar que todos los sistemas son mixtos, pues actualmente los países combinan los elementos de un sistema con los del otro.

Jacobo Ortega establece distintos puntos de diferencia entre el control concentrado y el difuso, para así llegar a determinados elementos del control constitucional mixto, en los términos siguientes:

“1. Sobre el órgano que ejerce el control de la constitucionalidad, que es una de las fundamentales diferencias anotadas por la doctrina entre ambos sistemas. En el sistema norteamericano todos los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, en tanto que en el sistema concentrado es un órgano independiente el encargo de llevar adelante ese control; empero, esta tradicional diferenciación entre ambos sistemas, se ha relativizado por la introducción, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, de la cuestión de inconstitucionalidad, por la cual las partes o el juez de oficio pueden solicitar al juez de la causa se plantee ante el Tribunal Constitucional el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley. Esto supone que los jueces ordinarios deben realizar un primer juicio de constitucionalidad para sustentar su planteamiento ante el Tribunal Constitucional, órgano que en definitiva será el que determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma.

2. Sobre el carácter incidental o principal del control: En el sistema americano, la ley no puede ser impugnada directamente, sino que necesariamente debe existir un proceso concreto, en consecuencia el control tiene carácter incidental; en cambio, en el sistema concentrado, el procedimiento se inicia de manera directa, sin que se vincule a la existencia de una controversia. Esta distinción se relativiza cuando se comprueba que en la mayoría de los países que cuentan con un órgano encargado del control de la constitucionalidad, ambas

⁶³ *Ibídem.*

atribuciones son ejercidas por éste, a través de la cuestión de inconstitucionalidad y de la acción de inconstitucionalidad directa.

3. Sobre los efectos de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma impugnada: En el sistema americano, el juez declara la nulidad de la ley, limitándose a inaplicarla al caso concreto, siendo los efectos de esa declaración retroactivos y limitados al caso, en tanto que en el sistema ideado por Kelsen, la decisión del Tribunal Constitucional de anular una ley por ser inconstitucional, tiene el mismo carácter que una ley abrogatoria, con efectos erga omnes, y ex nunc, pues no tienen carácter retroactivo.”⁶⁴

El sistema de control de constitucionalidad mixto puede presentar tres formas distintas⁶⁵:

1. Centralización del control de constitucionalidad a favor de un Tribunal Supremo.

Esta característica se presenta cuando en determinados Estados es un Tribunal Supremo el órgano encargado en última instancia del control de constitucionalidad, es decir, es aquel órgano que se encuentra situado en la cima o cúspide de la jerarquía orgánica del conjunto de órganos jurisdiccionales nacionales.

En una primera revisión, parecería que el sistema de control de constitucionalidad mixto se asimila al modelo americano, al que se ha hecho referencia, sin embargo de una revisión más a profundidad se puede apreciar que este sistema resulta susceptible de materializarse una cierta concentración del

⁶⁴ Jacobo Ortega, Jesús Edgar. *Control Jurídico de Constitucionalidad*, Monografía, México. pág.2.

⁶⁵ Soberanes Fernández José Luis. *La Reforma Judicial de 1991, en Crónica Legislativa, op.cit. págs.. 17-23.*

derecho procesal constitucional, lo cual lo llevaría a asimilarse más al modelo europeo⁶⁶.

Así, en los Estados que manejan el sistema Europeo, se puede apreciar que el Tribunal Constitucional es el único órgano capaz de conocer del conjunto de las cuestiones de constitucionalidad, con exclusión de las jurisdicciones inferiores⁶⁷, por contrario del sistema americano, donde los jueces ordinarios realizan un control de constitucionalidad difuso al no estar concentrado en un solo órgano, sino que cada uno de los jueces que conforman el sistema judicial se encuentran facultados para realizar el control de constitucionalidad cuando fuere necesario.

Ahora, en el sistema de control mixto, no obstante que el Tribunal Supremo (o el órgano que se encuentre en la cúspide de la jerarquía orgánica del conjunto de órganos jurisdiccionales nacionales) es el que se encuentra encomendado de conocer del conjunto de las cuestiones de constitucionalidad, las jurisdicciones inferiores, a título incidental son quienes resuelven sobre las cuestiones de constitucionalidad.

Así, dentro del mismo modelo, además de la facultad de los tribunales inferiores para conocer de cuestiones de constitucionalidad, el Tribunal Supremo dispondría además de la competencia especial para poder entrar a conocer del estudio de los recursos individuales que pudieran surgir por violación de los derechos constitucionales garantizados, y podría igualmente ser declarado competente en otros supuestos en los que le fueran remitidos, por las jurisdicciones inferiores, las cuestiones de interpretación de la Constitución.

⁶⁶ Tusseau, Guillaume. *Para acabar con los "modelos" de jurisdicción constitucional. Un ensayo de crítica.* op. cit. página 30.

2. La competencia concurrente de un juez *ad hoc* y de un juez ordinario.

Así, se puede apreciar que existen características tanto del modelo europeo como del americano. En la práctica, algunos países han instaurado un Tribunal Supremo que conozca cuestiones de control de constitucionalidad y de la misma manera, han conferido paulatinamente a determinados tribunales ordinarios una competencia general para tratar a título incidental cualquier cuestión constitucional, existiendo una doble función por parte de los juzgadores⁶⁸.

3. La competencia de una formación *ad hoc* de la jurisdicción ordinaria.

De la misma manera, en determinados países, el control de constitucionalidad de las normas no corresponde a un Tribunal constitucional en sentido propio, sino a una sala especializada de este órgano, la cual ejercerá un monopolio en la materia. La clasificación tradicional no encuadra con este modelo pues resulta difícil determinar si se trata de un modelo americano, en la medida en que únicamente la jurisdicción ordinaria se encuentra cuestionada, o de un modelo europeo, en razón de la especialización del órgano concernido.

Asimismo, existen las concentraciones y desconcentraciones “discretas”.

Aquellos Estados que conocen de un control de constitucional que pareciera ser “concentrado” conforme al modelo europeo, cuentan con distintas formas de “desconcentración” cuya existencia no resulta evidente a simple vista, por los motivos siguientes:

⁶⁷ *Ídem*

⁶⁸ Tusseau, Guillaume. *Para acabar con los “modelos” de jurisdicción constitucional. op. cit.* pág. 32.

- a) Las subdivisiones internas de la jurisdicción constitucional concentrada.
- b) La ambigüedad de los reenvíos prejudiciales.

Los controles ejercidos por un Tribunal constitucional especializado en el reenvío prejudicial de las jurisdicciones ordinarias difícilmente se pliegan a la categorización propuesta para el modelo Europeo y el Americano.

Este mecanismo implica en el fondo un doble control. En el momento en que el juez declarado competente para resolver un litigio no otorga su consentimiento en remitir al Tribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad interpuesta por las partes, éste sería el único en instituirse en el órgano capaz de resolver el problema de forma totalmente descentralizada.

Cuando este mismo juez adopta la decisión opuesta, dos controles suceden. En primer lugar un control provisional que procede del juez ordinario y consiste en un pronóstico acerca de cuál será la postura del Tribunal Constitucional, y en segundo lugar, un control definitivo, que procede del propio tribunal.

No obstante, el juez a quo ejerce necesariamente un control de constitucionalidad en la medida de que éste no remite la cuestión al “juez constitucional”, a menos de que, dependiendo del sistema y época, éste muestre dudas razonables sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión o que éste se muestre convencido de su inconstitucionalidad.

Desde esta óptica, el control resulta “difuso” pues dicha operación intelectual corresponderá a los jueces ordinarios, tal y como se traduce de la expresión alemana “verwerfungsmonopol”, sólo la facultad de anulación es concentrada y,

monopolizada por el tribunal constitucional. Es así como la oposición de los dos modelos tradicionales de jurisdicción evidencia lo característico de este modelo.

a) Pluralidad de órdenes de jurisdicciones.

En algunos países, donde la centralización del control de constitucionalidad se encuentra a cargo de un tribunal especializado existe un sistema de reenvío prejudicial donde no se excluye el ejercicio de un control de constitucionalidad por el juez administrativo o el juez judicial de aquellos actos jurídicos, en específico administrativos, privados y jurisdiccionales, que pudieran serle sometidos en el marco del ejercicio de sus funciones y competencias respectivas.

c) Marco conceptual.

Tradicionalmente, se ha definido como el control de la constitucionalidad que se ejerce en un sistema jurídico donde existen características tanto del control concentrado, que, como se mencionó previamente, se realiza por un solo órgano estatal, sea la Corte o Tribunal Supremo de Justicia del país o un Tribunal Constitucional especialmente creado para decidir sobre la constitucionalidad de una ley o realizar su inaplicación, así como características del control de constitucionalidad difuso que se realiza cuando el poder para apreciar la constitucionalidad de las leyes, y en su caso, declarar su inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso concreto se atribuye a todos los jueces de un país, cualquiera que fuere su jerarquía.

De este modo, en relación al control mixto se ha dicho que: *“En este caso la defensa de la Constitución se efectúa por medio de un órgano cuya naturaleza es tanto política como judicial, o bien, por la acción conjunta de un órgano político y uno judicial, de tal manera que parte de la Constitución es defendida políticamente*

*frente a ciertos actos de autoridad y parte, judicialmente, frente a otra clase de actos.”*⁶⁹

El control constitucional mixto *“entraña la combinación del control abstracto de la constitucionalidad a cargo de un órgano jurisdiccional supremo, con la facultad de todos los jueces de no aplicar las leyes que estimen inconstitucionales. Al tiempo que hay un órgano que desde la cúspide del Poder Judicial ejerce funciones de control abstracto y concentrado, el resto de los tribunales tiene competencia para realizar un examen incidental y difuso, que los conduce a inaplicar leyes inconstitucionales.”*⁷⁰

Susana Meléndez establece que el control de constitucionalidad mixto *“se basa en la coexistencia del modelo difuso con el concentrado. En este modelo se concibe la existencia de un órgano que concentra la competencias de control de la constitucionalidad, pero su trabajo no es monopolístico, reconociendo a otras autoridades la posibilidad de velar por el imperio de la constitución en los casos concretos que conocen, esta competencia se basa y halla su centro en el principio de jerarquía normativa que obliga a toda autoridad a someter sus decisiones a la Constitución y a las leyes, pudiendo no aplicar las normas que sean incompatibles con los principios rectores de la Ley Fundamental.”*⁷¹

De acuerdo a la doctrina, en el sistema mixto los órganos de la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional, comparten las funciones de control de constitucionalidad y las acciones de tutela; en otras palabras, un sistema será mixto *“cuando se produce una mezcla de elementos constitutivos de los dos*

⁶⁹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Competencia del Poder Judicial de la Federación, México, 2011, pág. 6.

⁷⁰ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Los Tribunales Constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación*. op.cit. pág.49

⁷¹ Meléndez, Susana. *Tipos de Controles Constitucionales*, El Salvador, 2013, pág.19

modelos clásicos, que dan lugar a un tercero, que no es lo que son los dos anteriores pero tampoco algo enteramente autóctono y original".⁷²

En rigor, se tendría que señalar que todos los sistemas son híbridos, pues actualmente los países combinan los elementos de un sistema con los del otro, por lo que haciendo una síntesis se puede sostener que la hibridación se manifiesta en los siguientes puntos:

"1. Sobre el órgano que ejerce el control de la constitucionalidad, que es una de las fundamentales diferencias anotadas por la doctrina entre ambos sistemas. En el sistema norteamericano todos los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, en tanto que en el sistema concentrado es un órgano independiente el encargo de llevar adelante ese control; empero, esta tradicional diferenciación entre ambos sistemas, se ha relativizado por la introducción, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, de la cuestión de inconstitucionalidad, por la cual las partes o el juez de oficio pueden solicitar al juez de la causa se plantee ante el Tribunal Constitucional el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley. Esto supone que los jueces ordinarios deben realizar un primer juicio de constitucionalidad para sustentar su planteamiento ante el Tribunal Constitucional, órgano que en definitiva será el que determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma.

2. Sobre el carácter incidental o principal del control: En el sistema americano, la ley no puede ser impugnada directamente, sino que necesariamente debe existir un proceso concreto, en consecuencia el control tiene carácter incidental; en cambio, en el sistema concentrado, el procedimiento se inicia de manera directa, sin que se vincule a la existencia de una controversia. Esta

⁷² Jacobo Ortega, Jesús Edgar, *Control Jurídico de Constitucionalidad*, op.cit. pág.2

distinción se relativiza cuando se comprueba que en la mayoría de los países que cuentan con un órgano encargado del control de la constitucionalidad, ambas atribuciones son ejercidas por éste, a través de la cuestión de inconstitucionalidad y de la acción de inconstitucionalidad directa.

3. Sobre los efectos de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma impugnada: En el sistema americano, el juez declara la nulidad de la ley, limitándose a inaplicarla al caso concreto, siendo los efectos de esa declaración retroactivos y limitados al caso, en tanto que en el sistema ideado por Kelsen, la decisión del Tribunal Constitucional de anular una ley por ser inconstitucional, tiene el mismo carácter que una ley abrogatoria, con efectos erga omnes, y ex nunc, pues no tienen carácter retroactivo.”⁷³

d) Desarrollo actual en distintos ámbitos de aplicación.

Mac-Gregor considera que en Europa existe el control constitucional mixto en Portugal, y en América latina el sistema mixto se ha adoptado en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, México y Venezuela, donde además del control de constitucionalidad difuso, establecido en muchos casos desde el siglo XIX, se ha atribuido la potestad para ejercer el control de constitucionalidad concentrado a una jurisdicción constitucional ejercida por un Tribunal Constitucional (Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú), esto es, por el Tribunal o Corte Suprema del país como es el caso de Brasil o por una Sala Constitucional dentro del mismo así como lo ha hecho México y Venezuela⁷⁴.

⁷³ Fix Zamudio, Héctor. Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. op.cit. pág.2

⁷⁴ Ferrer Mac-Gregor, Martínez Ramírez Fabiola, Figueroa Mejía, Giovanni A (Coordinadores), *Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomo I*, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, págs. 232 y 233.

En los países en los cuales existe un sistema mixto o integral de control de la constitucionalidad, dado el funcionamiento paralelo del método de control de constitucionalidad difuso que ejercen todos los jueces, el control de constitucionalidad concentrado de las leyes es siempre de carácter principal, del cual conoce la jurisdicción constitucional cuando se ejerce una acción de inconstitucionalidad ante la misma, siendo el método incidental, en general, incompatible con el mismo. En estos casos de sistemas mixtos o integral, los jueces no están autorizados para abstenerse de ejercer el control de constitucionalidad difuso y remitir la decisión de la cuestión constitucional ante la jurisdicción constitucional.

Por otra parte, lo que se ha establecido en algunos países como Venezuela, es la obligación para los jueces que ejerzan el control difuso de la constitucionalidad de informar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo sobre los fundamentos y alcance de la desaplicación de la ley que sea adoptada, para que ésta pueda, de oficio, proceder a ordenar el inicio del procedimiento de nulidad y efectuar un examen abstracto sobre la inconstitucionalidad de la norma en cuestión⁷⁵.

En algunos países la jurisdicción constitucional competente, basada en el modelo europeo, no se trata de una asamblea plenaria del Tribunal constitucional, sino de una formación dentro de la misma.

Un ejemplo de esto lo conforma el Tribunal constitucional federal alemán, que cuenta con dos “Senate” –Jueces- que actúan como jurisdicciones independientes y se reparten los litigios por temáticas. Compuestas de manera diferente, en las primeras décadas de la ley fundamental para la República Federal Alemana, estas jurisdicciones independientes daban muestras de sensibilidades político-jurídicas diferenciadas y, en definitiva, de una forma de

desconcentración del control de constitucionalidad, hasta el punto de llegar a confrontarse el primer senado “rojo” de corte social demócrata, con el segundo senado “negro”, más de corte cristiano-demócrata.

Así, actualmente Alemania y Austria cuentan con un sistema parcialmente concentrado, en el que si bien existe un órgano habilitado para hacer justicia constitucional, en el interior del ordenamiento general conviven con competencias diversas más tribunales constitucionales del país⁷⁶.

En adición, las jurisdicciones supremas de algunos países son libres de su propia jurisprudencia y proceden además de manera autónoma de normas constitucionales. Como ejemplo se establece al Consejo de Estado francés, quien, dentro de sus funciones consultivas, ha consagrado el principio constitucional de igualdad de acceso a los empleos públicos y, en el ámbito jurisdiccional, ha incluido dentro de los principios fundamentales reconocidos por las leyes francesas, que tienen valor constitucional, la libertad de asociación.

Por su parte, el Tribunal de Casación francés proclama también una serie de principios de valor constitucional que no han sido previamente establecidos por el Consejo constitucional, como el principio de libertad de trabajo. De esta manera, aunque pudiese considerarse que Francia es el ejemplo del modelo europeo, en su sistema coexisten tres órganos jurisdiccionales supremos: La Corte de Casación, el Consejo de Estado y el Consejo constitucional y cada uno de estos órganos puede disponer de su propia interpretación de la Constitución e imponerla sobre una serie de normas o comportamientos, sin que los otros dos puedan impedirlo.

Así, el sistema jurídico Francés, aunque fuere concentrado parecería más, desconcentrado pues su mecanismo de control se asimila a aquellos países en los

⁷⁵ *Ibidem*.

que no existe un superior judicial jerárquico y son varios los órganos de control que estudian cuestiones de constitucionalidad.

Además de Francia, existen determinados órdenes jurídicos que disponen de una pluralidad de órdenes jurisdiccionales encargados del control de constitucionalidad de las normas y que aun así aseguran coherencia en la jurisprudencia. En este tipo de sistemas de jurisdicción constitucional, los recursos directos que los particulares interpongan ante la jurisdicción constitucional contra las decisiones de las jurisdicciones ordinarias, conceden a los respectivos Tribunales constitucionales un mecanismo efectivo para controlar la interpretación de la Constitución.

Sin embargo, a pesar de existir una unificación de criterios, no se trata de un control concentrado pues esta característica, lejos de ser presentada como un rasgo definidor del modelo europeo de concentración del control constitucional de las normas, constituye un producto derivado de un modo de control constitucional estrictamente contingente pues, aún cualquier recurso que combata una cuestión de constitucionalidad puede ser interpuesto contra el conjunto de las decisiones jurisdiccionales sin distinción. Traduciendo la unión jurisprudencial no a la estructura orgánica del ejercicio del derecho procesal constitucional, sino al control de constitucionalidad de un acto específico, el acto jurisdiccional, aun cuando la tipología de los modelos estuviera basada en el control de constitucionalidad de las leyes⁷⁷.

También existen países como Ruanda donde en su dispositivo 145 constitucional, el conjunto del derecho procesal constitucional en sus diferentes y variadas ramas (Control de Constitucionalidad de Leyes orgánicas, de

⁷⁶ Pegoriano, Lucio. *Ensayos sobre justicia constitucional, la descentralización y las libertades*, Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, página 88.

⁷⁷ Highton, Elena I. *Sistemas Concentrado Y Dífuso De Control De Constitucionalidad*, op. cit., págs. 111-114.

reglamentos de aldeas, tratados y acuerdos internacionales, leyes, decretos-leyes, conflictos de atribución de competencia entre las instituciones del Estado, del contencioso electoral, etc) es atribuido directamente al Tribunal Supremo. Comparten este sistema Uruguay (artículos 256 y 257 Constitucionales), Panamá (artículo 203.1 Constitucional), Eritrea (artículo 49.2 a Constitucional) y Yemen (artículo 151.a Constitucional).⁷⁸

En Sudáfrica, cualquier jurisdicción dispone de competencia para poder conocer acerca de las cuestiones de constitucionalidad de las normas; no obstante, si una decisión de inconstitucionalidad es adoptada, ésta deberá ser confirmada por el Tribunal constitucional para que la misma produzca el menor efecto posible⁷⁹.

⁷⁸ *Ibidem*

⁷⁹ *Ídem*

Capítulo II. El control constitucional en México antes de la reforma constitucional de junio de dos mil once.

2.1 Marco constitucional y legal.

El control constitucional ha sido conceptualizado como la tarea que está a cargo del Estado, consistente en anular o invalidar los actos de entes públicos que sean contrarios a la Constitución General, a fin de mantener vigente el propio texto constitucional y hacer imperante el principio de supremacía constitucional.⁸⁰

Miguel Covián Andrade refiere al concepto de control constitucional, diciendo que: *“se produce cuando un acto de autoridad lato sensu infringe una o varias normas constitucionales y debe ser anulado por el órgano competente al efecto, mediante el procedimiento previsto en la propia constitución”*⁸¹, y de esa definición, se puede concluir que el objeto del control constitucional es proteger la Constitución, esto es, partiendo de la idea de supremacía constitucional, la Constitución es la norma fundante del orden jurídico, de manera tal que todo acto debe ser conforme a ella.

El primer antecedente del control constitucional mexicano se encuentra, nos dice, González Oropeza, en el artículo 165 de la Constitución de 1824, que confería al Congreso de la Unión la facultad de resolver cualquier duda sobre el significado de la Constitución y de juzgar, mediante juicio político, a los funcionarios que la infringieran; así como en el artículo 166 de la citada Ley Fundamental que otorgaba competencia exclusiva a las Legislaturas de los Estados para hacer observaciones y proponer reformas a la Constitución.

⁸⁰ Del Castillo del Valle, Alberto. *Defensa Jurídica de la Constitución en México*, Tercera Edición Educación Cumorah, México, 2004, págs. 57 y 58.

⁸¹ Covián Andrade, Miguel. *Análisis constitucional. Una introducción –Cómo hacer cosas con la constitución-*, Intercontinental Editora, Asunción, 2008, págs. 155 y 156.

El control constitucional por parte del Congreso de la Unión y de los Congresos locales se fue perdiendo en las subsecuentes versiones de la Constitución mexicana, en contraste, el control constitucional jurisdiccional se ha ido consolidando en un proceso de más de ciento cincuenta años, comenzando con controles constitucionales cuyas sentencias tenían únicamente efectos *interpartes*, hasta la reforma constitucional de 1994, en las que se implementaron eficazmente medios de control con efectos *erga omnes*, aunque limitados a que se obtenga la votación solicitada por la ley.⁸²

El fundamento constitucional del sistema de justicia constitucional en México, medularmente, se encuentra en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,⁸³ el cual actualmente conserva su texto original desde su promulgación en 1917, y que refiere a que la Constitución, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la *Ley Suprema de toda la Unión*, y que los jueces de las entidades federativas deberán estar a lo dispuesto por dicha *Ley Suprema*, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en su legislación local.

El mencionado precepto constitucional establece los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la *Ley Suprema de toda la Unión*, debiendo los jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en

⁸² Gonzalez Oropeza, Manuel. *La Jurisprudencia: Su Conocimiento y Forma de Reportarla. Suprema Corte de Justicia de la Nación*. 2ª. Edición, México, 2008, págs. 261-264.

⁸³ Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la propia Constitución –anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011-, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones de la Constitución Federal y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso local correspondiente.⁸⁴

El principio de supremacía constitucional implica, en términos de jerarquía de leyes, que todo ordenamiento jurídico, aplicable dentro de una jurisdicción específica, está regido y subordinado a la Ley Fundamental, pues existe un nexo de las leyes ordinarias de supra-subordinación, respecto a la Constitución, de allí que la supremacía constitucional implica la sujeción de toda norma jurídica al orden constitucional, esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.⁸⁵

⁸⁴ Tesis de jurisprudencia 1ª/J. 80/2004, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2007, Novena Época, pág.264, rubro: “SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.”

⁸⁵ Tesis P.VIII/2007, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la

La supralegalidad constitucional, como la llama Miguel Carbonell, se presenta, en virtud de que la Constitución es el ordenamiento jurídico que rige toda la estructura y funcionamiento de las instituciones y órganos de poder pleno de un país, así como los derechos de sus habitantes, fijando las bases legales para ello y las acciones a ejercitar, en el caso en que no se respeten.⁸⁶

Así también, el sistema de justicia constitucional tiene fundamento en el artículo 40 de la Constitución Federal en cita,⁸⁷ que señala que la forma de Estado y la forma de gobierno de las entidades federativas deberán estar a los principios de la Ley Fundamental; en el artículo 41⁸⁸ que prescribe que las constituciones particulares de los Estados no podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, y en el artículo 128⁸⁹ que dispone que todo funcionario público sin excepción alguna prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen antes de tomar posesión de su cargo.

En virtud de que la Constitución –como toda norma jurídica- es susceptible de ser contravenida, es necesario que existan instrumentos que aseguren su eficacia, ya que resulta inexcusable la desobediencia a los postulados que contiene y que estructuran al Estado ideológico y orgánicamente; por lo que, el

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, pág.6, rubro: “SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL”.

⁸⁶ Carbonell, Miguel. *Constitución, reforma constitucional y, fuentes del derecho*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pág. 117..

⁸⁷ Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

⁸⁸ Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

“...”

control constitucional, concebido *lato sensu*, estriba en aquellos medios jurídicos que provienen, reparan, nulifican o sancionan la violación de las disposiciones constitucionales.

En sentido estricto debemos considerar como medios de control constitucional únicamente los instrumentos jurídicos que tienen por objeto mantener el respeto a las disposiciones constitucionales, a través de la nulidad de los actos contrarios a la Ley Fundamental, en otras palabras, podemos decir que los instrumentos de control constitucional *stricto sensu*, tienen carácter de *posteriori*, y persiguen la reparación del orden constitucional violado, y no sólo establecer una posibilidad y la imposición de alguna sanción, finalidad a la que contingente e indirectamente podrían servir.

Desde el momento en que la organización del Estado Mexicano se sustentó fundamentalmente en una Constitución rígida, expresión de la soberanía popular, para dar congruencia y hacer vigente el orden jurídico emanado de esa Ley Suprema, era indispensable establecer mecanismos y órganos de control de la regularidad constitucional de todas las leyes y actos de las autoridades.

Paralelamente al principio de supremacía constitucional, debemos observar que, al ser la Constitución la norma suprema de un sistema jurídico, tiene como consecuencia ser la norma primaria de dicho sistema. En otras palabras, es el punto de referencia del cual se desprenden las demás leyes y actos que conforman el sistema legal de una nación; es por ello que la propia Constitución debe establecer los medios para defender su observancia con el fin de que se cumplan cabalmente las disposiciones que ella establece.

Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia

⁸⁹ Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

de la Nación, en el sentido de que, en virtud de que los medios de control de la constitucionalidad, tiene por efecto que se fije el alcance de las normas supremas, que expresan la soberanía popular, debe considerarse que la jerarquía de las bases contenidas en ese Magno Ordenamiento conlleva el que sólo en ellas, mediante la voluntad soberana manifestada por el Constituyente o por el Poder Revisor de la Constitución, pueda establecerse la existencia de los referidos medios; ello sin menoscabo de que el legislador ordinario desarrolle y pormenore las reglas que precisen su procedencia, sustanciación y resolución.⁹⁰

En este sentido, se precisa que los medios de control constitucional establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,- antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011-, son:

- El juicio de amparo (artículos 103 y 107).⁹¹
- La acción de inconstitucionalidad (artículo 105, fracción I).⁹²

⁹⁰ Tesis de jurisprudencia P:/J.155/2000, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, pág. 843, rubro: “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS MEDIOS RELATIVOS DEBEN ESTABLECERSE EN LA PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO EN UN ORDENAMIENTO INFERIOR.”

⁹¹ Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

- I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales;
- II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y
- III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

- I. El juicio de amparo “...”

⁹² Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

- I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten “...”

- La controversia constitucional (artículo 105, fracción II).⁹³
- El juicio político (artículos 108 a 114).⁹⁴
- La facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 97, párrafo segundo).⁹⁵
- Los medios de impugnación en materia electoral (artículos 41, 60 y 99).⁹⁶
- El procedimiento que se lleva ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (artículo 102, Apartado B).⁹⁷

⁹³ Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución “...”

⁹⁴ Título Cuarto. De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.

⁹⁵ Artículo 97. “...” La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

⁹⁶ Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal “...”

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley “...”

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación “...”

A su vez, los ordenamientos jurídicos secundarios que regulan el procedimiento que se debe seguir, son respectivamente, para el primero la Ley de Amparo, abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013 (Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos); para las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para el juicio político, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no cuenta con ley reglamentaria del artículo 97, párrafo constitucional que es la que la regularía, sin embargo y derivado del número cada vez más creciente de casos sometidos a la consideración de la Corte, en donde se acciona este medio de control constitucional, se expidió el Acuerdo General 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen las *“Reglas a que deberán sujetarse las Comisiones de Investigación que se formulen con motivo del ejercicio de la facultad consignada en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”*⁹⁸ Los medios de impugnación en materia electoral, están regidos por la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación y, finalmente, el procedimiento que se lleva a cabo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está regulada por la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Conforme a la anterior enumeración de medios de control constitucional, Juventino V. Castro señala que el control judicial consiste en la defensa de la

⁹⁷ Artículo 102. B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos “...”

⁹⁸ Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 2007.

Constitución y de su esencia, y existen, en nuestro país, tres acciones procesales mayores para asegurar sus propósitos: el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La primera se acciona por los individuos; la segunda, por las entidades, poderes u órganos federados y la tercera, por las minorías legislativas, los partidos políticos o el procurador general de la República. En estas tres acciones se deposita el rescate de la integridad constitucional.⁹⁹

Así, en primer término es importante señalar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad a través del cual los gobernados pueden impugnar los actos de autoridad de carácter definitivo que estimen violatorios de sus derechos fundamentales o que, en su perjuicio, vulneren el régimen de competencias entre la federación y los estados o el Distrito Federal, con el objeto de que se les restituya en el goce de sus garantías conculcadas.

Dada la naturaleza del juicio de amparo, éste no constituye una instancia de revisión de los actos de las autoridades señaladas como responsables, sino que debe concretarse al estudio de las cuestiones que en forma legal se plantean debidamente en la demanda, a fin de precisar si existen o no las violaciones de derechos fundamentales que en ella se reducen, salvo los casos en los cuales opera la suplencia de la deficiencia de la queja.

Por su parte, Burgoa señala que el juicio de amparo es un juicio o proceso que se inicia por la acción que ejerce cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra acto de autoridad (*lato sensu*) que le causa un agravio en su esfera jurídica y que considere contrario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por su

⁹⁹ Castro V, Juventino, *El artículo 105 constitucional*, Editorial Porrúa, 3ª Edición, México, 2000, pág. 141.

inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que se origine.¹⁰⁰

Además, el juicio de amparo puede ser promovido en indirecto o directo. En ambos casos es vía acción. En el juicio de amparo indirecto la demanda de inconstitucionalidad se plantea ante el juez de Distrito competente, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de su reforma de 2011, con relación al artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada.

En dicho juicio, la demanda de amparo se presenta en contra de las autoridades directamente responsables en la elaboración de la ley, esto es, el legislativo que lo ha emitido, que puede ser, en caso de una ley federal, el Congreso de la Unión; en caso de leyes locales, la legislatura del Estado, el ejecutivo, que es el presidente que ha ordenado la promulgación y los secretarios de Estado que la refrendaron en la primera hipótesis, y los gobernadores y demás autoridades de las entidades federativas, que participan en el procedimiento de creación de leyes, según la legislación local respectiva.

La ley puede ser impugnada desde su promulgación (en su carácter de autoaplicativa) o bien, contra el primer acto de aplicación de la norma considerada inconstitucional por el quejoso (en su carácter de heteroaplicativa). Esto es, que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de

derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.¹⁰¹

La resolución del juez de Distrito puede ser atacada a través del recurso de revisión, ya sea ante el Pleno de la Suprema Corte o ante sus Salas, en los casos en que así lo prevenga la ley. Lo anterior está previsto en el inciso a), fracción VIII del artículo 107 constitucional antes de su reforma de 2011, con relación con el artículo 84, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada.

¹⁰⁰ Burgoa Orihuela, Ignacio, *El juicio de amparo*, Editorial Porrúa, 38ª. Edición, México, 2003, pág. 209.

¹⁰¹ Tesis de jurisprudencia P.J. 55/97, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, pág.5, rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS, DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA".

Cabe mencionar, que de conformidad con la facultad que le confiere a la Suprema Corte de Justicia el artículo 94, párrafo séptimo, de la Constitución Federal antes de la reforma de 2011, dicho Tribunal Constitucional ha emitido acuerdos generales¹⁰² por medio de los cuales ha delegado en los Tribunales Colegiados de Circuito, su competencia originaria para conocer de los recursos de revisión interpuestos en contra de sentencias de los jueces de Distrito que resuelvan sobre la constitucionalidad de leyes, en los casos específicos que tales acuerdos precisan, entre otros, cuando se trata de leyes locales, reglamentos, o cuando sobre el tema de inconstitucionalidad en debate exista jurisprudencia de ese Alto Tribunal.

En el juicio de amparo directo, la competencia para conocerlos es de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo abrogada.

En lo que respecta al citado amparo uninstitucional, no se somete al análisis jurisdiccional la ley, sino que se ataca un acto de autoridad fundado en aquélla, conforme lo disponen las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional antes de su reforma de 2011 y artículo 158 de la Ley de Amparo abrogada, es decir, en este juicio no son autoridades responsables las que han participado en el proceso de creación de la norma jurídica, sino la autoridad de quien emana dicho acto, que ha aplicado una disposición inconstitucional. También es importante tener en consideración, que las resoluciones emitidas por los tribunales colegiados en amparo contra leyes son susceptibles de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia, a través del recurso de revisión previsto en el artículo 83, fracción V del citado ordenamiento legal.

¹⁰² Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, página 1161.

Debe aclararse que la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de una ley consisten en desincorporar total o parcialmente de la esfera jurídica de la quejosa la norma legal declarada inconstitucional, sin hacer una declaratoria general, de manera que quien no haya sido expresamente amparado no puede beneficiarse con la apreciación que acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado haya expresado el juzgador en la mencionada sentencia; es decir; que quien no haya acudido al juicio de garantías y, en consecuencia, no haya sido amparado contra determinados ley o acto, está obligado a acatarlos no obstante que dichos ley o actos hayan sido estimados contrarios a la constitución en un juicio en el que aquél no fue parte quejosa.

En este orden de ideas, las características que distinguen al juicio de amparo indirecto y el directo contra leyes radican, conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esencia, en lo siguiente:

a) En el amparo indirecto la ley es uno de los actos reclamados y las autoridades legisladoras participan en el juicio como autoridades responsables, mientras que en el amparo directo la ley no puede constituir un acto reclamado ni se emplaza como autoridades responsables a sus autores;

b) En la vía indirecta el amparo concedido contra la ley produce la consecuencia práctica de invalidarla por cuanto hace al quejoso, por ende, no se le aplicará mientras esté vigente; en tanto que en la vía directa el amparo se concede única y exclusivamente en contra de la sentencia, laudo o resolución reclamada y no contra la ley, por tanto, la concesión solamente vincula a desaplicar la ley en ese caso concreto, pero no impide que se le vuelva a aplicar al quejoso;

c) En el amparo indirecto pueden rendirse pruebas para demostrar la inconstitucionalidad de la ley, mientras que en la vía directa no existe tal

posibilidad, aun cuando el quejoso pueda apoyarse en las pruebas ofrecidas ante la responsable para demostrar tal inconstitucionalidad;

d) En el amparo indirecto promovido sin agotar antes algún medio de defensa ordinario, el juez de Distrito tiene amplias facultades para determinar la improcedencia del juicio; en cambio, en el amparo directo (y en aquellos amparos indirectos promovidos después de haberse agotado un medio ordinario de defensa) deben respetarse los presupuestos procesales que ya estén determinados por la autoridad responsable, tales como el interés jurídico, la legitimación, la personalidad, etcétera;

e) En el amparo indirecto los Tribunales Colegiados de Circuito, a partir de las reformas constitucionales de 1994 y 1999, así como de la expedición de diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el 5/2001,¹⁰³ participan como órganos de segunda instancia en virtud de la delegación de competencia que les hace este Alto Tribunal, conforme a la cual, en determinadas condiciones, resolverán sobre el fondo del asunto y sus decisiones serán terminales; por su parte, en el amparo directo esos órganos son de primera instancia y sus sentencias también son revisables por la Suprema Corte, solamente en la materia de constitucionalidad de leyes o interpretación directa de la Constitución Federal;

f) En el amparo indirecto sólo pueden interponer revisión, en defensa de la constitucionalidad de la ley, los titulares de los órganos de Estado a quienes se encomiende su promulgación, o quienes la representen, en tanto que en el amparo directo, como ya se dijo, no participan los órganos legiferantes y, por ende, no son ellos quienes pueden interponer la revisión; en cambio, en muchos

¹⁰³ Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *ob.cit.* pág. 1161.

casos, la autoridad que aplicó la ley figura como tercero perjudicado –ahora tercero interesado- y puede, con ese carácter, hacer valer dicho recurso; y,

g) En el amparo indirecto el juez de Distrito resuelve sobre la suspensión de los actos reclamados, mientras que en el directo esa decisión le corresponde a la autoridad responsable.¹⁰⁴

Debiendo resaltar, que es imperativo legal suplir la queja deficiente en materia de amparo cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, en términos del artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, lo cual se instituyó con el propósito de lograr un eficaz control de la constitucionalidad de las leyes a fin de hacer prevalecer la Constitución; lo que implica la obligación para los juzgadores de amparo de suplir en esos casos la deficiencia de la queja, en forma absoluta, para hacer efectiva la referida declaración de inconstitucionalidad. Ello, porque la finalidad esencial de garantizar el principio de supremacía constitucional es superior a cualquier interés particular, pues se busca evitar la aplicación de leyes contrarias a ella; consecuentemente, ante el interés público que como bien supremo del Estado debe imperar en todo caso, es necesario que se acate puntualmente la obligación de suplencia de la queja en los términos señalados, sin que pueda estimarse justificado el incumplimiento de ese imperativo legal y menos aún la inobservancia de la jurisprudencia emitida por el Máximo Tribunal del país.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Tesis P. VIII/2005, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, pág.5, rubro: “AMPARO CONTRA LEYES. SUS DIFERENCIAS CUANDO SE TRAMITA EN LAS VÍAS INDIRECTA Y DIRECTA”.

¹⁰⁵ Tesis de jurisprudencia 2ª. 101/2005, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, pág.522, rubro: “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA TRATÁNDOSE DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO

En otro orden de ideas, en relación a las controversias constitucionales, los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran precisamente las controversias constitucionales, previstas en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal reformada en 2011, cuya resolución se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de 1995, fue fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, consistente en que la actuación de las autoridades se ajuste a lo establecido en aquélla, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental, produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultaría contrario al propósito señalado, así como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades, máxime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.

Las controversias constitucionales, en términos del artículo 105 de la Constitución Federal antes de su reforma de 2011, sólo pueden plantearse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los titulares del derecho, que son las

propias entidades federativas o la Federación, pero no por los particulares, pues ellos no son titulares de los derechos que se pueden controvertir en ese litigio constitucional. Toda controversia constitucional, por su propia naturaleza, sólo puede presentarse entre los integrantes de la Unión y son éstos quienes deben plantear el conflicto si consideran afectados sus intereses, de acuerdo con la recta interpretación del precepto citado; además, debe señalarse que esta institución va dirigida esencialmente a la preservación de los límites que la propia Constitución establece entre las facultades de los entes federativos.

Por otro lado, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general, -leyes federales o locales o tratados internacionales-, y la propia Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad son un control abstracto de constitucionalidad, ya que al tener por objeto defender la regularidad constitucional, no exigen la existencia de un agravio, ni de un interés jurídico específico.

Respecto a las acciones de inconstitucionalidad, del análisis y la interpretación de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes de la reforma de 2011, se advierte que:

- Si las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, entonces sólo son procedentes contra normas de carácter general;

- En el propio precepto se habla sólo de leyes y tratados internacionales entendidos como normas de carácter general. Consecuentemente, las acciones de inconstitucionalidad proceden contra normas de carácter general, pero no contra cualquiera de éstas, sino sólo contra aquellas que tengan el carácter de leyes, o bien, de tratados internacionales. En iguales términos, la Ley Reglamentaria de las

Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional antes de la reforma de 2011, tratándose de acciones de inconstitucionalidad se refiere únicamente a normas generales, leyes y tratados internacionales; por lo tanto, también debe concluirse que prevé la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad exclusivamente en contra de esas normas. La intención del Constituyente Permanente, al establecer las acciones de inconstitucionalidad fue la de instituir un procedimiento mediante el cual se pudiera confrontar una norma de carácter general con la Constitución y que la sentencia que se dictara tuviera efectos generales, a diferencia de lo que sucede con el juicio de amparo, en el que la sentencia sólo tiene efectos para las partes. No puede aceptarse su procedencia contra normas diversas, ya que en tales casos, por la propia naturaleza del acto combatido, la sentencia no tiene efectos generales, sino relativos. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1o. de la misma ley y con la fracción II del artículo 105 de la Constitución antes de la reforma de 2011, las acciones de inconstitucionalidad sólo son procedentes contra normas de carácter general, es decir leyes o tratados, y son improcedentes en contra de actos que no tengan tal carácter.¹⁰⁶

En tanto que, si bien es cierto que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos medios de control de la constitucionalidad, también lo es que cada una tiene características particulares que las diferencian entre sí; a saber:

¹⁰⁶ Tesis de jurisprudencia P:/J. 22/99, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX,, Abril de 1999, Novena Época, página. 257, rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O TRATADOS INTERNACIONALES."

a) En la controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental;

b) La controversia constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal a diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma;

c) En la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma;

d) Respecto de la controversia constitucional, se realiza todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento;

e) En cuanto a las normas generales, en la controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas;

f) Por lo que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos, mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede por lo que respecta a normas generales; y,

g) Los efectos de la sentencia dictada en la controversia constitucional tratándose de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros.¹⁰⁷

2.2 El control constitucional y su aplicación en el ámbito judicial.

a) Interpretación, jurisprudencia y sentencias relevantes antes de la reforma constitucional de dos mil doce.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del tiempo, ha realizado diversas interpretaciones en relación al control constitucional difuso o control constitucional concentrado derivado del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,¹⁰⁸ el cual, como se precisó en el apartado anterior, continúa en su texto original desde su promulgación en 1917, y cuya disposición determina, en lo conducente, que *“Los jueces de cada Estado se*

¹⁰⁷ Tesis de jurisprudencia P:J: 71/2000, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, página 965, rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.”.

¹⁰⁸ Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.” Por lo que atendiendo al sentido de esta disposición, la Constitución Federal ordena a los jueces locales que si una norma (general) local es contraria a cualquiera de los tres ordenamientos apuntados, deben preferir la aplicación de cualquiera de estos tres, frente a las que componen su propio orden jurídico.

Así, en una primera época de la interpretación constitucional referida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo administrativo en revisión 3596/33, resuelto el 23 de mayo de 1934, sustentó la tesis de rubro: *“CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY”*, en el sentido de que conforme con el artículo 133 de la Constitución Federal, todos los jueces de la República tienen la obligación de sujetar sus fallos a los dictados de la misma, a pesar de las disposiciones que en contrario pudieran existir en las otras leyes secundarias, por lo que siendo esto así, resultaría ilógico pretender que cumplieran dichos jueces con esa obligación, si no tuvieran a la vez la facultad correlativa de discernir si las leyes que rigen los actos, materia de la contienda, se ajustan o no a la propia Constitución, cuando esa cuestión forma parte del debate, ya que de aceptarse la tesis contraria, sería imponer a los jueces una obligación, sin darles los medios necesarios para que pudieran cumplirla.¹⁰⁹

Esto es, en un principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostenía un criterio de control constitucional difuso en cuanto a que todos los jueces de la República, se entiende entre otros, a los jueces locales, tenían la facultad de discernir si las leyes que regían la contienda puesta a su potestad, son o no constitucionales, es decir, se les permitía considerar la constitucionalidad de las disposiciones generales que deberían aplicar. Cabe precisar, que con el criterio anterior no quedaba claro la conducta que deberían llevar a cabo esos mismos

jueces ante tal hipótesis, por lo que más adelante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó de revisar y acotar el alcance de tales facultades en el sentido de que debía consistir en que *“las autoridades comunes deberán abstenerse de aplicarlas”*, como se infiere del criterio derivado del amparo en revisión en materia de trabajo 5172/35, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 5 de noviembre de 1935, comprendido en la tesis titulada: *“LEYES, FACULTAD DE LAS AUTORIDADES PARA DECLARARLAS ANTICONSTITUCIONALES”*, en el sentido de que de acuerdo con lo prevenido en el artículo 133 de la Constitución Federal, las autoridades comunes debían ajustar sus procedimientos a las disposiciones de dicha Constitución Federal, a pesar de las disposiciones en contrario que pudieran existir en otras leyes o Constituciones locales, lo que quería decir que tratándose de disposiciones contrarias en forma manifiesta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades comunes deberían abstenerse de aplicarlas, sin que esto significara que tratándose de un precepto de ley, que no estaba en contradicción manifiesta con texto expreso alguno de la Constitución, y cuya inconstitucionalidad sólo podría sostenerse con razonamientos que no pudieran derivarse de una manera clara y precisa de la misma ley, pudiera una autoridad común declarar anticonstitucional un precepto de esta naturaleza, no estando facultada para hacer semejante declaración, toda vez que esa facultad sólo la tenía la Suprema Corte o los jueces de Distrito, en su caso.¹¹⁰

En este sentido, el propio Pleno del Máximo Tribunal del país al resolver la competencia 5/46, el 16 de julio de 1946, precisó que la conducta a seguir de la autoridad del fuero común era *“desacatar las disposiciones en contrario de las leyes locales de cualquier categoría que fueren”*, esto, ante la evidente

¹⁰⁹ Tesis Aislada, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLI, Quinta Época, página 645.

¹¹⁰ Tesis Aislada, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVI, Quinta Época, página 2966.

inconstitucionalidad en que se funda el acto, conforme a la tesis de rubro: *“INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, SUPREMA CORTE, FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA”*, en el sentido de que el mandato contenido en el artículo 133 constitucional regía para la justicia local de todas la entidades federativas, por lo que los jueces debían atender a la Constitución y desacatar las disposiciones en contrario de las leyes locales de cualquiera categoría que fueren, sin que esto significara que pudieran declarar por sí y ante sí la inconstitucionalidad de alguna ley expedida por el Congreso Federal, por ser una atribución exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijar la inconstitucionalidad de las leyes, en los términos precisos de los artículos 103, 105 y 107 de la Ley Fundamental, vigente en esa época, esto es, mediante el juicio de amparo en el que se demandara la declaración de inconstitucionalidad de una ley.¹¹¹

De igual modo, en la resolución relativa a la competencia 160/45, resuelta por el Pleno del más Alto Tribunal del país, el 23 de julio de 1946, que motivó la tesis de rubro: *“INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES”*, se precisó que la Corte tenía la facultad de resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o de un acto de autoridad, siempre que existiera petición o instancia de parte, que se siguiera el procedimiento establecido por la ley, o sea, el juicio de amparo, y se oiga la defensa de la autoridad responsable, y que, actuando en ese procedimiento y no en otro diverso, se pronunciara sentencia que se ocupara tan solo del caso concreto y singular al cual se refería la queja, limitándose a proteger y amparar al agraviado, pero sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que motivare aquella; lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 133 de la Constitución, era conformativo del régimen federal y evitaba el predominio de las leyes locales sobre la Constitución, estableciendo con firmeza, la supremacía de la misma Carta Fundamental, pero no era fuente de competencia de la cual resultara la facultad de los tribunales federales, y, por

¹¹¹ Tesis Aislada, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, Quinta Época, página 597.

tanto, de la Suprema Corte, para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, pues obligaba a los jueces de los Estados a proceder siempre conforme a la Constitución, obligación que, por lo demás, no era tan sólo de estos funcionarios, sino de todas las autoridades, cuyos actos tenían la presunción de constitucionalidad, que cedía únicamente ante la eficacia decisiva de un fallo judicial federal que la excluyera mediante el juicio de amparo ¹¹²

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la competencia 10/47, resuelta el 30 de marzo de 1948, instituyó la tesis de rubro siguiente: *“LEYES, DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS, POR LA SUPREMA CORTE”*, reiterando sustancialmente el criterio asumido en la competencia 160/45, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía la facultad para resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, o de un acto de autoridad siempre que se satisficieron los requisitos exigidos para el caso, por lo que el conocimiento de tales cuestiones estaría subordinado siempre a la existencia de una instancia de parte interesada y el fallo debía producirse dentro del procedimiento de amparo correspondiente. ¹¹³

En reiteración sustancial a tales criterios, el Pleno de la Suprema Corte de la Nación al resolver los amparos en revisión 2053/60, 2921/59, 4650/59, 4059/59 y 4547/59, en los meses de enero y abril de 1964, sustentó el criterio –tesis de jurisprudencia histórica- del rubro siguiente: *“TRIBUNAL FISCAL. CARECE DE*

¹¹² Tesis Aislada, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, Quinta Época, página 775.

¹¹³ Tesis Aislada, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVI Quinta Época, página 2278.

COMPETENCIA PARA JUZGAR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES."¹¹⁴, en el que se precisó que el Tribunal Fiscal de la Federación carecía de competencia para estudiar y resolver sobre la inconstitucionalidad de una ley, debido que tal facultad correspondía al Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó los criterios apuntados, determinando que si bien existían algunos precedentes que permitían a los tribunales locales analizar la constitucionalidad de las normas locales, y en su caso, no aplicar la disposición que estiman inconstitucional, en realidad correspondía esa determinación a la Suprema Corte, o bien, a los jueces de Distrito, para así asumir un control constitucional concentrado, esto es, en una primera instancia los juzgados de Distrito, y como Tribunal de Alzada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ostentándose está como Tribunal o Sala Constitucional, no obstante de conocer también de cuestiones de legalidad de acuerdo a su competencia en aquella época; estableciendo que de acuerdo a la Constitución Federal, no todo órgano judicial era competente para declarar la inconstitucionalidad de una ley, sino solamente la propia Suprema Corte.

Conforme a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 914/1998, el 19 de noviembre de 1998, sostuvo, en lo que interesa, que en términos del numeral 133 de la Constitución Federal, en lo que respecta al denominado "*control difuso*", sólo el Poder Judicial Federal podía calificar la constitucionalidad de las leyes a través del juicio de amparo.

¹¹⁴ Tesis de Jurisprudencia 32 (H), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 1917-Séptiembre2011, Tomo I, Constitucionalidad1, Distribución de Funciones entre las Entidades Políticas del Estado Mexicano Segunda Parte- Históricas, Sexta Época, página 2966.

Al respecto precisó, que si bien era cierto que en principio la redacción del artículo 133 constitucional sugería la posibilidad de que los jueces podían juzgar la constitucionalidad no sólo de sus actos sino además la de los ajenos, especialmente las leyes y Constituciones de los Estados en cuya jurisdicción ejerzan, y que en dicho sentido se llegó a pronunciar inicialmente la Suprema Corte; sin embargo la postura sustentada por el propio Alto Tribunal de manera predominante había sido en sentido opuesto teniendo en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que informan nuestra Constitución; lo anterior, con base en la tesis de rubro y contenido siguiente: *"CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE, POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN"* ¹¹⁵ en cuanto a que no existía jurisprudencia de la Corte que impusiera a la autoridad judicial común, por aplicación literal del artículo 133 constitucional, la obligación de calificar la constitucionalidad de las leyes que norman el contenido de sus resoluciones, pues si bien ocasionalmente había llegado a sustentarse tal tesis, la mayoría de los precedentes se orientaban en el sentido de considerar que sólo el Poder Judicial de la Federación podía calificar la constitucionalidad de las leyes a través del juicio constitucional de amparo, esto es, que, conforme a la Constitución Federal no todo órgano judicial era competente para declarar la inconstitucionalidad de una ley, sino solamente el Poder Judicial Federal, a través del juicio de amparo, donde la definición de inconstitucionalidad emitido por la autoridad federal se rodeaba de una serie de requisitos que trataban de impedir una desorbitada actividad del órgano judicial en relación con los demás poderes. ¹¹⁶

¹¹⁵ Tesis Aislada, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXXV, Sexta Época, página 37.

¹¹⁶ Tesis Aislada, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 42, Cuarta Parte, Séptima Época, página 37.

Es decir, el criterio predominante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reiteró en el resumido fallo -amparo directo en revisión 914/1998, 19 de noviembre de 1998,-, consideraba que el artículo 133 constitucional no era fuente de facultades de control constitucional para los jueces del orden común, pues dicho precepto debía ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto, que se traducía en un juicio específico cuya procedencia se encontraba sujeta a diversos requisitos con la finalidad de evitar la anarquía en la organización y distribución de competencias de las autoridades estatales, como se corroboraba con la tesis de jurisprudencia siguiente, la cual se reproduce en su literalidad, dada su relevancia, *“CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que "Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados." En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.”*¹¹⁷

¹¹⁷ Tesis de jurisprudencia P./J. 74/99 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Novena Época, página 5.

Así mismo, en el referido amparo directo en revisión 914/1998, resuelto el 19 de noviembre de 1998, el Pleno de la Suprema Corte sustentó el criterio motivo de la tesis de rubro: “*CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN*”, en el sentido de que la supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico-político mexicano, el cual descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución, y por ende, la misma está por encima de todas las leyes y todas las autoridades, por lo que las actuaciones de éstas deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquélla. Por lo que, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos constitucionales, los actos que realizan en el ejercicio de sus atribuciones; en ese sentido, si bien era cierto que los tres Poderes de la Unión debían observar la Ley Suprema, no podía afirmarse que por esta razón, las autoridades pudieran, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagraba, en sus artículos 103 y 107, un medio de defensa expreso, por vía de acción, como era el juicio de amparo y lo encomienda, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación.¹¹⁸

Al respecto consideró que si bien desde la Constitución de 1857 se reprodujo, en esencia, el artículo 126 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en el contenido del actual artículo 133 de la Constitución de 1917, sin embargo su aplicación era diversa en ambas latitudes, pues mientras en aquel país esta disposición tenía una vigencia plena en la medida en que el control constitucional se desplegaba por la vía de excepción o defensa inicialmente ante cualquier autoridad local y pasaba después a la jurisdicción federal a través de recursos procesales, que vinculaban dentro de un solo proceso las dos instancias

¹¹⁸ Tesis de jurisprudencia 160, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN. Novena Época, página 197.

desarrolladas sucesivamente ante las dos jurisdicciones; en cambio, en nuestro sistema jurídico, el control constitucional se prevenía en la vía de acción y se encomendaba exclusivamente al Poder Judicial de la Federación.

Cabe precisar, a manera de ilustración y orientación, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 5611/1973, el 10 de septiembre de 1974, mismo que es uno de los precedentes de la tesis de jurisprudencia cuyo texto es el siguiente: “*LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS DE COMPETENCIA*”, establecía que tratándose de amparo contra leyes podía obtenerse las siguientes reglas de competencia: en amparo biinstancial, una ley que se estime inconstitucional o un acto tildado invasor de soberanías, pueden ser reclamados ante un juez de Distrito a través de su promulgación o del acto de su aplicación, según el artículos 107, fracción VII, constitucional vigente antes de la reforma de 2011 y el diverso 144, fracciones II y VI, de la Ley de Amparo abrogada, en relación con los artículos 42, fracciones II y III, y 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El amparo contra sentencia definitiva en el que se aduzcan razones de inconstitucionalidad de la ley, puede promoverse como amparo directo ante un Tribunal Colegiado según el régimen de competencias establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (7o. bis fracción I). Puede ser recurrida a través del recurso de revisión la sentencia que en amparo directo pronuncie un Tribunal Colegiado de Circuito (artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada) y conocer del mismo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). En el amparo directo siempre se reclama una sentencia definitiva, sea que la violación constitucional alegada se haya cometido en la secuela del procedimiento o en la propia resolución (artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Federal antes de la reforma de 2011); y 44, 45 y 46 en relación con los artículos 158 y 167 de la Ley de Amparo abrogada, cuando el conocimiento del asunto no corresponde a alguna de las Salas de la Corte, en los términos de los artículos 24 fracción III, 25 fracción III, 26 fracción III

y 27 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.¹¹⁹

Se aclara que el único medio de control constitucional para impugnar leyes electorales era la acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción II, de la Constitución General antes de su reforma de 2011, cuya autoridad competente para conocer y resolver dichas acciones, era en exclusiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no podía, en ningún caso, pronunciarse acerca de la constitucionalidad de leyes electorales, por no ser impugnables ante él con motivo de los actos y resoluciones en los que se hubieran aplicado, porque por un lado, en atención a su naturaleza, en cuanto a que están destinadas a regir un proceso electoral, es imprescindible partir de su firmeza, ya que de otra forma se vulneraría el equilibrio del proceso electoral, pues no sería lógico que conforme a un sistema de contienda electoral entre partidos políticos, se cuestionara la constitucionalidad de una norma relativa a ese proceso, con motivo de actos y resoluciones producidos en él; y por el otro, que está fuera de las facultades de ese tribunal cotejar la norma electoral frente a la Constitución, aun a pretexto de determinar su posible inaplicación, pues tal facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes electoral corresponde, en exclusiva, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía acción de inconstitucionalidad.¹²⁰

De este modo, la Suprema Corte estableció que el único medio de llevar a cabo el control de la constitucionalidad de las leyes era través de los procesos (amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad) de los cuales correspondía conocer a los órganos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación.

¹¹⁹ Tesis de jurisprudencia 205, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 1995, Tomo I, Parte SCJN. Séptima Época, página 197.

¹²⁰ Tesis de jurisprudencia P./J. 25/2002, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, página 20, rubro: "LEYES ELECTORALES. LA ÚNICA VÍA PARA IMPUGNARLAS ES LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD".

2.3 Control constitucional mixto predominante concentrado.

Las consideraciones antes vertidas nos permiten advertir que en México, antes de la reforma constitucional de dos mil once, el sistema de justicia constitucional tenía las siguientes características principales: sucesivo (a diferencia de preventivo), abstracto como concreto, en vía de acción (no de excepción), recaía sustancialmente en el Poder Judicial de la Federación y contenía instrumentos que podrían catalogarse tanto de control concentrado como de control difuso.

Era sucesivo, pues todos los medios de control constitucional analizaban normas vigentes y no antes de su entrada en vigor como en el caso de los sistemas preventivos. Era en parte abstracto, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, y concreto, en los demás medios de control constitucional. En vía de acción en todos los casos, aunque con características y requisitos distintos de acuerdo al medio de control que se trate.

Asimismo, se ejercía, en cuanto a los principales medios de control constitucional, por los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, quienes eran los únicos facultados para pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes y demás actos de autoridad; y contenía instrumentos que podrían considerarse de control concentrado, como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que estaban a cargo, de manera exclusiva, de la Suprema Corte de Justicia, así como medios de control constitucional que podrían catalogarse como difusos, como el juicio de amparo.

Las citadas características del sistema de control constitucional en México, antes de la reforma constitucional de dos mil once, impiden considerarlo como

meramente concentrado o difuso, por lo que debe ubicarse dentro de un contexto híbrido, que si bien retoma características de los dos sistemas tradicionales, incluye particularidades que lo separan y lo distinguen. Lo anterior se sustenta en el siguiente análisis:

Como se comentó con antelación, en México, el control constitucional se ejerce principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actúa en Pleno o a través de sus dos salas, pues dicho Tribunal Supremo tiene el "monopolio" competencial para conocer de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, a través de las cuales, en los términos y con los requisitos que establece la constitución y la ley reglamentaria respectiva, se puede declarar la invalidez de las normas secundarias motivo de análisis con efectos generales.

En el caso de las acciones de inconstitucionalidad se trata de procedimientos constitucionales de naturaleza meramente abstracta, no así en cuanto a las controversias constitucionales, que revisten la característica de concreto.

Asimismo, el más alto Tribunal del país tiene competencia originaria para conocer del medio de control constitucional por excelencia en México, el juicio de amparo contra tratados internacionales, leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, reglamentos y demás ordenamientos generales, no de manera directa, sino como órgano revisor.

A diferencia de los medios de control constitucionales antes referidos, en el juicio de amparo contra leyes, los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad no son generales, sino relativos a las partes que obtuvieron la protección constitucional.

Además, se trata de un procedimiento constitucional concreto, en el que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley se concretizan sólo con respecto al particular que obtuvo la protección constitucional.

No obstante la facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los medios de control constitucional enunciados en primer lugar - acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales- el juicio de amparo contra leyes también es facultad de los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, tales como los jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, pues los jueces de Distrito y los tribunales unitarios, por disposición de la ley, conocen del juicio de amparo indirecto en contra de tratados internacionales, leyes y demás ordenamientos generales, y los tribunales colegiados, por disposición de ley y por medio de los acuerdos delegatorios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia sustentados en el artículo 94, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, conocen de los amparos directos en los que se aduzca la inconstitucionalidad de leyes, así como de recursos de revisión en contra de sentencias de jueces de Distrito en juicios de amparo contra leyes.

Los mencionados juzgados de distrito y tribunales colegiados y unitarios de circuito se encuentran localizados en prácticamente todas las entidades federativas del País, y su competencia comprende no sólo el análisis de la constitucionalidad de leyes, sino también de diversos actos de autoridad dependiendo de la especialidad que tengan, por lo que tratándose de los jueces de Distrito y tribunales unitarios de Circuito, conocen, además de juicios de amparo contra leyes y actos de autoridad, de juicios y procesos ordinarios federales, y los tribunales colegiados de circuito, conocen del juicio de amparo directo (en el que si bien puede alegarse la inconstitucionalidad de una ley, deben hacerse como concepto de violación y no como acto reclamado, por lo que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta a la ley sino al acto de aplicación), revisiones fiscales (en los que se analizan aspectos de legalidad), así como

recursos en contra de resoluciones dictadas por los jueces de distrito y tribunales unitarios de circuito, entre otros.

Tales características del sistema de justicia constitucional en México permiten evidenciar, en primer lugar, que la justicia constitucional en México no se ejerce de manera concentrada sólo a través de un tribunal supremo constitucional, sino a través de múltiples tribunales diseminados en toda la República Mexicana, que no sólo ejercen facultades de tribunal constitucional, sino, además, facultades esencialmente de legalidad, por lo que no puede hablarse propiamente de un sistema de control constitucional que se concentra en un tribunal constitucional.

Tampoco puede decirse que los medios de control constitucional en México, como sucede en el sistema de control constitucional concentrado, sean abstractos y que las declaratorias de inconstitucionalidad tengan efectos generales, pues si bien existen medios de control constitucional con tales características, como en el caso de la acción de inconstitucionalidad, éstos coexisten con medios de control constitucionales concretos, cuyas declaratorias de inconstitucionalidad tienen efectos únicamente para las partes que actuaron en el proceso, entre otros, el juicio de amparo, por lo que partiendo de ese análisis, no puede considerarse que en México el sistema de justicia constitucional fuera específicamente concentrado.

Tampoco podía considerarse que se estuviera en un sistema de control constitucional propiamente difuso, en el que cualquier tribunal pueda desaplicar una norma legal por considerarla contraria a la constitución, debido a que, por las razones que se dieron con anterioridad, en México, el análisis y la determinación de que una ley es contraria a la constitución era facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación, que la ejercía, como se dijo, a través de sus distintos órganos jurisdiccionales y medios de control constitucional comentados, por lo que los jueces ordinarios -no integrantes del Poder Judicial Federal- no podían, en ningún caso, efectuar tal análisis y ordenar con base en ello la desaplicación de

una norma por estimarla contraria a un precepto o principio constitucional; prohibición que incluso regía también a los distintos tribunales de la Federación que no formaban parte del Poder Judicial Federal.

Sin que pueda estimarse que el hecho de que en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo¹²¹ los jueces ordinarios estén obligados a acatar la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación que determine la inconstitucionalidad de una ley, se traduzca en una facultad para el tribunal ordinario tanto de analizar la constitucionalidad de la ley como de determinar su desaplicación al estimarla contraria al texto constitucional, pues en realidad se trata de una obligación y no de una facultad, en el caso de desaplicar la norma al resultar ilegal su aplicación por la autoridad por resultar dicha norma contraria a la constitución, mas no en virtud del análisis realizado por el juez común, sino por la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial Federal, por lo que no existe un pronunciamiento o determinación propia del juez ordinario con respecto a la constitucionalidad de la ley, sino solo un actuar que se traduce en su desaplicación en estricto cumplimiento al mandato legal contenido en los preceptos legales mencionados.

¹²¹ Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decreta el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas.

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.

Artículo 193. La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no

Además de que en el sistema de control constitucional mexicano los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley puede tener efectos generales en sí misma, como en el sistema concentrado, cuando se trate de algunos medios de control constitucionales tales como la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales -en los términos y condiciones legales- y no sólo efectos entre partes, como en el sistema difuso. En esos términos, no puede considerarse que en México el sistema de justicia constitucional fuera propiamente difuso.

De lo antes expuesto, se concluye que el sistema de justicia constitucional en México, antes de la reforma constitucional de 2011, era intermedio o híbrido, con la característica de ser predominantemente concentrado. Lo anterior pues tenía diferencias sustanciales con los sistemas europeo y americano, debido a que, en principio, no se concentraba en un tribunal constitucional, como en el caso del primero, pero tampoco la justicia constitucional se ejercía por los jueces ordinarios, sino únicamente por los órganos integrantes del Poder Judicial Federal, que tienen características singulares, debido a que cuentan con facultades mayoritariamente de control constitucional, aunque, en menor término, de control de legalidad, y se encuentran diseminados en todo el país, por lo que no se ejercía, en ningún caso, por los jueces ordinarios, al no contar éstos con facultades para analizar la constitucionalidad de la ley y ordenar su inaplicación a casos concretos, aunque sí estaban facultados para desaplicar la norma si había sido declarada su inconstitucionalidad en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se advierte un sistema de precedentes como en el sistema americano, aunque con características particulares, pues solo puede constituir precedente obligatorio el emanado de ciertos tribunales del Poder Judicial Federal y que cumplan con ciertos requisitos legales, acorde a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la anterior Ley de amparo.

interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado.

Esto es, en cuanto a los órganos encargados de ejercer el control constitucional no podía estimarse difuso, debido a que no todos los órganos judiciales del país, federales, locales, etc. podían llevar a cabo, el control de constitucionalidad de leyes, pues los tribunales pertenecientes a los Poderes Judiciales de las entidades Federativas y del Distrito Federal, así como algunos Tribunales Federales ajenos al Poder Judicial de la Federación carecían de facultades para efectuar el control constitucional. Sin embargo tampoco podía estimarse concentrando, pues el control constitucional no recaía en un solo Tribunal Constitucional, sino en una multiplicidad de tribunales, localizados en todo el territorio nacional, con la particularidad de que todos pertenecían a un mismo Poder, el Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito), aunado a que algunos medios de control constitucional tales como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional son de exclusiva competencia del tribunal constitucional supremo, llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación, a diferencia del juicio de amparo contra leyes, el cual también es conocido por juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y, por competencia delegada, por los Tribunales Colegiados de Circuito.

Por otra parte tenía la característica propia del control constitucional concentrado, en cuanto a que se lleva a cabo en todos los casos, vía acción, sin embargo, no obstante lo anterior, tratándose de uno de los medios de control constitucional, como lo es el juicio de amparo, el análisis de constitucionalidad podría considerarse subjetivo, pues si bien se examina la constitucionalidad de la ley, el objeto principal de estudio, son los derechos fundamentales del ciudadano en el caso particular, a diferencia de otros medios de control constitucional, como es la acción de inconstitucionalidad en el que el examen de constitucionalidad es mayormente objetivo y abstracto.

En cuanto a los efectos de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley, tenía características de ambos sistemas, dependiendo del medio de control constitucional que se tratara. Así, en el caso del juicio de amparo, los efectos eran relativos, solo para las partes en el juicio respectivo, sin embargo tratándose de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional, los efectos podrían ser generales en el sentido de obtener la declaratoria general de invalidez de la norma impugnada (sujeto a la aprobación de una mayoría de ocho ministros).

Así, por las razones anteriores, el sistema de justicia constitucional en México antes de la reforma constitucional de dos mil once, era mixto y predominantemente concentrado, toda vez que carecía de la característica, que se estima medular e inherente al control difuso, consistente en que todos los órganos judiciales de un estado puedan ejercer un control constitucional y desaplicar una norma general, por estimarla contraria al texto constitucional, así como de la subsecuente característica del conocimiento de control constitucional vía excepción.

Capítulo III. Reforma constitucional en México de junio de dos mil once.

3.1 Dictamen de la reforma constitucional.

El seis de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto con el que se reforman, adicionan y derogan los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹²² con la finalidad de modificar substancialmente el juicio de amparo, y como consecuencia, la Ley de Amparo.

Es importante resaltar que, uno de los cambios más importantes que se propusieron en la correspondiente iniciativa,¹²³ fue el relativo al objeto de protección del juicio de amparo, esto es, de los derechos fundamentales en el sentido de que mediante el juicio de amparo se protegieran de manera directa, además de los derechos que actualmente se preveían en la Constitución, los contenidos en los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el Estado Mexicano, a fin de que el juicio de amparo se transformarse substancialmente y no sólo en cuanto a su denominación como *"juicio de garantías"*. Como punto relevante proponía una ampliación explícita de los contenidos a los cuales deberán subordinar sus actuaciones las autoridades públicas, lo que había de permitir la consolidación del Estado de Derecho. En ese mismo sentido y por lo que se refiere a los derechos económicos sociales y culturales reconocidos en la Constitución y en los mencionados instrumentos internacionales, debía precisarse que el reconocimiento y tutela que se hiciera de

¹²² Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. 6 de junio de 2011.

¹²³ Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (19 de marzo 2009) .

ellos, implicaba la necesidad de modificar nuestro entendimiento de tales derechos como normas programáticas, que en la práctica había sido vistas simplemente como directrices abiertas para el Estado y no como derechos exigibles de manera individual o colectiva.

Entre los aspectos fundamentales de la iniciativa propuesta se encontraban; la tutela y protección de los *“derechos humanos contenidos en tratados internacionales”*, la admisión del juicio del amparo en tanto se demuestre la existencia de un *“interés legítimo”*, el reconocimiento legal de amparo por *“omisión de la autoridad”*, entre otras, como la institucionalización de la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual implica la eliminación del principio de relatividad como la consecuente Cláusula Otero.

Entonces, se puede decir que el objetivo central del contenido de la iniciativa fue llevar a cabo una reforma integral al instrumento de control constitucional más importante que se tiene en el ordenamiento jurídico mexicano, y el principal medio de protección de los derechos fundamentales, que es el juicio de amparo. Debido a ese papel trascendental que juega en la vida jurídica y política del país, es que se pretendía fortalecerlo a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que habían dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección.

Por otro lado, la iniciativa propuso el fortalecimiento y perfeccionamiento de la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a su órgano superior: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un tribunal garante de nuestra Constitución, a fin de permitirle concentrarse en la resolución de aquellos asuntos que revistieran la mayor importancia y trascendencia para la totalidad del ordenamiento jurídico nacional y del Estado Mexicano en su conjunto.

En atención a lo anterior, la mencionada reforma constitucional amplió el ámbito de protección del juicio de amparo, tutelando los derechos humanos establecidos en la Constitución y los reconocidos en tratados internacionales, claro está que estos últimos, solo serán aquellos de los que el Estado Mexicano sería parte, a fin de que el amparo proceda contra cualquier violación de derechos humanos, sean los establecidos en la Constitución, las leyes o acuerdos internacionales.

Se adoptó además la figura del amparo por omisión de la autoridad para los casos en que aquélla con su accionar pasivo o de omisión violará derechos humanos. Así, el juicio de amparo se amplió contra la omisión o el “*no hacer*” de las autoridades.

Además, se incorporó a la regulación del juicio de amparo la figura de las declaratorias generales de inconstitucionalidad, las cuales pueden ser emitidas por la mayoría calificada de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera tal que los efectos del juicio de amparo adquieren un carácter general beneficiando a todos los particulares aún cuando el juicio de amparo lo hubiese solicitado una sola persona. Para ello se requiere de la resolución o aprobación del Pleno de la Suprema Corte en votación favorable de cuando al menos ocho ministros, este efecto “*erga omnes*” no es aplicable en materia impositiva por los efectos negativos que pudiera tener en la recaudación fiscal.

Dentro de los aspectos relevantes a la reforma del juicio de amparo, está la matización al principio de instancia de parte agraviada, incluyendo a la par del interés jurídico al interés legítimo, así, el juicio de amparo será procedente no sólo ante la afectación personal y directa a un derecho sino atendiendo a la especial situación del particular frente al orden jurídico.

Anteriormente, para la procedencia del amparo se requería el interés jurídico, un concepto mucho más limitado que el de interés legítimo. El primero se refiere a la titularidad de un derecho afectado directamente por el acto reclamado. El interés legítimo, por otro lado, presupone la existencia de normas que imponen obligaciones a la autoridad. A estas obligaciones no debe corresponder necesariamente un derecho subjetivo de los particulares, aunque sí debe afectar su esfera jurídica. La afectación puede ser directa o puede abarcar una situación de hecho que tenga el agraviado dentro del ámbito jurídico, se refiere al interés de ciertos particulares sobre la legalidad de algunos actos de autoridad que los afecte. Este interés legítimo es reconocido en el artículo 107, fracción I, constitucional.

Así, el interés legítimo no requiere afectación de carácter subjetivo, aunque sí de la esfera jurídica, entendida en sentido amplio, causa por la cual el particular que se ve afectado por un acto de autoridad estará facultado para promoverlo. La posibilidad de acudir al amparo mediante el interés legítimo abre las puertas a la protección de actos de autoridad que antes no eran factibles de ser protegidos. Debiéndose entender que el interés legítimo no es lo mismo que los intereses difusos o colectivos, ya que la defensa de los intereses colectivos presentan distintas formas de protección, mientras que el interés legítimo solo atenderá si el acto de autoridad afecta realmente la esfera de derechos del particular. Con la inclusión del interés legítimo se da posibilidad de proteger los derechos fundamentales que anteriormente se encontraban excluidos debido a que no se acreditaba un interés jurídico, como podía ser por ejemplo la protección al medio ambiente.

En síntesis, en cuanto al juicio de amparo se refiere, los principales aspectos de la reforma constitucional son los siguientes:

- Se implementan los Plenos de Circuito, cuyo funcionamiento se dejó a la ley reglamentaria.
- Se fijan prioridades para resolver los juicios de amparo, a solicitud del legislativo o ejecutivo, según el interés social o el orden público.
- Se habla de normas generales en lugar de leyes federales, estatales, reglamentos y tratados internacionales.
- Se incluye como materia del amparo los derechos humanos reconocidos en general por las normas.
- Se deja a elección del actor someter los asuntos mercantiles a tribunales del orden común, cuando solo afecte intereses particulares.
- Se especifica que los procesos por delitos federales solo serán competencia de los tribunales federales.
- Se define constitucionalmente a la agraviada como la persona que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
- La Suprema Corte podrá emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma, siempre que por amparo indirecto en revisión se establezca jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una norma y la autoridad, notificada por la Corte, no haya subsanado dicha inconstitucionalidad en 90 días. Estas declaratorias deberán

contar con el voto a favor de ocho ministros por lo menos. Esta regla no se aplica a normas tributarias.

- En el amparo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales, salvo que no se hayan invocado en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las haya hecho valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja.
- Se establece la posibilidad de presentar un amparo en forma adhesiva a cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio con propósito de que subsista el acto reclamado.
- En materia administrativa, el amparo procede también contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal.
- La Suprema Corte queda facultada para separar de su cargo al titular de la autoridad responsable si una vez concedido el amparo se repitiera de mala fe el acto reclamado. Cuando proceda el cumplimiento sustituto, éste podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional.
- No podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional.

En concordancia con la anterior reforma constitucional, por Decreto de 10 de junio de 2011, se modificó la denominación del Capítulo I, del Título Primero y se reformaron los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, fracción X, 97, 102 B y 105,

fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¹²⁴

Existe coincidencia en el proceso legislativo de que el objeto de la reforma fue dotar a la Constitución de los elementos y mecanismos necesarios para garantizar la máxima protección de los derechos humanos, así como dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que en esta materia ha reconocido el Estado Mexicano.

La Cámara de Senadores puso énfasis en tres consideraciones: 1. Subrayar que los derechos humanos son diferentes a la naturaleza del Estado, el cual únicamente los reconoce y protege (no los otorga); 2. Necesidad de actualizar la Constitución en materia de derechos humanos; y 3. Homologar y fortalecer también los mecanismos de protección de los derechos humanos, tales como el juicio de amparo y los organismos constitucionales de protección de derechos humanos.¹²⁵

En este sentido, los motivos de las reformas de la denominación del Capítulo I del Título Primero y artículo 1 de la Constitución Federal, fueron:

- Atender una recomendación generalizada de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, en el sentido de incorporar los derechos humanos al sistema constitucional de manera plena y clara. Destaca la recomendación de Reforma Constitucional de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien patentizó las deficiencias estructurales de la Constitución que obstaculizan la plena eficacia y práctica de los derechos.

¹²⁴ Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. 10 de junio de 2011.

¹²⁵ Cámara de Senadores. Dictamen de 7 de abril de 2010.

- Necesidad de actualizar la Constitución en materia de derechos humanos, principalmente en cuanto a la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos y a su armonización con los altos estándares del derecho internacional de protección a la dignidad humana.
- Se consideró necesario explicitar la prohibición de toda discriminación por motivo de las preferencias sexuales, dada la realidad existente respecto a este tipo de discriminación.

Se prefirió utilizar el vocablo “*persona*” a “*individuo*”, porque el primero es un término menos limitativo, incorpora una carga jurídica importante y atiende a la inclusión de lenguaje de género.¹²⁶

Se establecen los principios que rigen los derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En la primera redacción del proyecto de reforma se estableció que las normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y “*con los tratados internacionales de derechos humanos de los que México sea parte*”. Se acotaba la referencia sólo a los tratados de derechos humanos. Sin embargo, con la intención de ampliar la protección de los derechos humanos, se amplió a todos los tratados internacionales, con la salvedad de que no se incluyen en este concepto los tratados en materia comercial o de índole similar.

Se propuso adoptar el principio de “*interpretación conforme*” como un mecanismo de solución de conflictos entre normas de derechos humanos y, en

¹²⁶ Cámara de Diputados. Dictamen de 23 de abril de 2009.

general, como sistema de aplicación normativa. Este principio se toma del ordenamiento español, y permite armonizar el derecho doméstico con el internacional. También se le define como cláusula de tutela y garantía de los derechos.

“En virtud del principio de interpretación conforme se da una aplicación subsidiaria del ordenamiento internacional con el objeto de llenar las lagunas existentes, sin que esto signifique, en ningún momento, la derogación o desaplicación de la norma interna.” ¹²⁷

Desde las primeras propuestas de ambas Cámaras, se incorpora el principio *“pro persona”*, el cual obedece a la obligación del Estado de aplicar la norma más amplia, o la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

Se propuso precisar las obligaciones que el Estado debe asumir frente a las violaciones de derechos humanos. En ese primer texto, sólo se incluyeron prevenir, investigar y sancionar. Destaca que por prevenir se entiende toda medida de carácter jurídico, político administrativo y cultural que promueva la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito, que como tal es susceptible de acarrear sanciones para quien lo comete y la obligación de indemnizar a las víctimas. Se reconoce que el Estado es responsable de investigar cualquier violación a derechos humanos cometida por

¹²⁷ Cámara de Senadores. Dictamen de 7 de abril de 2010.

los agentes del mismo y por particulares, siempre que éstos actúen con tolerancia o aquiescencia del propio Estado.

El Senado incluyó como obligación del Estado la de reparar las violaciones a los derechos humanos. Por reparación se entendió el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad en que hubiera incurrido.

La modificación al artículo 3 de la Constitución partió del reconocimiento de que el reto en materia del respeto de los derechos humanos trasciende al ámbito jurídico y debe atenderse desde el campo de la educación.

Respecto del artículo 11 constitucional se propuso que sea la ley la que establezca la procedencia y excepciones del derecho de asilo. Deberá consagrar el derecho que toda persona tiene de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común. Debe incorporar el reconocimiento de que en ningún caso la persona extranjera pueda ser expulsada o devuelta a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o su integridad estén en riesgo en base a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 22.7 de la 10 Convención Americana sobre Derechos Humanos.¹²⁸

Los motivos y consideraciones relevantes de las modificaciones a los artículos 15 y 18 de la Constitución fueron con el objeto de armonizar su redacción con la modificación al artículo 1.

¹²⁸ Cámara de Senadores. Dictamen de 23 de abril de 2009.

De la reforma del artículo 29 constitucional se pueden advertir, en esencia, la necesidad de disposiciones en relación con la restricción o suspensión de derechos humanos y garantías.

En la propuesta del Senado se enfatiza la inclusión del término restricción. En relación con esta facultad se afirma: *“Sobre el particular, estas comisiones unidas estiman que la restricción y la suspensión del ejercicio de los derechos son figuras cuya finalidad no es aumentar los poderes de los gobernantes; por el contrario, permiten adoptar medidas de carácter extraordinario dentro del marco de la legalidad y el respeto al Estado de derecho. No deben ser entendidas como una invitación a la arbitrariedad, sino justamente como un mecanismo de protección de la dignidad de la persona humana bajo situaciones excepcionales de emergencia”*¹²⁹

Desde el dictamen de siete de abril de dos mil diez, se establecen los principios que rigen la restricción o suspensión de derechos y garantías, los cuales se incluyeron en el texto constitucional, como lo son, el de legalidad, proclamación, no discriminación, notificación (indispensable notificar la suspensión a la Organización de Estados Americanos), temporalidad, amenaza excepcional, proporcionalidad, entre otros.

Se incorporó una cláusula que establece que cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de manera inmediata, y se impide al Ejecutivo formular observaciones a las decisiones del Congreso en esta materia. Además, se propuso que la Suprema

¹²⁹ Cámara de Senadores. Dictamen de 7 de abril de 2010.

Corte de Justicia de la Nación revise de oficio la constitucionalidad y validez de los decretos que expida el Ejecutivo durante la situación de suspensión.

La reforma del artículo 33 constitucional se debió para dar cumplimiento al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual se reconoce expresamente la garantía de legalidad y audiencia en beneficio de quienes puedan verse afectados por la expulsión y se señala tajantemente la obligación de someter su caso ante una autoridad competente con facultades para pronunciarse sobre la legalidad de la decisión.

Con la modificación al artículo constitucional 89, fracción X, se hace coherente el texto supremo con la política exterior que ha impulsado en materia de derechos humanos.

La reforma al artículo 97 de la Constitución Federal atendió a la solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consolidarla como un verdadero tribunal constitucional, pues no se trata de una facultad propia de un tribunal de esa naturaleza la facultad investigadora. Con la creación y plena vigencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta atribución no tiene razón de existir en el conjunto de facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, se propone transferir esa facultad a ese organismo de protección de los derechos humanos.

La reforma al artículo 102, apartado B, constitucional, tuvo como motivos el fortalecer la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas y cumplir con los estándares normativos para las instituciones nacionales de derechos humanos previstos en los Principios de París, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.

Así mismo, incluir la materia laboral dentro de las facultades de los organismos protectores de derechos humanos, atendiendo la observación del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, formulado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México.

Con la modificación al artículo constitucional 105, fracción II, inciso g), se buscó adecuar el marco constitucional a efecto de que los derechos humanos reconocidos internacionalmente cuenten con un mecanismo de control abstracto en las acciones de inconstitucionalidad, buscando superar el criterio sostenido al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2009. Por eso, se establece como un parámetro normativo para ser considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese tipo de procedimientos.

3.2 Inclusión del control de la convencionalidad en México como complemento al control constitucional.

El control de convencionalidad surge con la reforma constitucional de junio de dos mil once, que reconoce y obliga a respetar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte, como lo disponen los artículos 1, 103, 104 y 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal.

Como se explicó en el capítulo anterior, existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, siendo éstos:

- a) El control constitucional que deben ejercen los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de

inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicio de amparo directo e indirecto;

- b) El control constitucional que deben ejercer el resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.

En este sistema de control constitucional se permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, los que finalmente fluyan hacia la Suprema Corte de la Nación para que sea ésta la que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional.

De la interpretación conjunta de los reformados artículos 1º, 103, 104 y 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal, con relación a lo que ya se dijo respecto del reformado artículo 1º constitucional, y el criterio emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del expediente Varios 912/2011, ¹³⁰se tiene que el sistema jurisdiccional mexicano se rige mediante un control de constitucionalidad que se viene a complementar con un control de convencionalidad.

¹³⁰ Se alude a los criterios jurisprudenciales que el Tribunal Pleno declaró sin efectos en sesión de veinticinco de octubre de dos mil once, al emitir la resolución de la modificación de jurisprudencia 22/2011, los mencionados criterios son los de datos y rubro:

Jurisprudencia P./J. 73/99 , Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Página: 18, de rubro: **“CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.”**

Jurisprudencia P./J. 74/99, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Agosto de 1999, Página: 5, de rubro: **“CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.”**

Al respecto, cabe recordar que con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que los únicos facultados para ejercer un control de constitucionalidad lo eran los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto.

Lo anterior, conforme a la interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el control judicial de la Constitución se ejercía únicamente por los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de los mecanismos de amparo, controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad.

De lo que se deducía que cuando se tratara de asuntos en los que se propusieran cuestiones de constitucionalidad, éste análisis únicamente podía ser sometido al conocimiento de un tribunal de constitucionalidad, el cual estaba facultado para emitir la declaratoria correspondiente en estricto apego a la Ley Fundamental.

No obstante, a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, en el sistema judicial mexicano los tratados internacionales sobre derechos humanos se encuentran a un nivel constitucional, conforme a la disposición que expresamente se introdujo en la reforma al artículo 1º constitucional.

Esto es, por disposición de la propia Constitución Federal, todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte.

Por tanto, en virtud de la reforma constitucional, la obligación de los tribunales es aplicar aquella norma que mejor proteja o menos restrinja los derechos humanos sin importar que se trate de una norma nacional o internacional, pues lo que debe favorecerse siempre es la protección a la persona.

De ahí deriva la obligación de las autoridades del Estado Mexicano de interpretar los derechos y libertades reconocidos en el sistema jurídico nacional de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Es así, que ninguna norma jerárquicamente inferior a las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos debe afectar el objeto y fin de protección a la persona, buscando además que con fundamento en el principio *pro persona*, prevalezca aquella norma que más proteja o menos restrinja los derechos.

Por lo anterior, de manera general, puede sostenerse que la jurisdicción nacional se ve complementada con la jurisdicción internacional y, que incluso, ésta última puede actuar de manera subsidiaria cuando la jurisdicción nacional sea insuficiente en la resolución de un conflicto o cuando no se tenga un recurso interno de solución.

Es decir, que cuando el Estado Mexicano mediante la reforma constitucional, reconoce los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, ello se traduce en un consentimiento estatal para obligarse al acatamiento de las decisiones de la jurisdicción internacional por su suscripción a los tratados. Entonces, los jueces nacionales en su actuar deben conducirse con apego a los tratados internacionales interpretando y analizando las disposiciones en materia de derechos humanos a la par, o incluso, prefiriéndolos sobre el derecho interno, pues en todo caso debe optarse por el ordenamiento que más favorezca a la persona. Lo anterior se conoce como el control de convencionalidad, que se define como la interpretación de derechos y libertades

acorde a tratados internacionales.

En ese orden, el control de constitucionalidad que antes se concentraba en los órganos del Poder Judicial de la Federación, ahora por el control de convencionalidad se hace extensivo y obliga a todas las autoridades jurisdiccionales del país, es decir, que el control de constitucionalidad y convencionalidad conlleva a que los tribunales observen los derechos reconocidos en la Constitución Federal y los complementen con el contenido de los tratados internacionales en materia de derechos humanos como parte integrante del sistema jurídico mexicano; es decir, que por este control de convencionalidad, el derecho de origen internacional debe ser contemplado y aplicado en los asuntos de su competencia, a fin de verificar si las leyes inferiores a la Constitución y los tratados internacionales respetan, protegen y garantizan los derechos de las personas.

3.3 Ampliación de facultades a las autoridades para ejercer control constitucional

El Estado Mexicano reconoció y se obligó a respetar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que es parte, lo que se traduce en que conforme a la reforma constitucional de junio dos mil once, los jueces del país están obligados a dejar de aplicar las normas ordinarias cuando estimen que son contrarias a los derechos humanos y preferir las contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia, lo que debe interpretarse como una ampliación de facultades a la autoridad judicial del fuero común para ejercer un control constitucional de que carecía antes de la mencionada reforma constitucional.

Lo anterior, es congruente con lo preceptuado por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹³¹, que dispone que los jueces de cada Estado deberán ajustar su actuación a lo que la propia Constitución Federal establece, así como a lo previsto en los tratados internacionales de los que México sea parte, por lo que en atención a esto, y a lo que se prevé en el artículo 1º constitucional, se advierte que existe obligación de que los jueces locales garanticen el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales a pesar de las disposiciones en contra que pudiere haber en la legislación de los Estados, lo que tiene como implicación que los jueces locales estén facultados constitucionalmente para inaplicar una norma cuando resulte contraria a la Ley Suprema, pues están conminados a preferir ésta sobre la ley interna.

Así, en virtud de la mencionada reforma constitucional rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano ejercen el control de constitucionalidad, pues con anterioridad a la reforma apuntada de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1º constitucional, se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por

¹³¹ “Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.¹³²

Para evidenciar esta conclusión procede acudir a lo que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la resolución del expediente 912/2010, con relación a los medios de control de constitucionalidad y control de convencionalidad en el sistema jurisdiccional mexicano, a partir de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, conforme a los cuales quedó lo siguiente:

- Es un hecho inobjetable que por virtud de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, los Estados Unidos Mexicanos se someten a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado mexicano.
- Por tanto, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos), son obligatorias para todos los órganos del Estado mexicano en sus

¹³² Tesis de jurisprudencia 1ª/J. 18/2012 (10ª), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo I, Décima Época, página 420, rubro: **“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2010).**

respectivas competencias al haber figurado como un Estado parte en un litigio.

- Para el Poder Judicial son vinculantes no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio.
- La jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Federal.
- Al resolver los asuntos sometidos a su competencia, los jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Sin perjuicio de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1º.
- Todas las autoridades del País, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina

como el principio *pro persona*.

- Los mandatos contenidos en el reformado artículo 1º constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.
- Conforme a la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 1º, los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior.
- Si bien los jueces ordinarios no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.
- El mecanismo para el control de convencionalidad *ex officio* en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente por los artículos 1º y 133.

De lo expresado en la resolución de referencia se extrajo como conclusión que todos los jueces del país ya no deben limitar su actuación jurisdiccional al control de constitucionalidad que se venía dando, puesto que ahora no sólo podrán realizar dicho control, sino que también deberán observar el control de

convencionalidad cuya sujeción por parte del Estado mexicano derivó de la mencionada reforma al artículo 1º constitucional.

Es así, que el control de constitucionalidad que ahora se ve complementado con el control de convencionalidad, se puede ejercer por todos los jueces del País, y según el criterio antes citado del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, debe observar:

- Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación.
- Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.
- Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte.

A partir de lo anterior, la resolución en comento sugiere que la interpretación por parte de los jueces presupone realizar tres pasos:

1. Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del País, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

2. Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.
3. Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

Así surgió la figura de control de convencionalidad *ex officio*, como una forma de control constitucional difuso, mediante el que, si bien los jueces ordinarios no pueden hacer una declaración general sobre invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales (como sí sucede en las vías de control directas establecidas en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Federal), sí pueden dejar de aplicar estas normas inferiores, dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados internacionales en esta materia.

De tal suerte que el control de constitucionalidad que antes se concentraba en los órganos del Poder Judicial de la Federación, ahora —con sus marcadas diferencias— se hizo extensivo y obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales del país, a fin de que verifiquen si las leyes inferiores a la

Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos respetan, protegen y garantizan las prerrogativas de las personas¹³³.

De acuerdo a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado en exclusiva en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva si una disposición es o no contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos; ya sea porque así lo declaren con efectos permanentes a través de una acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional o en amparo indirecto, o bien, tratándose del juicio de amparo directo ordenando solamente su inaplicación al caso concreto a la luz de los argumentos que propongan los quejosos en su demanda, o en los casos en que así proceda, en suplencia de la queja.

Por su parte, el mencionado control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, sí y solo sí, encuentran mérito para ello, amparándose en el imperio del cual están investidos para juzgar conforme a la Constitución.

Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración, con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí, donde el juzgador ordinario, al aplicar la

¹³³ Dicho criterio se encuentra plasmado en la tesis de rubro: **“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.”**, cuyos datos de localización son: Décima Época; registro: 160525; instancia: Pleno; tipo de tesis: aislada; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1; materia: constitucional; tesis: P. LXIX/2011(9a.); página: 552.

norma, puede realizar de oficio un contraste entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, llevar a cabo el control difuso) en ejercicio de una competencia genérica. Esta reflexión que realiza el juez común no forma parte de la disputa entre actor y demandado, es decir, no forma parte de la litis.

Lo anterior es así, porque los mandatos contenidos en el artículo 1º constitucional deben entenderse en armonía con el diverso 133 del propio texto fundamental, para establecer el marco dentro del cual debe realizarse tal cometido, el que resulta esencialmente distinto al control concentrado que tradicionalmente opera en nuestro sistema jurídico, y explica que en las vías indirectas de control, la pretensión o litis no puede consistir en aspectos de constitucionalidad, puesto que ello sería equiparar los procedimientos ordinarios que buscan impartir justicia entre los contendientes, a los diversos que fueron creados por los poderes Constituyente y Revisor de la Constitución con el propósito fundamental de resguardar el principio de supremacía constitucional.

En ese sentido, una diferencia entre los medios de control concentrado y difuso podemos encontrarla en que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, tal tema no integra la litis, puesto que el conflicto se limita a la materia de legalidad, no obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juez ordinario puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sin que medie petición alguna de parte.

Sin embargo, en el evento de que en un juicio ordinario el actor formule argumentos en los que se desaplique una norma por estimarla inconstitucional o

inconvencional, al existir un argumento expreso, pueden suceder dos posibilidades: 1) que el órgano jurisdiccional coincida con lo expuesto por el actor y considere que debe desaplicar la norma y, 2) que no convenga lo solicitado.

En este último supuesto, si el tribunal considera que la norma no es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, bastará con que mencione en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias; sin que sea necesario que desarrolle toda una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, puesto que la norma no le generó convicción que pusiera en entredicho la presunción de constitucionalidad de la que gozan todas las disposiciones jurídicas de nuestro sistema.

Esto es, no puede imponerse al tribunal contencioso la obligación de contestar de fondo los argumentos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad que le hagan valer en la demanda, ya que tal proceder implicaría que la vía se equipare al control concentrado, desvirtuándose, con ello, la distinción entre los dos modelos de control, que —como antes se explicó— están perfectamente diferenciados en nuestro sistema.

Con base en lo expuesto por el máximo tribunal del país, el control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas generales por vía de acción está depositado en exclusiva en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva si una disposición es o no contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además de que tratándose de procedimientos de control concentrado, el tema de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad de leyes —planteado

expresamente por el solicitante de amparo— forma parte de la litis y, por ende, el juzgador está obligado a pronunciarse de forma directa sobre el mismo.

En efecto, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales, los juzgadores deben abordar su estudio al dictar sentencia cuando tales aspectos sean planteados en los conceptos de violación, sin que los pronunciamientos que se hubieren realizado a través del ejercicio del control difuso por un tribunal contencioso administrativo limiten o condicionen el ejercicio de las facultades de control concentrado.

Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que, de acuerdo con el artículo 1º, en relación con el 133 constitucionales, existe en nuestro sistema el control difuso, a través del cual cualquier órgano jurisdiccional puede desaplicar una ley, para hacer respetar los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano; no debe olvidarse que en nuestro país prevalece también un control concentrado, debido a que la propia Constitución Federal establece procedimientos de control constitucional directo, como son: el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, en los que, vía impugnación de normas, pueden plantearse temas de violación a derechos humanos, acerca de los cuales, el Poder Judicial de la Federación, debe realizar el pronunciamiento expreso.

En tanto que, la obligación de ejercer el control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza aún en aquellos casos en los que el derecho humano de que se trate esté regulado en la propia Constitución Federal. Lo anterior, porque el control ex officio no es una cuestión de subsidiariedad, sino que más bien en el sentido de que los jueces y todas las

autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos en el juicio de amparo.¹³⁴

Así, el control de constitucionalidad y convencionalidad, conforme a los artículos 1º, 103, 104 y 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal, puede quedar representado de la siguiente manera:

1. Control con facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma.

Este tipo de control constitucional se ejerce, de manera exclusiva, por los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de los siguientes medios:

- Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad (Suprema Corte de Justicia de la Nación). Por virtud de estos medios de control de forma directa se puede emitir la declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad de un precepto legal, incluso con efectos generales.

- Amparo indirecto (Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito) y amparo directo (Tribunales Colegiados de Circuito). La materia de control de estos medios, son normas generales, actos de autoridad y omisiones de éstas cuando violen los mencionados derechos humanos; sin posibilidad de hacer declaratoria de inconstitucionalidad de preceptos, con efectos generales, solo particulares. Lo

¹³⁴ Tesis de jurisprudencia 1ª/J. 38/2015 (10ª). Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época. Página 186.rubro: **“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”**

anterior salvo el caso de declaratoria de inconstitucionalidad emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo dispuesto en el artículo 107 fracción II de la Constitución Federal en el que los efectos son generales para modificar o tenga la misma declarada institucional.

2. Control sin facultad de declarar la inconstitucionalidad de una norma.

Se ejerce por los órganos jurisdiccionales federales (juzgados de Distrito y tribunales Unitarios de procesos federales y demás tribunales federales ajenos al Poder Judicial de la Federación), así como por los órganos jurisdiccionales locales (judiciales, administrativos, laborales y electorales).¹³⁵

Este medio de control significa que los órganos jurisdiccionales ordinarios al resolver los asuntos sometidos a su competencia deben hacerlo respetando los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, interpretando y analizando las disposiciones en materia de derechos humanos a la par, o incluso, prefiriéndolos sobre el derecho interno, pues por mandato constitucional, en todo caso deben optar por el ordenamiento que más favorezca a la persona.

Las autoridades jurisdiccionales ordinarias no tienen posibilidad de hacer declaratoria de inconstitucionalidad de leyes, sino que únicamente están facultadas para su inaplicación.

De todo lo relacionado, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, todas las autoridades jurisdiccionales en el ámbito de su competencia están facultadas y obligadas en materia de derechos humanos a realizar control de constitucionalidad y de convencionalidad, con la diferencia de que los órganos

integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que los demás órganos jurisdiccionales autoridades del Estado Mexicano sólo podrán desaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución o a los tratados internacionales.

¹³⁵ Artículos, 1º, 104, 116 y 133, constitucionales.

Capítulo IV. Transformación del sistema constitucional en México de carácter mixto predominantemente concentrado a mixto con acentuación difusa.

4.1 Nuevo sistema de justicia constitucional en México.

a) Características inherentes al control difuso.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de julio de dos mil once, al resolver el expediente varios 912/2010, interpretó la reforma constitucional de diez de junio de ese mismo año, estableciendo, el criterio de que todos los jueces del Estado Mexicano están obligados a dejar de aplicar las normas ordinarias cuando estimen que son contrarias a los derechos fundamentales y preferir las contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, con relación a los asuntos de su competencia.

Esto es, como quedó precisado en el capítulo anterior, el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar, en sus primeros tres párrafos, como sigue:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados

internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley (...)."

En la sentencia mencionada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho fundamental de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; y que estos mandatos contenidos en el reformado artículo 1º constitucional, debían interpretarse con relación a lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal, para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control constitucional difuso, el cual claramente es distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico¹³⁶.

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro: "*CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD*"¹³⁷, consideró que en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 con

¹³⁶ Artículo 133: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados".

¹³⁷ Tesis P.LXVII/2011 (9ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Novena Época, pág.535, rubro: "**CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.**"

relación al artículo 1º de la Constitución Federal, se establece que los jueces locales están obligados a preferir los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados Internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior, esto es, si bien los jueces locales no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.

De lo considerado en el citado expediente de varios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el mecanismo del ahora control constitucional difuso debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente.

Y que con base en ese mecanismo, se podía advertir la creación de un parámetro sobre el tipo de control que deben ejercer todos los jueces del país, el cual se encuentra fijado en la tesis aislada de rubro: *"PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS"*¹³⁸, por el Pleno del Más Alto Tribunal; y que en esencia refiere los siguientes lineamientos:

- Todos los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal, así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación;

¹³⁸ Tesis P.LXVIII/2011 (9ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Novena Época, pág.551, rubro: "**PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.**"

- Todos los derechos fundamentales contenidos en tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.¹³⁹
- Todos los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.

El Tribunal Pleno consideró además, que la posibilidad de inaplicar alguna norma por parte de los jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación.

Al respecto, en la diversa tesis aislada de rubro: *“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”*¹⁴⁰, consideró que ese tipo de interpretación por parte de los jueces, presupone realizar tres pasos para lograr un correcto control de constitucionalidad y de convencionalidad:

¹³⁹ Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecida en el mismo texto de los tratados o mediante jurisprudencia de la misma Corte, son los siguientes: Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”; Artículo 7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belém Do Pará”; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

¹⁴⁰ Tesis P.LXX/2011 (9ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Novena Época, pág.552, rubro: **“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”**.

- 1) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
- 2) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.
- 3) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

Ahora bien, para poder determinar los modelos de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, se estima necesario citar el contenido de la tesis de rubro: "*SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURIDICO MEXICANO*"¹⁴¹, en la que se precisa que el control que ejercen exclusivamente los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control son: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; y en segundo término, el control por

¹⁴¹ Tesis P.LXX/2011 (9ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Novena Época, pág.557, rubro: "**SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURIDICO MEXICANO**".

parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.

Al respecto, la Suprema Corte estableció que ambas vías se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema, que como se ve, es concentrado en una parte y difuso en otra y que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, los que finalmente fluyan hacia la Suprema Corte para que sea ésta la que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional.

En este orden de ideas, en el control constitucional denominado difuso, los Tribunales que no sean de amparo, llámense, en el ámbito federal; los juzgados de distrito y tribunales unitarios de proceso federal integrantes del Poder Judicial de la Federación y los tribunales federales administrativos y laborales, y en el ámbito local, los tribunales judiciales, administrativos, laborales y electorales, de las entidades federativas, si bien no pueden hacer una declaración general sobre invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales (como sí sucede en las vías de control directas establecidas en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Federal), sí pueden de manera oficiosa o por solicitud de algunas de las partes, dejar de aplicar estas normas inferiores, dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados internacionales.

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo 4927/2014, de su índice, también emitió un pronunciamiento respecto al control de constitucionalidad, en el sentido de que dicho control antes se concentraba de manera exclusiva en los órganos del Poder Judicial de la Federación, y que ahora hizo extensivo y obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales del país, a fin de que verifiquen si las leyes inferiores a la Constitución y a los tratados internacionales respetan, protegen y garantizan los derechos fundamentales de las personas.

Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración, con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede realizar de oficio un contraste entre su contenido y los derechos fundamentales que reconoce el orden jurídico nacional, esto es, llevar a cabo el control difuso en ejercicio de una competencia genérica. Esta reflexión que realiza el juez común no forma parte de la disputa entre actor y demandado, es decir, no forma parte de la litis.

Así, la Primera Sala en la tesis de rubro: "*CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS*"¹⁴², consideró que el control difuso que realizan los jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una herramienta más en su importante labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema. Esta facultad

¹⁴² Tesis 1a. CCLXXXIX/2015 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Novena Época, pág.1647, rubro: "**CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS**".

se ha entendido en sentido de que el órgano judicial puede ejercerla *ex officio*, es decir, por razón de su oficio jurisdiccional y sin que medie petición alguna de parte.

El mencionado Alto Tribunal también consideró en la diversa sentencia, a saber la dictada en el juicio de amparo directo 3200/2012, que la expresión *ex officio* no significa que siempre y, sin excepción, los jueces deban ejercer de manera obligatoria el control de constitucionalidad de los derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino que ese tipo de control lo pueden ejercer por virtud de su cargo de jueces, aun cuando no sean jueces de control constitucional y aun cuando no exista una solicitud expresa de las partes¹⁴³.

Así, el control constitucional difuso se traduce en que todos los jueces tienen la facultad de controlar las normas que van a aplicar de cara a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México sea parte, por el simple hecho de ser jueces, pero no que necesariamente deban hacer ese control en los tres pasos señalados (interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto e inaplicación) en todos los casos, sino en aquéllos en los que, sea solicitado por las partes o adviertan que la norma amerita dicho control, sin hacer a un lado los presupuestos formales y materiales de admisibilidad.

Lo anterior supone que los jueces, en el ámbito de su competencia, antes de proceder al control difuso de constitucionalidad en los tres pasos, debieron

¹⁴³ Existen diferentes definiciones de la expresión "*ex officio*" que corroboran esta apreciación, a saber: "por iniciativa propia"; "por virtud del oficio o cargo de uno"; "tener un cargo por razón de tener otro"; "se usa cuando una persona automáticamente recibe otra posición por el solo hecho de tener un cargo"; "sin necesidad de instancia de parte, por iniciativa del juez o tribunal". Véase: Carlos Vican Antolín, Carlos, *Repertorio de expresiones y términos jurídicos latinos*, Centro de Estudios de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, Barcelona, 2001, p. 69.

haber resuelto o despejado cualquier problema relacionado con presupuestos de procedencia o admisibilidad.

Otra cuestión a tomar en cuenta, es lo referido en la tesis aislada de rubro: “*CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU SIGNIFICADO Y ALCANCE*”¹⁴⁴, de la Primera Sala, de cuyo contenido se colige que para estar en condiciones de exigir a los jueces el control *difuso* es que los criterios de la Suprema Corte son interpretativos, por lo que resulta indispensable advertir que no todos los escenarios de aplicación de una norma representan problemas interpretativos. Para ello, es importante no perder de vista el principio de interpretación que reza *in claris non fit interpretatio*, según el cual no debe llevarse a cabo una interpretación cuando la norma no ofrece dudas, es decir, cuando es clara. En materia de derechos humanos las dudas que puede generar una norma tienen que ver con una posibilidad real o potencial de invalidez sustantiva, esto es, con una determinación justificada del juez en el sentido de que la norma genera dudas o resulta sospechosa de cara al orden constitucional o convencional.

Lo anterior, permite establecer que si una norma no generó indicios de invalidez en el juzgador por parecer potencialmente violatoria de derechos fundamentales, entonces el análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo no se actualiza, porque ni siquiera se considera que se puso en entredicho la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas. En esos casos, bastará con que el juez mencione en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de tales derechos.

¹⁴⁴ Tesis 1a. CCCLX/2013 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, pág.512, rubro: “**CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU SIGNIFICADO Y ALCANCE.**”

Y de acuerdo a dicho criterio, otra forma en la que se actualiza el deber de control ex officio se presenta cuando la norma es impugnada, esto es, señalada por el interesado como violatoria de derechos. En estos casos, como regularmente ocurre, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a responder los planteamientos de los quejosos de manera exhaustiva.

Sin embargo, es factible que en el juicio ordinario el actor formule argumentos en los que solicite al juzgador que ejerza control difuso respecto de alguna norma. En este caso, al existir un argumento de nulidad expreso, pueden suceder que el órgano jurisdiccional coincida con lo expuesto por el actor y considere que debe desaplicar la norma, o bien, no convenga con lo solicitado. En este último supuesto, si el tribunal considera que la norma no es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales bastará con que mencione en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos fundamentales, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias; sin que sea necesario que desarrolle toda una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, puesto que la norma no le generó convicción que pusiera en entredicho la presunción de constitucionalidad de la que gozan todas las disposiciones jurídicas de nuestro sistema.

Esto es, no puede imponerse al tribunal contencioso la obligación de contestar de fondo los argumentos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad que le hagan valer en la demanda, ya que tal proceder implicaría que la vía se equipare al control concentrado, desvirtuándose, con ello, la distinción entre los dos modelos de control, que —como antes se explicó— están perfectamente diferenciados en nuestro sistema.

Debe precisarse, que los tribunales del Poder Judicial de la Federación que realizan funciones de control constitucional solamente pueden ejercerlo a través de los medios directos y vía acción, esto es, a instancia de parte agraviada que lo promueva, y que reclame la inconstitucionalidad de una norma legal determinada, y no de manera oficiosa, aun en el evento de estimar inconstitucional la ley aplicada por la autoridad, con excepción de que se trate de normas legales que deben aplicar en los procesos constitucionales respectivos.

Al respecto, es importante señalar, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1046/2012¹⁴⁵, de la que derivó la tesis aislada de rubro: "*CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.*"; consideró que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla.

Asimismo, de esa misma ejecutoria, también derivó la diversa tesis de rubro: "*CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA*

¹⁴⁵ P. IX/2015 (10a.), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo 1, Novena Época, pág.355, rubro: "**CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.**".

*EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN*¹⁴⁶ⁿ;

en la que el Órgano Máximo de Justicia resolvió que no corresponde a los tribunales colegiados de circuito examinar, de oficio, la inconstitucionalidad de los preceptos que rigen en los procedimientos o juicios de los que deriva el acto reclamado, ya que tal asignación corresponde, en su caso, a las autoridades judiciales encargadas de su aplicación (autoridades administrativas, jueces, salas de instancia, etcétera), y que sostener lo contrario, es decir, que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden, mediante un control difuso de regularidad constitucional declarar, en amparo directo, la inconstitucionalidad de disposiciones contenidas en leyes que rigen el procedimiento o juicio de origen generaría inseguridad jurídica para las partes, quienes parten de la base de que en el juicio han operado instituciones como la de preclusión, por virtud de la cual han ejercido los derechos procesales que les corresponden en torno a las decisiones emitidas por el juzgador, sin que deba soslayarse que el cumplimiento al imperativo prescrito en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a toda autoridad, en el ámbito de su competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no implica que puedan dejar de observarse los mecanismos jurisdiccionales previstos en el orden interno de los Estados para impugnar los actos de autoridad que pudieran considerarse violatorios de derechos humanos.

También se precisó en dicho criterio, que en la labor de los tribunales colegiados, se debían observar las reglas que tradicionalmente han normado las instituciones que tienen a su cargo, de manera que, en ejercicio de este control concentrado, pueden emprender el análisis sobre la constitucionalidad de una

¹⁴⁶P. X/2015 (10a.), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo 1, Novena Época, pág.356, rubro: **“CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.”**.

norma a partir de lo siguiente: (a) en respuesta a la pretensión formulada por el quejoso; (b) por virtud de la causa de pedir advertida en el planteamiento de los conceptos de violación o en agravios; o bien, (c) con motivo de la utilización de la institución de la suplencia de la queja deficiente, en términos de la Ley de Amparo que, en ciertas materias, permite ese análisis aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios; y que por tales circunstancias, no es que los órganos de control concentrado estén exentos de ejercer un control difuso, sino que sólo pueden hacerlo en los términos que la propia Constitución les faculta.

Con relación al anterior criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es importante realizar una reflexión sobre los argumentos expuestos por el Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en su voto particular emitido en el amparo directo en revisión que motivó la tesis en comento, y que permite advertir algunas posibles deficiencias en la interpretación del control constitucional difuso por parte del Máximo Tribunal del país, al acotar las facultades de algunos juzgadores, en el caso los tribunales colegiados de circuito, para ejercer dicho control difuso, por el sólo hecho de que ejercen, además, un control concentrado.

El Ministro destacó que en la ejecutoria mayoritaria se concluyó que los Tribunales Colegiados sí tenían facultad para ejercer de oficio un control de regularidad constitucional, sin embargo, se limitó esa facultad a aquellas disposiciones que les correspondiera aplicar, pues en la resolución se indicó que se debían observar las leyes que tradicionalmente han normado dichas instituciones, pero atendiendo al nuevo paradigma del principio *pro persona*, sólo pueden ejercer el control difuso en el ámbito de su competencia, es decir, respecto a disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente aquellas que rigen el procedimiento del juicio de amparo.

En el voto particular se resaltó que la mayoría consideró que los Tribunales Colegiados pueden emprender un control difuso respecto de otras leyes, pero sólo en respuesta a una pretensión formulada; atendiendo la causa de pedir, o en suplencia de la queja; por lo que en el caso analizado, el Tribunal Colegiado no estaba facultado para ejercer un control difuso de la ley local, por no ser su competencia, pues a él no le corresponde aplicar las leyes que rigen el juicio de origen, sino que eso le corresponde a la Autoridad Responsable.

El ministro Rebolledo se apartó de las anteriores consideraciones, pues a su juicio la decisión que adoptó la mayoría de del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contraviene el artículo 1° de la Carta Magna, y se alejó de la decisión adoptada por el Pleno de ese Alto Tribunal en el expediente varios 912/2010, así como, de lo resuelto en los asuntos de militares; pues a su parecer, si el artículo 1° de la Norma Fundamental, en su tercer párrafo, dispone que todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y además, establece la obligación que tiene el Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, le resultaba evidente que la obligación que se deriva de ese precepto no hace ninguna distinción o excepción en cuanto al tipo de autoridades que se encuentran vinculadas a esa obligación, sino que al contrario, el precepto constitucional es claro y terminante al vincular a todas las autoridades del país, a cumplir con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, siendo la única limitante, que la obligación sea cumplida en el ámbito de sus respectivas competencias, es decir, cuando ejercen las atribuciones que la ley encomienda a cada una de ellas, y por ello, el que los órganos que por competencia conocen del juicio de amparo ejerzan un control concentrado, no quiere decir que estén excluidos de ejercer el control difuso que se deriva del artículo 1° Constitucional.

En concordancia a lo anterior, concluyó que la diferencia entre los órganos que por el ámbito de su competencia ejercen un control concentrado del resto de las autoridades, radica en que éstas sólo pueden ejercer un control difuso porque no tienen competencia para ejercer un control concentrado, pero quienes sí tienen esa competencia, tienen la obligación de ejercer el control de regularidad constitucional, en sus dos vertientes, es decir, tanto de manera concentrada como difusa, pues así se deriva de la propia Constitución, así como de lo resuelto por el Máximo Tribunal en el expediente Varios 912/2010, sobre la intervención del Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos”, en el sentido de que las sentencias de esa Corte son obligatorias para el Estado Mexicano, incluyendo al Poder Judicial de la Federación; y derivado de esa obligatoriedad, se sostuvo que todos los Jueces del País estaban obligados a realizar un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad; y que por ello, la determinación asumida era contraria a lo resuelto en ese expediente y un retroceso en el respeto a los Derechos Humanos.

Lo antes precisado se colige que actualmente el sistema de justicia constitucional en México tiene las siguientes características inherentes al modelo difuso:

- 1) Se ejerce por todos los tribunales del país.

En el entendido de que todos los órganos jurisdiccionales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, o que perteneciendo no conozcan de las vías directas de control, se encuentren acotados en cuanto a sus facultades de control constitucional, pues solo pueden inaplicar una norma legal al estimarla

contraria a la Constitución Federal, más no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez de dicha norma ni expulsarla del orden jurídico, como pueden hacerlo, con ciertas modalidades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales de amparo del Poder Judicial de la Federación.

2) Se ejerce, parcialmente, vía excepción o incidental.

Lo anterior en lo que respecta al control constitucional que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales distintos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los tribunales de amparo, pues lo ejercen dentro del proceso jurisdiccional de su competencia, por lo que el problema de constitucionalidad deriva de la controversia legal sometida a la jurisdicción del juez. A diferencia del control constitucional que ejercen los primeros, vía acción, por lo que la litis comprende el tema de constitucionalidad, y a instancia de parte, ya que les está vedado ejercerlo oficiosamente, salvo el caso de que se trate de normas que deban aplicar en el juicio constitucional respectivo.

3) Los medios de control constitucional son, en su mayoría de carácter concreto, y con efectos inter partes.

De hecho la gran mayoría de mecanismos de control constitucional son de carácter concreto y no abstracto, tanto los medios de control constitucional directos que realizan la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales de amparo del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la acción de inconstitucionalidad que es de carácter abstracto, como el que ejercen los demás tribunales, dentro de los juicios ordinarios de su competencia, y con efectos únicamente para las partes en el juicio.

b) Características propias del control concentrado.

Todas las disposiciones relacionadas con los derechos fundamentales, como es el caso de las que rigen el acceso a la justicia, deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a los sujetos de derecho que se someten al orden jurídico del Estado Mexicano y, en su caso, todas las autoridades, sin excepción alguna, en ejercicio de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales.

En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio atendiendo al principio de supremacía constitucional derivado de lo previsto en los artículos 15; 29, párrafo último; 40; 41, párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los jueces del Estado Mexicano al conocer de los asuntos de su competencia deben hacer prevalecer los derechos fundamentales reconocidos en esa Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan preverse en los ordenamientos que les corresponda aplicar para resolver los asuntos de su competencia.

Como ha quedado expuesto, conforme a los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Lo anterior a través de los distintos medios de control constitucional que son de la competencia exclusiva de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, tales como las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, y los juicios de amparo directo e indirecto, principalmente (también se considera un medio de control constitucional el juicio de revisión constitucional electoral de actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades electorales locales en organización y calificación de comicios, competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), por medio de los cuales pueden emitir declaratorias de inconstitucionalidad de normas legales con efectos *inter partes* o bien con efectos generales, tratándose de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, con las modalidades legales propias de dichos mecanismos constitucionales.

Por su parte, como se explicó en el apartado anterior, el control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, sólo si encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia; es así donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común, forme parte de la disputa entre actor y demandado.

Así, una de las diferencias torales entre los medios de control concentrado y difuso estriba, en que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia específica); no obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En la inteligencia de que todos los tribunales del país, tanto los que pertenecen al Poder Judicial de la Federación como los demás órganos jurisdiccionales, están facultados para realizar una interpretación conforme constitucional, de manera que interpreten la norma jurídica aplicando la que resulte más favorable a las personas entre las diversas interpretaciones que se obtengan, para hacerla acorde a la norma constitucional, pues de esta forma no efectúan declaración de inconstitucionalidad alguna, por lo que no inaplican la norma legal.

Así, de lo antes expuesto, podemos concluir que en la actualidad el sistema de justicia constitucional en México tiene los siguientes contenidos propios del modelo concentrado:

- 1) Los medios de control constitucional directos o específicos se ejercen solamente por tribunales constitucionales y no por los demás órganos jurisdiccionales del país, de manera tal que el control constitucional concentrado se deposita, de manera exclusiva, en los órganos del Poder Judicial de la Federación.

- 2) Se ejerce, parcialmente, vía acción. Lo anterior en cuanto a los medios de control constitucional directos o específicos, esto es, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y los juicios de amparo directo e indirecto, en los cuales el tema de inconstitucionalidad forma parte de la litis, a diferencia de los medios de control difusos en los que la litis la conforma la legalidad, por lo que se ejercen vía incidental.
- 3) Cuenta con medios de control constitucional abstractos, tales como la acción de inconstitucionalidad, cuyos efectos pueden declarar la invalidez de la norma secundaria motivo de análisis con efectos generales. Asimismo, con un mecanismo de control denominado declaratoria general de inconstitucionalidad, que puedan emitir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene efectos generales, derogatorios, con respecto a la norma declarada inconstitucional en jurisprudencia por reiteración, en los casos que prevé la ley de amparo.¹⁴⁷

c).- Conversión de un sistema de control constitucional de naturaleza mixta, ahora con acentuación difusa.

Lo hasta aquí considerado nos permite advertir que con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo de junio de dos mil once y la interpretación que de su contenido y alcances hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia y múltiples resoluciones, el sistema de justicia constitucional en México sufrió una transformación sustancial que se refleja en la modificación de alguna de sus características principales.

* Se encuentra prevista en el Título IV, capítulo VI, artículos 231 a 235 de la Ley de Amparo.

Esto se evidencia si consideramos que, como se ha explicado en capítulos anteriores, previo a la citada reforma constitucional, el sistema de justicia constitucional en México tenía entre sus características principales el ser sucesivo, tanto abstracto como concreto, en vía de acción y recaía en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

Actualmente conserva algunas de tales características, pues sigue siendo sucesivo, debido a que tanto los medios de control constitucional específicos como lo son las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y el juicio de amparo directo e indirecto, así como la facultad de regularidad constitucional, analizan las normas legales que se encuentran vigentes, y no así previo a su entrada en vigor, como acontece en los sistemas preventivos.

Continúa ejerciéndose tanto de manera abstracta, en algunos medios de control constitucional, tales como las acciones de inconstitucionalidad, como concreta, tratándose de los demás mecanismos directos de control constitucional, así como de la facultad de regularidad constitucional.

Sin embargo, en lo que respecta a sus características principales consistentes en que se ejercía únicamente vía acción y que recaía en exclusiva en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, éstas fueron modificadas sustancialmente, pues ahora todos los tribunales del país, incluidos los que no integran el Poder Judicial de la Federación, también se encuentran facultados para inaplicar una norma legal de estimarla contraria a la constitución, por lo que el análisis y determinación de que una ley es inconstitucional ya no constituye una facultad exclusiva de los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

De igual modo, la característica sustancial inherente a su ejercicio únicamente vía acción ya no constituye una regla general, debido a que si bien en lo que respecta a los mecanismos directos de control constitucional competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación continúa vigente tal característica, pues solo pueden ejercerlo vía acción que se promueva a través de algunos de los medios de control constitucional específicos – salvo que se trate de disposiciones que los propios tribunales federales están facultados para aplicar, por ejemplo en amparo, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respecto a las cuales si pueden ejercer un control difuso de regularidad constitucional-, tratándose de los mecanismos de regularidad constitucional que realizan los demás tribunales del país, éstos se ejercen vía excepción, dentro de los procesos jurisdiccionales ordinarios de su competencia.

Las actuales características del sistema de justicia constitucional en México permiten colegir que si bien continúa siendo un sistema mixto, al contener características inherentes tanto del modelo concentrado como difuso, debe estimarse que su acentuación cambió para pasar de predominantemente concentrado a predominantemente difuso, lo que se sustenta en el siguiente análisis:

Como se ha explicado, de acuerdo con el artículo 1º, con relación al diverso 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los tribunales del país, en el ámbito de sus competencias, se encuentran obligados a garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso, a través del cual, sin importar su fuero, puede ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si estima que ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Constitución Federal o en un tratado internacional aprobado por el

Estado Mexicano. Así, la propia constitución federal los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos fundamentales, lo que más que un proceso constitucional constituye una técnica al alcance de todos los jueces para que puedan ejercer un control de constitucionalidad dentro de un proceso ordinario.

A la par de este control difuso de regularidad constitucional a cargo de los distintos tribunales del país, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, por disposición constitucional, tienen a su cargo el conocimiento de los mecanismos específicos para la protección de la Norma Fundamental, para cumplir con el imperativo que ésta ordena, particularmente las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los juicios de amparo directo e indirecto.

Así, el control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción sigue estando depositado en forma exclusiva en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva si una disposición es o no contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos; ya sea porque así lo declaren con los efectos generales en acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, permanentes en amparo indirecto, o bien, tratándose de la vía directa, ordenando solamente su inaplicación al caso concreto.

De tal suerte que si bien, el control de constitucionalidad se concentra sólo en los órganos del Poder Judicial de la Federación, en lo que respecta a los mecanismos directos de control constitucional, también recae, con ciertas particularidades, en todas las autoridades jurisdiccionales del país, los que están facultadas para verificar si las leyes inferiores a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos respetan, protegen y garantizan los derechos fundamentales de las personas, no a través de un proceso o mecanismo específico sino dentro del proceso jurisdiccional de su competencia.

Esto último es así, pues el marco dentro del cual debe realizarse tal cometido, resulta esencialmente distinto al control de constitucionalidad que ejercen los tribunales de amparo, debido a que en las vías indirectas de control, la pretensión o litis no puede consistir en aspectos de constitucionalidad, puesto que ello sería equiparar los procedimientos ordinarios que buscan impartir justicia entre los contendientes, a los diversos que fueron creados por los Poderes Constituyente y Revisor de la Constitución con el propósito fundamental de resguardar el principio de supremacía constitucional.

Lo que denota una diferencia total entre los medios de control de constitucionalidad que ejercen tribunales de amparo y lo que ejercen los demás tribunales del país, pues en el primero el tema de inconstitucionalidad o inconveniencia de la ley forme parte de la litis, por ejemplo al ser planteada en la demanda de amparo; mientras que en el segundo, tal tema no integra la litis, puesto que el conflicto se limita a la materia de legalidad, no obstante que, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juez ordinario puede inaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

De esta manera, el control de regularidad constitucional que realizan los jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una herramienta más en su labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema, la que puede ejercerla ex officio, es decir, por razón de su oficio jurisdiccional y sin que medie petición alguna de parte, a diferencia de los procedimientos de control concentrado, en lo que el tema de inconstitucionalidad o de inconveniencia de leyes forma parte de la litis, por lo que, el juzgador está obligado a pronunciarse de forma directa sobre el mismo.

De lo antes expuesto se advierte que actualmente en México el sistema de justicia constitucional no puede estimarse específicamente concentrado ni difuso, sino que por las razones antes precisadas se trata de un sistema mixto, con características de ambos modelos y mayoritariamente difuso. Lo anterior pues continua teniendo características propias del sistema Europeo, debido a que no obstante no concentrarse en un sólo tribunal constitucional, la justicia constitucional vía acción -que resulta ser la más importante y de mayor número en el país- se encuentra depositada solamente en los tribunales de control constitucional pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito, incluso con la particularidad que algunos medios de control constitucional son de la competencia exclusiva del Tribunal Constitucional Supremo, llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales como la acción de constitucionalidad y la controversia constitucional.

Asimismo, continúa teniendo una característica esencial del sistema de justicia constitucional concentrado, pues en lo que respecta a los mecanismos directos de control de constitucionalidad, estos se ejercen, en todos los casos, vía acción; además de que dependiendo del tipo de mecanismo que se ejerza, los efectos de la sentencia que determina la inconstitucionalidad de una norma secundaria pueden ser generales, como en el caso de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional, declarando la invalidez definitiva de la norma impugnada, aunado a que tratándose del primero de los citados medios de control constitucional, el examen de la ley es objetivo y abstracto, características estas últimas, también propias del modelo concentrado.

No obstante las anteriores características inherentes al modelo concentrado, el sistema de justicia constitucional en México ahora cuenta también

con una característica primordial del control difuso, debido a que, si bien con las distintas modalidades y limitantes precisadas, todas las autoridades jurisdiccionales del país están facultadas para ejercer un control constitucional e inaplicar una norma general por considerar que resulta contraria a la Constitución Federal.

Asimismo, en la mayoría de mecanismos directos de control constitucional, así como en el ejercicio de facultades de regularidad constitucional, la determinación de que una norma secundaria es inconstitucional no tiene efectos generales -solo tratándose de acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional con ciertas modalidades y de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– sino solo efectos entre partes, aunado a que también la gran mayoría de medios de control constitucional son concretos y no abstractos, las que constituyen características propias del control difuso.

Lo que permite concluir que si bien antes de la reforma constitucional de junio de dos mil once, el sistema de justicia constitucional en México era mixto, predominantemente concentrado, tanto en la práctica como en las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales vigentes en aquella época, actualmente si bien continúa siendo mixto, ahora, en cuanto al marco constitucional, legal y jurisprudencial, es predominantemente difuso, pues tiene más de los elementos principales de este último modelo, particularmente la característica esencial de que todos los jueces del país ejercen un control de constitucionalidad de las normas legales que aplican, aunado a que los mecanismos para ejercer dicho control son, con excepción de uno, de carácter concreto, y en su mayoría, la determinación de inconstitucionalidad de la ley solo tiene efectos para las partes y no generales.

Con la precisión de que la conclusión anterior en cuanto al predominio del modelo difuso tiene sustento, como se expuso, en las características inherentes al actual sistema de justicia constitucional mexicano, más no así en la realidad de la práctica continua del control constitucional, pues al día de hoy su ejercicio emana, en su gran mayoría, de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a través de los medios directos de control, propios de un sistema de justicia constitucional concentrado, y en una considerable minoría, de los demás jueces del país en ejercicio de un control difuso de constitucionalidad.

4.2. Aplicación en el ámbito judicial.

a) Sentencias y criterios jurisprudenciales relevantes, Suprema corte de justicia de la nación.

Con anterioridad a la reforma constitucional de junio de dos mil once, como quedó precisado con anterioridad, el único facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en la propia Constitución General de la República, como se desprende de las tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro dicen: *"CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN"*¹⁴⁸ y *"CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN"*.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Tesis de jurisprudencia P/J. 73/99, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Novena Época, página 18.

¹⁴⁹ Tesis de jurisprudencia P/J. 74/99, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Novena Época, página 5.

En virtud de la citada reforma constitucional, la Primera Sala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia de rubro: *"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011)"*¹⁵⁰ con respecto al control constitucional estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad.

En este orden de ideas, el Pleno del Máximo Tribunal del país estableció la tesis de jurisprudencia de rubro: *"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS MEDIOS RELATIVOS DEBEN ESTABLECERSE EN LA PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO EN UN ORDENAMIENTO INFERIOR"*,¹⁵¹ en la cual se establece que, en razón de que el ejercicio de la competencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de los medios de control de la constitucionalidad, tiene por efecto que ese órgano fije el alcance de las normas supremas, que expresan la soberanía popular, debe considerarse que la jerarquía de las bases contenidas en ese Magno Ordenamiento conlleva el que sólo en ellas, mediante la voluntad soberana manifestada por el Constituyente o por el Poder Revisor de la Constitución, pueda establecerse la existencia de los referidos medios, esto es, sin menoscabo de que el legislador ordinario desarrolle y pormenore las reglas que precisen su procedencia, sustanciación y resolución.

¹⁵⁰ Tesis de jurisprudencia 1ª./J. 18/2012 (10ª), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 420.

¹⁵¹ Tesis de jurisprudencia P./J. 155/2000, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, página 843.

Así, el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del país en la tesis de rubro: *"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES"*¹⁵² determinó que, actualmente, existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad *ex officio* en materia de derechos fundamentales a cargo del Poder Judicial.

Señalando en primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; y en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.

Indicando que ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas.

Concluyendo que es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional; y en tanto que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad.

¹⁵² Tesis de jurisprudencia P: LXX/2011 (9ª), Pleno de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de

Cuestionamientos que fueron reiterados, en lo conducente, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que al rubro dice: "*CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES*"¹⁵³, al precisar que la mencionada obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, y sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito.

Determinando que, bajo este esquema, surgió la figura denominada control de convencionalidad *ex officio*, misma que fue conceptualizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente Varios 912/2010, como se puede constatar en la tesis de rubro: "*CONTROL CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD*"¹⁵⁴ en el sentido de que, conforme con lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución

2011, Tomo 1, Novena Época, página 557.

¹⁵³ Tesis de jurisprudencia 2a./J. 69/2014 (10ª), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Décima Época, página 555.

¹⁵⁴ Tesis P.LXVII/2011 (9ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Novena Época, página 535.

Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio *pro persona*.

Precisando que en la función jurisdiccional, los jueces están obligados a preferir los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior, esto es, si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.

Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: *"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS"*,¹⁵⁵ estableció entre otros aspectos fundamentales, que al resolver los asuntos sometidos a su competencia, los jueces nacionales, deben inicialmente observar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Por lo que, determinó que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar, no sólo por los derechos

¹⁵⁵ Tesis P.LXIX/2011 (9ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Novena Época, página 552.

humanos contenidos en la Constitución, sino también por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate (lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona), pero respetando, en todo caso, las limitaciones y las restricciones a los derechos humanos establecidos exclusivamente en la Constitución.

Así, el control de constitucionalidad que antes se concentraba en los órganos del Poder Judicial de la Federación, ahora —con sus marcadas diferencias— se hace extensivo y obliga a todas las autoridades jurisdiccionales del país, a fin de que verifiquen si las leyes inferiores a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos respetan, protegen y garantizan las prerrogativas de las personas.

Por lo que, estableció que la posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación.

Precisándose, que el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio deberá realizar los siguientes pasos:

a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia;

b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,

c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

En este sentido, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, en la tesis de rubro: "*CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU EJERCICIO NO NECESARIAMENTE LLEVA A LA INAPLICACIÓN DE UNA NORMA*"¹⁵⁶ establece que todos los juzgadores deben preferir la observancia de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aún en los casos donde existan disposiciones en contrario en cualquier norma inferior. Sin embargo, no todo ejercicio de control de constitucionalidad *ex officio* de los derechos contenidos en la Constitución y en los referidos tratados lleva necesariamente a inaplicar la norma de que se trate, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad, sino hasta que el resultado del control así lo refleje.

¹⁵⁶ Tesis 1ª.CCCLIX/2013 (10ª), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, página 511.

Esta situación, se establece, que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante su interpretación, ya sea:

- 1) Conforme en sentido amplio; o,
- 2) en sentido estricto.

Así, la inaplicación vendrá solamente en los casos en los que la norma no salve esas dos posibilidades interpretativas, y por ende, los conceptos "control de constitucionalidad y convencionalidad *ex officio*" e "inaplicación" no son intercambiables, esto es, un control de ese tipo no lleva necesariamente a la inaplicación de la norma.

Así, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia de rubro: *"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL"* ¹⁵⁷precisa que la obligación de ejercer el control *ex officio* de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza aun en aquellos casos en los que el derecho humano de que se trate esté regulado en la propia Constitución Federal.

Lo anterior, se establece en atención a que el Tribunal Pleno, al resolver el expediente Varios 912/2010, no hizo esa acotación, ni determinó que el control *ex officio* fuera una cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los jueces y todas las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos

¹⁵⁷ Tesis 1a./J. 38/2015, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, página 186.

humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos en el juicio de amparo.

En tanto que, en la tesis de rubro: *"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR PUEDA OBIAR LAS REGLAS PROCESALES"*¹⁵⁸ la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el control de convencionalidad no implica que el juzgador pueda obviar, a conveniencia, el debido proceso ni sus formalidades, pues existiendo los canales procesales y judiciales que brinden acceso a la justicia, el juez que conoce de un caso debe ceñirse a aplicar el control de convencionalidad en el ámbito de sus competencias, sin obviar dichos canales.

En este orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: *"CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. NO TIENE EL ALCANCE DE QUE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LOCALES CONOZCAN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTO DE ASUNTOS QUE NO SEAN DE SU COMPETENCIA"*¹⁵⁹ estableció el criterio de que el control difuso de constitucionalidad no se traduce en la posibilidad de que los tribunales locales, incluso los supremos de cada entidad federativa, puedan conocer de asuntos donde la litis verse sobre violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando se hagan

¹⁵⁸ Tesis 1ª.CCCXLV/2015 (10ª), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página 962.

¹⁵⁹ Tesis 1ª. XXXIX/2016 (10ª), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, Décima Época, página 668.

valer a través de un juicio de protección a derechos fundamentales, pues si bien los tribunales constitucionales locales están facultados para aplicar dicho control, ello solo indica que al resolver los asuntos que sean de su competencia puedan, en última instancia, inaplicar normas que consideren inconstitucionales, esto es, el presupuesto necesario para que los jueces locales puedan aplicar control difuso en un asunto, consiste en que los asuntos sometidos a su consideración sean de su competencia.

Así, precisa que el control difuso ni siquiera puede operar en estos casos, pues el presupuesto básico para su ejercicio no se actualiza, ya que los tribunales constitucionales locales no son competentes para conocer de asuntos cuya litis consista esencialmente en violaciones a la Constitución General de la República, que sólo pueden ser materia del juicio de amparo, medio de control concentrado que el Poder Constituyente diseñó para atender temas constitucionales y que reservó, en exclusiva, para el conocimiento del Poder Judicial de la Federación.

Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, en la tesis: *"PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS"*¹⁶⁰ precisa que el parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos fundamentales contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano

¹⁶⁰ Tesis P.LXVIII/2011 (9ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Novena Época, página 551.

haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.

Aquí conviene resaltar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia que al rubro dice: "*JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA*"¹⁶¹ establece que la obligación de las autoridades jurisdiccionales de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad *ex officio* en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior, precisa, porque de acuerdo al artículo 94 constitucional la jurisprudencia es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional, en la inteligencia que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto; por lo que, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor

¹⁶¹ Tesis P/J 64/2014 (10ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 8.

grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad *ex officio*, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.

Indicando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "*CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD*"¹⁶² que en materia de derechos humanos puede analizarse la contradicción entre una norma general interna y un tratado internacional a través del juicio de amparo, pues si bien es cierto que los juzgadores federales cuentan con facultades constitucionales para realizar el control concentrado en términos de los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que las tienen para efectuar el control de convencionalidad con motivo de lo previsto en los artículos 1o. y 133, última parte, de la propia Constitución.

Determinando, en la diversa tesis de rubro: "*CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD. LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA CUYA INCONVENCIONALIDAD SE DECLARA SÓLO TRASCIENDE A UNA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DEL ACTO RECLAMADO AL NO EXISTIR LA DECLARATORIA RELATIVA*"¹⁶³ que una vez que el juzgador realice el control de convencionalidad y determine que una norma interna es contraria a determinado derecho fundamental contenido en un tratado internacional e, incluso, a la interpretación efectuada al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe analizar el acto reclamado prescindiendo del precepto de derecho interno y aplicando el instrumento internacional en materia de derechos humanos,

¹⁶² Tesis P.LXVII/2011 (9ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Novena Época, página 535.

¹⁶³ Tesis P.V/2013 (10ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Novena Época, página 363.

por lo que es innecesario reflejar la inconveniencia de una norma de derecho interno en los puntos resolutive de la sentencia en la que se hace dicho pronunciamiento, pues éste sólo trasciende al acto de aplicación, en tanto que el control de convencionalidad no puede llegar más allá de la inaplicación de la norma interna en el caso específico; esto es, la inaplicación de la norma cuya inconveniencia se declara sólo trasciende a una inconstitucionalidad indirecta del acto reclamado, por lo que es innecesario llamar a juicio a las autoridades emisoras de la norma cuya inconveniencia se demanda, pues no habrá una declaratoria de inconstitucionalidad de ésta, sino sólo su inaplicación respecto del acto reclamado.

Debiendo quedar precisado, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis aislada de rubro: "*CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LA APLICABILIDAD DE LA NORMA AL CASO CONCRETO ES UN REQUISITO LÓGICO PARA EL EJERCICIO DE AQUÉL*"¹⁶⁴ estableció que el control de convencionalidad exige, como presupuesto lógico para su ejercicio, sobre todo cuando lo que se busca es declarar la inaplicación de una norma de derecho interno, que ésta sea aplicable, es decir, que efectivamente regule el caso concreto, de ahí que para considerar que se realizó un control de convencionalidad no basta la simple consideración de la autoridad de que la norma contradice un derecho humano, sino que previamente debe verificarse la condición de aplicabilidad de ésta.

Lo anterior, precisa, deriva en dos conclusiones: 1) la autoridad no puede declarar la inaplicación de una norma cuyo contenido no es aplicable al caso concreto; y, 2) no cualquier inaplicación de alguna norma que la autoridad afirme realizar constituye un genuino control de convencionalidad.

Así, para que las autoridades den cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de considerar una norma contraria a los derechos humanos, deberán actuar en aras de proteger el derecho que se estime vulnerado y, en todo caso, realizar un control *ex officio* del que puede resultar, como última opción, la inaplicación de una norma al estimarla incompatible con los derechos humanos.

No obstante, establece, que el nuevo paradigma constitucional no destruye la presunción de constitucionalidad de las normas que conforman el sistema jurídico mexicano, por lo cual, debe agotarse cada uno de los pasos del control *ex officio*, con la finalidad de verificar si la norma es acorde con los derechos humanos, ya sea de los reconocidos por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; lo anterior implica que las autoridades judiciales, previo a la inaplicación de la norma en estudio, deben justificar razonadamente por qué se derrotó la presunción de su constitucionalidad, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que al rubro dice: "*CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS AUTORIDADES JUDICIALES, PREVIO A LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA EN ESTUDIO, DEBEN JUSTIFICAR RAZONADAMENTE POR QUÉ SE DESTRUYÓ SU PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD*".¹⁶⁵

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: *CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y*

¹⁶⁴ Tesis 1a. XXIII/2016 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, Décima Época, página 667.

¹⁶⁵ Tesis 1ª. XXII/2016 (10ª), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, Décima Época, página 667.

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU SIGNIFICADO Y ALCANCE", ¹⁶⁶ precisó que la expresión *ex officio* no significa que siempre y sin excepción, los jueces deban hacer obligatoriamente el control de constitucionalidad de los derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; sino que dicha expresión significa que ese tipo de control lo pueden hacer por virtud de su cargo de jueces, aun cuando: 1) no sean jueces de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa de las partes.

En ese sentido, estimó que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010 (cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco), determinó que el control a cargo de los jueces del país que no formen parte del control concentrado, debía realizarse incidentalmente durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.

Así, estableció que la expresión *ex officio* que se predica del control judicial significa que los juzgadores tienen la facultad de controlar las normas que van a aplicar de cara a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México sea parte, por el simple hecho de ser jueces, pero no que "necesariamente" deban realizar dicho control en todos los casos, en cualquiera de sus tres pasos:

- 1) Interpretación conforme en sentido amplio;
- 2) Interpretación conforme en sentido estricto; y,

¹⁶⁶ Tesis 1ª. CCCLX/2013 (10ª), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, Décima Época, página 512.

- 3) Inaplicación; sino en aquellos en los que incidentalmente sea solicitado por las partes o adviertan que la norma amerita dicho control, sin hacer a un lado los presupuestos formales y materiales de admisibilidad.

Lo anterior, pues la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el control *ex officio* no necesariamente debe ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. Lo que supone que los jueces, en el ámbito de su competencia, antes de proceder al control *ex officio* en los tres pasos referidos, debieron resolver o despejar cualquier problema relacionado con presupuestos de procedencia o admisibilidad.

Debiendo quedar precisado, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "*CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE SU EJERCICIO EN SEDE NACIONAL E INTERNACIONAL*"¹⁶⁷ precisa que debe distinguirse entre el control de convencionalidad que deben ejercer las autoridades nacionales, en este caso en el Poder Judicial mexicano, en el ámbito de sus atribuciones, del control de convencionalidad ejercido por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Por un lado, se establece que el control de convencionalidad deben ejercerlo los jueces o juezas nacionales en el estudio de casos que estén bajo su conocimiento, en relación con los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el

¹⁶⁷ Tesis 1ª CXLV/2014 (10ª), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, página 793.

Estado Mexicano sea parte, así como con sus interpretaciones, realizadas por los órganos autorizados.

Por otro lado, existe el control de convencionalidad realizado por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a saber, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos para determinar si, en un caso de su conocimiento, se vulneraron o no derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es decir, si en el caso específico sometido a su conocimiento, las autoridades de un Estado Parte hicieron o no un control de convencionalidad previo y adecuado y, de ser el caso, determinar cuál debió haber sido dicha interpretación. Así pues, la Corte Interamericana es la intérprete última de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, dentro de dicha interpretación, tiene la facultad para analizar si sus decisiones han sido o no cumplidas.

En tanto que, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país en la tesis de rubro: *"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN"*¹⁶⁸ establece que, el ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan; por lo que la sola afirmación en los conceptos de violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en específico y cuál

¹⁶⁸ Tesis 2ª/ J. 123/2014 (10ª), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, página 859.

derecho humano está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, pues incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de lo contrario, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados.

En tanto que, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país en la tesis de rubro: "*CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO*"¹⁶⁹ precisa que la autoridad judicial, para ejercer el control *ex officio*, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos.

De este modo, establece que cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho.

¹⁶⁹ Tesis 1ª/ J. 4/2016 (10ª), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, página 430.

Lo anterior es así, agrega, en atención a que las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto.

Cabe precisar que, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "*CONTROL DE REGULARIDADE CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN*"¹⁷⁰ estableció criterio en el sentido de que no corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito examinar, de oficio, la inconstitucionalidad de los preceptos que rigen los procedimientos o juicios de los que deriva el acto reclamado, ya que tal asignación corresponde, en su caso, a las autoridades judiciales encargadas de su aplicación (autoridades administrativas, jueces, salas de instancia, etcétera), pues sostener lo contrario, es decir, que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden, mediante un control difuso de regularidad constitucional declarar, en amparo directo, la inconstitucionalidad de disposiciones contenidas en leyes que rigen el procedimiento o juicio de origen generaría inseguridad jurídica para las partes, quienes parten de la base de que en el juicio han operado instituciones como la de preclusión, por virtud de la cual han ejercido los derechos procesales que les corresponden en torno a las decisiones emitidas por el juzgador, sin que deba soslayarse que el cumplimiento al imperativo prescrito en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a toda autoridad, en el ámbito de su competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

¹⁷⁰ Tesis P.X/2015 (10ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, página 356.

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no implica que puedan dejar de observarse los mecanismos jurisdiccionales previstos en el orden interno de los Estados para impugnar los actos de autoridad que pudieran considerarse violatorios de derechos humanos.

Agregando a lo anterior, el propio Pleno del Alto Tribunal del país en la tesis que al rubro dice: "*CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA*"¹⁷¹ que de esta manera los tribunales de la Federación que por disposición constitucional tienen a su cargo el conocimiento de los mecanismos para la protección de la Norma Fundamental, pueden emprender el análisis sobre la constitucionalidad de una norma a partir de lo siguiente:

- En respuesta a la pretensión formulada por el quejoso;
- Por virtud de la causa de pedir advertida en el planteamiento de los conceptos de violación o en agravios; o bien, con motivo de la utilización de la institución de la suplencia de la queja deficiente, en términos de la Ley de Amparo que, en ciertas materias, permite ese análisis aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios.

Concluyendo que, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con

¹⁷¹ Tesis P.IX/2015 (10ª), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, página 355.

la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o *ex officio*, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional; que así cuando se habla del control *ex officio* debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando:

- 1) no sean de control constitucional; y,
- 2) no exista una solicitud expresa de las partes.

Habida cuenta, dice, que la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes.

En estas circunstancias, concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla.

Así, en la tesis de rubro: "*CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES*" ¹⁷² la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó, en esencia, que en términos del párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva, establece que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis *ex officio* sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio.

De ahí que, indica que esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan, ya que de lo contrario, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, y sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito.

En este orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que al rubro dice: "*CONTROL CONCENTRADO DE*

¹⁷² Tesis 2ª. XVII/2014 (10ª), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, página 1499.

CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU EJERCICIO EN AMPARO DIRECTO NO SE LIMITA NI CONDICIONA CON LOS PRONUNCIAMIENTOS QUE REALICE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DEL CONTROL DIFUSO" ¹⁷³ determinó que los órganos del Poder Judicial de la Federación tienen competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales, pues son quienes deciden en forma terminal y definitiva si una disposición es o no contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Y que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que, en nuestro sistema existe el control difuso, a través del cual cualquier órgano jurisdiccional puede inaplicar una ley, lo cierto es que tratándose de procedimientos de control concentrado, cuando se haga valer la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas generales, debe abordarse su estudio al dictar sentencia, sin que los pronunciamientos que se hubieren realizado a través del ejercicio del control difuso por la jurisdicción ordinaria limiten o condicionen las facultades de control concentrado

Debiendo quedar precisado que, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país en la tesis de rubro: *"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CUANDO EN LA SENTENCIA RECURRIDA SE REALIZÓ EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO O SE ATRIBUYE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO LA*

¹⁷³ Tesis 2a. XLII/2014 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época, página 355.

OMISIÓN DE REALIZARLO"¹⁷⁴, precisa que cuando en la sentencia dictada en amparo directo se hubiere realizado el control de convencionalidad *ex officio*, o bien, se atribuya al Tribunal Colegiado de Circuito la omisión de realizarlo, el recurso de revisión interpuesto en su contra es improcedente, toda vez que no se satisfacen los requisitos de procedencia conforme al indicado precepto, pues el control de convencionalidad no implica una cuestión de constitucionalidad, al consistir solamente en el contraste de las normas legales con los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, y no así en el análisis o referencia directa a preceptos de la Constitución Federal.

Resaltando que, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "*CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*"¹⁷⁵, precisa que los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo.

Lo anterior, establece en atención que las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional; además, porque ni en la Carta Magna ni en la ley

¹⁷⁴ Tesis 2a./J. 5/2013 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, página 989.

¹⁷⁵ Tesis 2a./J. 3/2014 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, página 938.

citada se establece que, a través del juicio de amparo, aquélla pueda sujetarse a control constitucional, sino únicamente las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías establecidas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Esto es, que en el concepto "normas de carácter general" no puedan entenderse incluidos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta es la Ley Suprema que da fundamento normativo al juicio de amparo; y aun cuando se aceptara que, en sentido lato, es una norma general, lo cierto es que no es posible, desde el punto de vista formal, considerar que viola derechos humanos, pues ello implicaría que la Norma Fundamental no es tal, en la medida en que el sistema de control constitucional que establece es capaz de invalidar su propio contenido, aunado a que no es jurídicamente admisible desarticular la interdependencia de las normas constitucionales, negando el principio de unidad de la Constitución.

Finalmente, cabe resaltar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia de rubro: *"AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EN LA DEMANDA SE ALEGA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE REALIZAR EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL"*¹⁷⁶ precisa que conforme a lo dispuesto por los artículos 1º, 107, fracción IX, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del control difuso de constitucionalidad a cargo de los órganos jurisdiccionales responsables, debe

¹⁷⁶ Tesis 1a./J. 36/2015 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, página 166.

considerarse incluido en el supuesto de "constitucionalidad de normas generales" previsto para la procedencia del recurso de revisión, siempre y cuando, el quejoso se duela de la omisión de dicho control difuso en su demanda de amparo, vinculada con normas específicas de la ley secundaria; sea que ese planteamiento se analice u omita por el tribunal de amparo.

Lo anterior, en virtud de que dicho control consiste en preferir la aplicación de las normas fundamentales de derechos humanos sobre aquellas que los contravengan, para lo cual necesariamente debe hacerse un contraste entre las disposiciones legales y las fundamentales para determinar si las primeras se ajustan a las segundas, es decir, primero hacer una interpretación conforme en sentido amplio por la cual se favorezca la protección más amplia de las personas; si esto no es posible, llevar a cabo una interpretación conforme en sentido estricto según la cual, ante varias interpretaciones jurídicamente válidas, preferir la que más favorezca los derechos fundamentales y, finalmente, cuando ninguna de las anteriores opciones es posible, atender directamente a la norma fundamental, en inaplicación de la norma secundaria incompatible.

b) Sentencias y criterios relevantes de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Los Tribunales Colegiados de Circuito, a partir de la reforma constitucional de junio de dos mil once y de los recientes criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han asumido su papel como operadores de derecho bajo el nuevo paradigma de control de constitucionalidad y de convencionalidad, y esa función se encuentra reflejada en las distintas tesis aisladas y de jurisprudencia que respecto al tópico mencionado han emitido.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, emitió la tesis aislada de rubro: **"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. PARÁMETROS PARA EJERCERLO EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL CONFORME A LA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE VARIOS 912/2010"**¹⁷⁷; en la que con base en una interpretación al ya citado criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ponderó que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias cuando el Estado Mexicano hubiera sido parte del litigio ante esa instancia, y que sus demás sentencias, son orientadoras para los operadores de derecho en el país. En la tesis precisada fijó como parámetros o lineamientos del control de constitucionalidad, que los operadores deben observar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales; y acudir tanto a la jurisprudencia nacional y a la jurisprudencia internacional para evaluar si existe alguna interpretación más favorable que procure una protección más amplia del derecho que se pretenda proteger. También fijó como mecanismo para aplicar el control de convencionalidad el uso de la interpretación conforme de las normas, tanto en sentido amplio como estricto, y en caso de que dicha exégesis no sea posible, inaplicar la ley inconvencional.

Respecto a la interpretación del control concentrado y difuso el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitió el criterio de rubro: **"CONTROL CONCENTRADO Y CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. SUS DIFERENCIAS Y FINALIDAD DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO"**¹⁷⁸; en el que señaló que el control concentrado reside en los órganos del Poder Judicial de la Federación por medio de las acciones de

¹⁷⁷ Tesis IV.3o.A.10 K (10a.), Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, Diciembre de 2012, Novena Época, página 1303.

¹⁷⁸ Tesis I.7o.A.8 K (10a.), Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 3, Septiembre de 2012, Décima Época, página 1679.

inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el amparo directo e indirecto, y precisó que dicho control tenía una pretensión de carácter eminentemente constitucional, toda vez que la finalidad de dichos procedimientos estriba en dilucidar si conforme al planteamiento jurídico que le es propuesto, la actuación de una autoridad o el contenido de un precepto se ajusta o no a las disposiciones que consagra la Constitución, en aras de la preservación del principio de supremacía constitucional.

Asimismo, señaló que el resto de los Jueces del país que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación ejercen un control que se constriñe a dilucidar en los procesos ordinarios el conflicto con base en los hechos, argumentaciones, pruebas y alegatos de las partes, dando cumplimiento a las garantías de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la impartición de justicia; y que en esos procesos, aparece la figura del control difuso, toda vez que el juzgador ordinario, al aplicar la norma, realiza el contraste entre la disposición regulatoria y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional, por lo cual dicha exégesis no forma parte de la disputa entre las partes contendientes, sino que surge y obedece a la obligación que impone el control de constitucionalidad y de convencionalidad contenido en el artículo 1o. de la Constitución, en su nuevo texto reformado.

Respecto a los alcances del control de constitucionalidad, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la tesis aislada de rubro: "**CONTROLES DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD. ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLOS TODOS LOS ÓRGANOS DE JUSTICIA NACIONAL PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS**"¹⁷⁹; consideró que todos los órganos de justicia

¹⁷⁹ Tesis XI.1o.A.T.55 K (9a.), Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 3, Septiembre de 2012, Novena Época, página 1685.

nacional están obligados a ejercer tres tipos de control, el de constitucionalidad, el de convencionalidad y el difuso de convencionalidad.

Respecto al primero consideró que su objeto es desaplicar una norma jurídica que sea incompatible con la Constitución; respecto del control de convencionalidad, precisó que este fungía sobre los actos de autoridad respecto de normas de alcance general, conforme a las atribuciones que le confieren los ordenamientos a los que se hallan sujetos y las disposiciones del derecho internacional de los recursos humanos a que se encuentran vinculados; y en cuanto al control difuso de convencionalidad, consideró que quedaba depositado tanto en tribunales internacionales, o supranacionales, como en los nacionales, a quienes se les encomienda la nueva justicia regional de los derechos humanos y adquieren, además, la obligación de adoptar en su aparato jurídico tanto las normas como su interpretación a través de políticas y leyes que garanticen el respeto a los derechos humanos y sus garantías explícitas previstas en sus constituciones nacionales y, desde luego, en sus compromisos internacionales, con el objeto de maximizar los derechos humanos.

Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito estableció en la tesis de rubro: "**DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO**"¹⁸⁰, que en virtud de la reforma constitucional en cita, se insiste, que los jueces de todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el principio pro persona, consistente en adoptar la interpretación más

¹⁸⁰ Tesis Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, página 4334.

favorable al derecho humano de que se trate, y además, al margen de los medios de control concentrado de la constitucionalidad adoptados en la Constitución General de la República, todos los juzgadores deben ejercer un control de convencionalidad *ex officio* del orden jurídico, conforme al cual pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, indicó, que si el Juez no advierte oficiosamente que una norma violente los derechos humanos mencionados, a fin de sostener la inaplicación de aquélla en el caso concreto, dicho control de convencionalidad no puede estimarse que llega al extremo de que el juez del conocimiento deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa. Por tanto, la sola mención de que una autoridad violentó derechos humanos en una demanda de garantías, es insuficiente para que, si el juzgador de amparo no advierte implícitamente *ex officio* la transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los demás derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la litis conforme al principio *pro persona*, a fin de determinar si el acto reclamado es o no contrario a derecho.

En este orden de ideas, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región precisó en la tesis de rubro: **"CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y**

MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA¹⁸¹ que aun cuando el control difuso de constitucionalidad -connotación que incluye el control de convencionalidad- que ejercen los órganos jurisdiccionales en la modalidad *ex officio* no está limitado a las manifestaciones o actos de las partes, pues se sustenta en el principio *iura novit curia*, ello no implica que deba ejercerse siempre, pues existen presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia que deben tenerse en cuenta.

Así, precisa que la ley, la jurisprudencia y la práctica muestran que algunos de esos presupuestos, que de no satisfacerse impedirán su ejercicio, de manera enunciativa son: a) Que el juzgador tenga competencia legal para resolver el procedimiento o proceso en el que vaya a contrastar una norma; b) Si es a petición de parte, que se proporcionen los elementos mínimos, es decir, debe señalarse con toda claridad cuál es el derecho humano o garantía que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le produce, pues de otra forma, sin soslayar su carácter de conocedor del derecho, el juzgador no está obligado a emprender un estudio expreso oficioso de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que se le transcriban, o que de manera genérica se invoquen como pertenecientes al sistema; c) Debe existir aplicación expresa o implícita de la norma, aunque en ciertos casos también puede ejercitarse respecto de normas que, bien sea expresa o implícitamente, deban emplearse para resolver alguna cuestión del procedimiento en el que se actúa; d) La existencia de un perjuicio en quien solicita el control difuso, o bien irrogarlo a cualquiera de las partes cuando se realiza oficiosamente; e) inexistencia de cosa juzgada respecto del tema en el juicio, pues si el órgano jurisdiccional ya realizó el control difuso, estimando que la norma es constitucional, no puede realizarlo nuevamente, máxime si un juzgador superior ya se pronunció

¹⁸¹ Tesis XXVII.1o.(VIII Región) J/8 (10a.),Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Décima Época, página 953.

sobre el tema; f) Inexistencia de jurisprudencia obligatoria sobre la constitucionalidad de la norma que emiten los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, porque de existir, tal criterio debe respetarse, pues el control concentrado rige al control difuso y, g) Inexistencia de criterios vinculantes respecto de la convencionalidad de la norma general, ya que conforme a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los tribunales del Estado Mexicano.

Sobre el control de convencionalidad, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito emitió un criterio aislado sobre la forma en que deben aplicarlo los tribunales ordinarios de segunda instancia. Dicho tribunal realizó una interpretación de la obligación de los tribunales de alzada respecto al control de convencionalidad *ex officio*, en el mismo sentido que el último criterio analizado, es decir, que cualquier órgano jurisdiccional del país, en ejercicio de su potestad y de manera oficiosa, puede inaplicar leyes que considere contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y por lo tanto, los tribunales de segunda instancia se encontraban obligados a atender los planteamientos relativos a la violación de preceptos constitucionales. El criterio emitido por el referido órgano jurisdiccional, es el de rubro: "**CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES DE ALZADA ESTÁN OBLIGADOS A RESPONDER DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LOS AGRAVIOS RELATIVOS A LA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES**"¹⁸².

El citado Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consideró en la tesis de rubro: "**CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.**

¹⁸² Tesis VII.2o.C. J/3 (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, Mayo de 2013, Décima Época, página 1106.

PUEDE EJERCERSE RESPECTO DE CUALQUIER ACTUACIÓN U OMISIÓN DEL ESTADO: ACTOS Y HECHOS”¹⁸³, que de una interpretación al expediente varios 912/2010, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede dilucidar el alcance de dicho control, y en el criterio fijó que los jueces nacionales, independientemente de su jurisdicción y competencia, están obligados a dejar de aplicar una norma inferior dando preferencia a los contenidos en la Constitución y a los tratados en derechos humanos, y que dicho control, no sólo es procedente respecto de normas generales, sino que es factible realizarlo respecto de cualquier actuación u omisión del Estado.

En similares términos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, reflexionó en el sentido de que el ejercicio del control de convencionalidad se encuentra contenido en los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tales preceptos imponen a las autoridades jurisdiccionales la obligación de ejercer de oficio o a petición de parte dicho control en materia de derechos humanos; asimismo, dicho tribunal constitucional tomó en consideración que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, con relación al deber de los Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respetar bienes jurídicos y libertades reconocidos en ella, y que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese deber, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto, que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la propia convención, sustentándose en los casos de la Corte Interamericana de "*Tribunal Constitucional vs. Perú*"; "*Bámaca Velásquez vs. Guatemala*", y que por lo tanto, la responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por dicho instrumento internacional,

¹⁸³ Tesis IV.3o.A. 11 K (10a.), Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, Diciembre de

pues en esos términos la Corte Interamericana se pronunció en el caso de "*Albán Cornejo y otros vs. Ecuador*".

Por lo que concluyó en dicha tesis, que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los efectos de sus disposiciones y por ello no pueden verse mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos, lo que era acorde con el caso de "*Almonacid Arellano y otros vs. Chile*" de la Corte Interamericana. El criterio del que se comenta se encuentra en la tesis aislada de rubro: **"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO"**¹⁸⁴.

El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en la tesis de jurisprudencia de rubro: **"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. DEBE ORIENTARSE A LA TUTELA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, CUANDO SE PROTEJAN LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES O ACCIONISTAS"**¹⁸⁵ consideró que si bien en el ámbito jurídico las personas jurídicas no tienen derechos

2012, Décima Época, página 1305.

¹⁸⁴ IV.2o.A. J/7 (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 2013, Décima Época, página 933.

¹⁸⁵ Tesis VI.3o.(II Región) J/4 (10a.), Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, Mayo de 2013, Décima Época, página 1092.

humanos reconocidos, lo cierto era que en el caso "*Cantos vs. Argentina*" de la Corte Interamericana, se resolvió que el individuo puede reclamar una violación a sus derechos aun cuando estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el propio sistema jurídico; y que por ello, el control de convencionalidad *ex officio*, no podía desconocer que las personas jurídicas tenían derechos que eran susceptibles de ser reclamados siempre que sean compatibles con su naturaleza, así como los derechos y libertades de acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad de sus socios, integrantes o accionistas, y que por lo tanto, el control de convencionalidad debe salvaguardar a los derechos de tales integrantes.

Es importante señalar que los tribunales colegiados de circuito han dado diferentes enfoques a la aplicación del control de constitucionalidad, como se advierte de los siguientes dos casos:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, emitió el criterio de rubro: "**CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN EL AMPARO INDIRECTO. SI SE IMPUGNA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE APLICARLO SI ADVIERTE QUE ÉSTA VIOLA ALGÚN DERECHO FUNDAMENTAL RECONOCIDO EN LA CONSTITUCIÓN O EN TRATADOS INTERNACIONALES, SIN REQUERIR DEL AGRAVIADO PLANTEAMIENTO EXPRESO AL RESPECTO, PERO SI ÉSTE NO PROPONE DICHO CONTROL, AQUÉL NO PUEDE EFECTUAR UNA DECLARATORIA DE INCONVENCIONALIDAD NI DECLARAR LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA**"¹⁸⁶, en el que estableció que cuando en un juicio de amparo indirecto se impugna la inconstitucionalidad de una ley, el Juez de Distrito puede aplicar dicho control si advierte que ésta viola algún derecho fundamental reconocido en la Constitución Federal o en tratados internacionales,

¹⁸⁶ Tesis IV.3o.A.19 K (10a.), Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, Diciembre de 2012, Décima Época, página 1092.

sin requerir del agraviado planteamiento expreso al respecto, al tener en consideración que la jurisdicción nacional se complementa con la internacional, la cual puede actuar incluso subsidiariamente cuando aquélla sea insuficiente en la solución del conflicto; pero, si el quejoso omite plantear el control de convencionalidad, el Juez Federal no puede efectuar una declaratoria de inconvencionalidad ni declarar la inaplicación de la norma, pues en un sistema de control concentrado, el juzgador está facultado únicamente para pronunciarse sobre la declaratoria, en su caso, de inconstitucionalidad del precepto que se impugna, apoyado en el control de convencionalidad, pero sin declarar su inaplicación, salvo que la propia declaratoria así lo disponga.

En un sentido contrario, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, integró la tesis aislada de rubro: "**CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES APLICADAS EN EL ACTO RECLAMADO EN UN AMPARO INDIRECTO. ES VIABLE AUNQUE AQUÉLLAS NO HAYAN SIDO RECLAMADAS DE MANERA DESTACADA O SEA IMPROCEDENTE EL JUICIO EN SU CONTRA**"¹⁸⁷, en la que consideró que a los jueces de amparo les corresponde de forma relevante la protección de los derechos humanos, ya que su función primordial consiste en ejercer dentro de esa materia un control directo o concentrado de convencionalidad y constitucionalidad, y que por lo tanto, si los Jueces comunes cuentan con facultades amplias de ese control de convencionalidad y constitucionalidad de leyes, los propios tribunales de amparo también gozan de ellas.

Los dos anteriores criterios se encuentran contendiendo en el procedimiento de contradicción de tesis 351/2014, pendiente de resolverse por la

¹⁸⁷ Tesis XXVII.10.(VIII Región) 8 K (10a.), Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 4, Octubre de 2012, Décima Época, página 1092.

Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo que revela que el nuevo margen de control constitucional, originado tanto por la reforma constitucional como por las jurisprudencias del Alto Tribunal, se encuentra actualmente delineándose con el pronunciamiento de diversos criterios emitidos por los operadores de derecho, así como los criterios unificadores que resulten de la solución de dichas contradicciones.

En un tema similar, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en la tesis de rubro: **"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. HIPÓTESIS QUE PUEDEN SUSCITARSE EN SU APLICACIÓN EX OFFICIO POR LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y FORMA EN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE PROCEDER EN CADA UNA DE ELLAS"**¹⁸⁸, precisó que el control de convencionalidad *ex officio*, obliga a todas las autoridades nacionales, sin embargo, tratándose de autoridades jurisdiccionales es preciso acotar diversas hipótesis que en el ejercicio de sus atribuciones se pueden suscitar: a) que las partes en el juicio planteen argumentos por los que consideren que se debe declarar la inconvencionalidad de una norma interna (*verbigracia* como planteamiento en la demanda, o como excepción en su contestación); en este supuesto, la autoridad de instancia, ante quien se proponga el ejercicio de control de convencionalidad, está no sólo facultada, sino obligada indefectiblemente -de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Federal- a analizar y pronunciarse expresamente sobre el tópico planteado, b) que la autoridad jurisdiccional se pronuncie oficiosamente durante el procedimiento o al dictar sentencia, sobre el control de convencionalidad de una norma de derecho interno; y c) que no exista planteamiento por las partes y la responsable no se pronuncie al dictar resolución; en este caso, debe suponerse que implícitamente el Juez realizó el estudio de convencionalidad, por lo cual, no existe obligación de

¹⁸⁸ Tesis XXX.1o.2 K (10a.), Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, página 1732.

pronunciamiento expreso por él, pues la falta de éste hace presumir que el Juez de instancia consideró que las normas internas aplicadas al caso son acordes a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, así como a los criterios vinculantes y orientadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En consecuencia precisó, que ante tales supuestos, el proceder del Tribunal Colegiado de Circuito al instarse el juicio de amparo directo y proponerse conceptos de violación que pretendan un control de convencionalidad, variará y así, en el primer caso (inciso a) el Tribunal Colegiado, de advertir que las partes hicieron patente una presunta violación a un derecho humano contenido en un tratado internacional o en criterios orientadores o vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la responsable fue omisa en su pronunciamiento o, aun haciéndolo, alega infundadamente incompetencia de su parte para hacer un análisis de convencionalidad, o bien, esquiva el estudio con cualquier otra consideración que no implique un análisis de lo efectivamente planteado; conlleva a que el tribunal constitucional conceda el amparo y la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable se pronuncie sobre ello, porque de resultar fundado el argumento sometido a consideración del órgano jurisdiccional de instancia, el justiciable lograría la inaplicación de esa norma en el caso concreto, otorgándosele así, la posibilidad de obtener una solución a su reclamo ante la autoridad del orden común, que es uno de los propósitos de la reforma al artículo 1º constitucional. Estableciendo que, en caso de que no le fuera favorable el pronunciamiento emitido por el correspondiente órgano del conocimiento, el demandante está en aptitud de promover juicio de amparo y plantear conceptos de violación tendentes a evidenciar tanto la inconventionalidad de la norma como su inconstitucionalidad; de ahí que se otorgue a la parte inconforme una posibilidad más de obtener la inaplicación de la norma que estima viola sus derechos fundamentales.

En lo tocante a la segunda hipótesis (inciso b), indicó que si la responsable realiza el estudio oficioso de control de convencionalidad en la sentencia definitiva, su pronunciamiento constituirá, en su caso, la causa de los conceptos de violación que, en vía de amparo directo, puedan realizar las partes en el juicio, respecto de los cuales debe evidentemente pronunciarse el Tribunal Colegiado de Circuito y analizar, por tanto, si la resolución del Juez de instancia, respecto del control ejercido fue correcta o no.

Y finalmente precisó, que el proceder del órgano colegiado federal, en el tercer supuesto (inciso c) y que sea hasta esa instancia de amparo en la cual se proponga el análisis de convencionalidad, implicará que dicho tribunal federal se pronuncie sobre lo fundado o no de las violaciones a los derechos fundamentales presumiblemente violados, sin posibilidad, en este caso, de que se conceda el amparo para que la autoridad responsable emprenda un estudio primigenio, pues no debe perderse de vista que esa consideración se hace patente por alguna de las partes en el juicio hasta la promoción del amparo y, en ese orden de ideas, no puede atribuirse una falta u omisión en el estudio por parte del Juez natural porque -como se dijo- ante la imprevisión de planteamiento por las partes, debe suponerse que implícitamente el Juez realizó el estudio de convencionalidad.

En este sentido, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región estableció, en la tesis de jurisprudencia de rubro: **"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, GARANTÍA DE AUDIENCIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A REQUISITOS INNECESARIOS, EXCESIVOS, CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN EJERCICIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN CUANDO NO EXISTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN O**

AGRAVIO AL RESPECTO¹⁸⁹, considerar que los órganos jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer, *ex officio*, el control de convencionalidad en sede interna, lo cual implica la obligación de velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los establecidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable conforme al principio *pro persona*, protegiendo cabalmente, entre otros, los derechos y libertades de acceso a la justicia, garantía de audiencia y tutela jurisdiccional, acorde con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los preceptos 14 y 17 de la Constitución General de la República.

Por lo que, estableció que si la tutela jurisdiccional se ha definido como el derecho de toda persona para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para plantear sus pretensiones o defenderse de ellas, con el objeto de que mediante la sustanciación de un proceso donde se respeten ciertas formalidades se emita la resolución que decida la cuestión planteada y, en su caso, se ejecuten las decisiones, es evidente que el respeto a esos derechos y libertades no debe supeditarse a requisitos innecesarios, excesivos, carentes de razonabilidad o proporcionalidad; por ello, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito adviertan tal circunstancia, deben analizarla preponderantemente, en ejercicio del control de convencionalidad, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos humanos, aun cuando no exista concepto de violación o agravio al respecto.

¹⁸⁹ Tesis VI.3o.(II Región) J/3 (10a.), Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, página 1302.

Conclusiones

Conclusiones

De lo expuesto en los anteriores capítulos que conforman la presente tesis doctoral, estimo que se pueden obtener las siguientes conclusiones medulares:

I. Aun cuando existen tres tipos de modelos de control constitucional primarios: el concentrado, el difuso y el mixto, actualmente la mayoría de los sistemas se rigen por el último de los mencionados.

En el control constitucional de vía difusa, todos los órganos jurisdiccionales están facultados, en vía de excepción, para estudiar la constitucionalidad de normas generales, y omitir su aplicación en un caso concreto. En este sistema los jueces no sólo tienen la facultad, sino la obligación, de examinar si la ley, que una de las partes invoca en cierto litigio como fundamento de sus peticiones, y que la otra tilda de inconstitucional, es o no acorde con los mandamientos constitucionales relativos, y en caso contrario, negarle obediencia y no aplicar dicha ley inconstitucional. Se ejerce vía excepción, y la declaratoria tiene efectos inter partes.

En los sistemas que se rigen por un control constitucional concentrado, los Tribunales Constitucionales son los que ejercen el control de constitucionalidad en forma exclusiva, por lo que los jueces ordinarios no pueden conocer de lo contencioso constitucional.

El control de constitucionalidad que se ejerce es abstracto y vía acción, y las declaratorias de inconstitucionalidad que se emiten adquieren efectos erga omnes.

El modelo de control constitucional se considera mixto cuando se produce una mezcla de elementos constitutivos de los dos modelos clásicos concentrado y

difuso, que dan lugar a un tercero, distinto a los dos anteriores, sin llegar a constituir un modelo enteramente autóctono y original. En este modelo se encuentra tanto el control abstracto de constitucionalidad por parte de un Tribunal Supremo, como la facultad de todos los jueces de inaplicar leyes que estimen contrarias a la Constitución. En un sentido escrito, se tendría que señalar que en la actualidad el ningún sistema se conserva puro, sino que combinan los elementos de ambos modelos.

II. El control constitucional en México, en forma previa a la reforma de Junio de dos mil once, era mixto, predominantemente concentrado.

El control constitucional en este país se ejercía principalmente por un tribunal constitucional -la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, que actúa en Pleno o a través de sus dos salas, pues dicho Tribunal Supremo, además de tener el "monopolio" competencial para conocer de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, contaba con la competencia originaria para conocer del juicio de amparo contra tratados internacionales, leyes federales, de las entidades federativas y del otrora Distrito Federal, reglamentos y demás ordenamientos generales, no de manera directa, sino como órgano revisor.

Sin embargo, el juicio de amparo contra leyes también permitía a los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, conocer del juicio de amparo indirecto en contra de tratados internacionales, leyes y demás ordenamientos generales, y los tribunales colegiados, por disposición de ley y por medio de los acuerdos delegatorios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia conocían de los amparos directos en los que se aducía la inconstitucionalidad de leyes, así como de recursos de revisión en contra de sentencias de jueces de Distrito en juicios de amparo contra leyes.

Con los anteriores elementos, se concluye que la justicia constitucional en

México no se ejercía de manera concentrada sólo a través de un tribunal supremo constitucional, sino a través de múltiples tribunales diseminados en toda la República Mexicana, que no sólo ejercían facultades de tribunal constitucional, sino, además, facultades esencialmente de legalidad, por lo que no podía hablarse propiamente de un sistema de control constitucional que se concentrara en un tribunal constitucional; ni tampoco podía decirse que todos los medios de control constitucional en México, fueran de naturaleza abstracta y que las declaraciones de inconstitucionalidad tuvieran efectos generales, y por ello, no podía considerarse que en México el sistema de justicia constitucional fuera específicamente concentrado.

Asimismo, tampoco podía considerarse que se estuviera en un sistema de control constitucional propiamente difuso, en el que cualquier tribunal podía desaplicar una norma legal por considerarla contraria a la constitución, debido a que el análisis y la determinación de que una ley era contraria a la constitución era facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación, que la ejercía, como se dijo, a través de sus distintos órganos jurisdiccionales y medios de control constitucional comentados, por lo que los jueces ordinarios -no integrantes del Poder Judicial Federal- no podían, en ningún caso, efectuar tal análisis y ordenar con base en ello la desaplicación de una norma por estimarla contraria a un precepto o principio constitucional.

Consiguientemente, el sistema de justicia constitucional en México antes de la reforma constitucional de dos mil once, era mixto, pero predominantemente concentrado, toda vez que carecía de la característica, que se estima medular e inherente al control difuso, consistente en que todos los órganos judiciales de un estado puedan ejercer un control constitucional y desaplicar una norma general, por estimarla contraria al texto constitucional, así como de la subsecuente característica del conocimiento de control constitucional vía excepción.

III. Con posterioridad a la reforma constitucional de junio de dos mil once y a su interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sistema de control constitucional en México, si bien continúa siendo mixto, ahora es predominantemente difuso.

En el expediente de varios 912/2010, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de julio de dos mil once, se realizó una interpretación de la reforma constitucional de junio de dos mil once, y de la afectación que tuvo en el control de constitucionalidad.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró las citadas modificaciones a la Constitución, en el sentido de que todos los jueces del Estado Mexicano estaban obligados a dejar de aplicar las normas ordinarias cuando estimaran que eran contrarias a los derechos fundamentales y preferir las contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano fuera parte, con relación a los asuntos de su competencia.

IV. El sistema de justicia constitucional en México, aún conserva rasgos del control concentrado constitucional.

En la actualidad el sistema de justicia constitucional en México, preserva diferentes características del control concentrado, como lo son las siguientes: que los medios de control constitucional directos, como lo es la controversia constitucional y la acción de inconstitucional, se ejercen solamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el juicio de amparo, únicamente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación; que estos medios de control se ejercen por la vía de acción y que el sistema de control constitucional cuenta con acciones abstractas como la acción de inconstitucionalidad, cuyos efectos pueden declarar la invalidez de la norma secundaria motivo de análisis con efectos generales. Asimismo, con un mecanismo de control denominado declaratoria general de

inconstitucionalidad, que emite el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene efectos generales, derogatorios, con respecto a la norma declarada inconstitucional en jurisprudencia por reiteración, en aquellos casos que prevé la ley de amparo.

Como se advierte de las anteriores conclusiones, no debe considerarse que con la reforma a la Constitución, el actual sistema jurídico de control constitucional perdiera los rasgos distintivos del modelo concentrado, por lo que no podría decirse que la reforma Constitucional transformara el sistema de justicia en uno puramente difuso.

El modelo de control constitucional actual en México.

Actualmente, el sistema de justicia constitucional no puede estimarse específicamente concentrado ni difuso, sino que posee características de ambos modelos, y es mayoritariamente difuso. Lo anterior pues continua teniendo características propias del sistema Europeo, debido a que no obstante no concentrarse en un sólo tribunal constitucional, la justicia constitucional vía acción -que resulta ser la más importante y de mayor número en el país- se encuentra depositada solamente en los tribunales de control constitucional pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, tales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito, incluso con la particularidad que algunos medios de control constitucional son de la competencia exclusiva del Tribunal Constitucional Supremo, llámese Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales como la acción de constitucionalidad y la controversia constitucional.

Asimismo, continúa teniendo una característica esencial del sistema de justicia constitucional concentrado, pues en lo que respecta a los mecanismos

directos de control de constitucionalidad, estos se ejercen, en todos los casos, vía acción.

Además de que dependiendo del tipo de mecanismo que se ejerza, los efectos de la sentencia que determina la inconstitucionalidad de una norma secundaria pueden ser generales, como en el caso de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional, declarando la invalidez definitiva de la norma impugnada, aunado a que tratándose del primero de los citados medios de control constitucional, el examen de la ley es objetivo y abstracto, características estas últimas, también propias del modelo concentrado.

No obstante las anteriores características inherentes al modelo concentrado, el sistema de justicia constitucional en México ahora cuenta también con una característica primordial del control difuso, debido a que, si bien con las distintas modalidades y limitantes precisadas a lo largo de la tesis, todas las autoridades jurisdiccionales del país están facultadas para ejercer un control constitucional e inaplicar una norma general por considerar que resulta contraria a la Constitución Federal.

De igual modo, en la mayoría de mecanismos directos de control constitucional, así como en el ejercicio de facultades de regularidad constitucional, la determinación de que una norma secundaria es inconstitucional no tiene efectos generales -solo tratándose de la acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional con ciertas modalidades y de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- sino solo efectos entre partes, aunado a que también la gran mayoría de medios de control constitucional son concretos y no abstractos, las que constituyen características propias del control difuso.

Lo que permite concluir que si bien antes de la reforma constitucional de junio de dos mil once, el sistema de justicia constitucional en México era mixto, predominantemente concentrado, tanto en la práctica como en las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales vigentes en aquella época, actualmente si bien continúa siendo mixto, ahora, en cuanto al marco constitucional, legal y jurisprudencial, es predominantemente difuso, pues tiene más de los elementos principales de este último modelo, particularmente la característica esencial de que todos los jueces del país ejercen un control de constitucionalidad de las normas legales que aplican, aunado a que los mecanismos para ejercer dicho control son, con excepción de uno, de carácter concreto, y en su mayoría, la determinación de inconstitucionalidad de la ley solo tiene efectos para las partes y no generales.

Con la precisión de que la conclusión anterior en cuanto al predominio del modelo difuso tiene sustento, como se expuso, en las características inherentes al actual sistema de justicia constitucional mexicano, más no así en la realidad de la práctica continua del control constitucional, pues al día de hoy su ejercicio emana, en su gran mayoría, de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a través de los medios directos de control, propios de un sistema de justicia constitucional concentrado, y en una considerable minoría, de los demás jueces del país en ejercicio de un control difuso de constitucionalidad.

Con base en las anteriores conclusiones, se espera haber convencido al lector en nuestra calificación y precisión del actual modelo de control constitucional mexicano; y que haya apreciado en una forma clara su evolución de un sistema de justicia constitucional mixto, preponderantemente concentrado a un sistema mixto, con acentuación difusa.

Por ello, espero que haya brindado algún apoyo al precisar los tipos de modelo constitucionales que existen, así como la evolución histórica del sistema

de justicia y la interpretación del marco normativo legal y jurisprudencial en México.

Finalizo esta obra, con la esperanza de que de alguna manera abone a que los operadores de Derecho, en específico los impartidores de justicia y garantes del control constitucional, tanto de la Federación como de los Poderes Locales, ejerzan su potestad de salvaguardar los derechos fundamentales de los justiciables, e inaplicar ya sea vía control de constitucionalidad o de convencionalidad, las normas o actos violatorios de los derechos fundamentales de las personas.

Bibliografía.

Ahumada. Marian. La Jurisdicción Constitucional en Europa. Bases Teóricas y Políticas. Editorial Civitas. 2005.

Cabrera Acevedo, Lucio. El Constituyente de Filadelfia de 1787 y la Judicial Review, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Edición, México, 2015.

Castillo del Valle, Alberto. La Defensa Jurídica de la Constitución en México, Grupo Herrero, México, 1994.

Capelleti, Mauro. La justicia constitucional (estudios de derecho comparado). UNAM. Facultad de Derecho, México, 1987.

Carpizo Aguilar, Enrique. El control constitucional y el convencional frente a la simple actividad protectora de los derechos humanos, Poder Judicial del Estado de Nuevo León, México, 2014.

De Vega, Pedro. La Defensa de la Constitución: estudio acerca de las diversas especies de salvaguardia de la Constitución. Editorial Tecnos, 2ª. Edición, España.

De Toqueville, Alexis. La Democracia en América. Fondo de Cultura Económica, México, 1984.

Dowling, Noel. Cases on Constitutional Law. Fourth Edition, Brooklyn, 1950.

Eto Cruz, Gerardo. John Marsahall y la sentencia Marbury vs. Madisón. FERRER MAC-GREGOR, Coordinador, Derecho Procesal Constitucional, Cuarta Edición, Porrúa, México, 2003.

Favoreu, Louis. Los Tribunales Constitucionales, Editorial Ariel, Barcelona, 1994.

Fernández Segado, Francisco. La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano, México, UNAM, 2004.

Ferrer Mac-Gregor, Martínez Ramírez Fabiola, Figueroa Mejía, Giovanni A (Coordinadores), Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Tomo I, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México. 2005.

Fix Zamudio, Héctor, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, Porrúa, UNAM, Sexta Edición. México. 2009.

Flores Cruz, Jaime. Interpretación Constitucional y Control sobre Órganos de Control Constitucional, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, 2006.

García Belaunde, Domingo. De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional, en Derecho Procesal Constitucional, FERRER MAC-GREGOR, Coordinador, Porrúa, México, 2001.

García, Belaunde, Domingo. Derecho Procesal Constitucional, Editorial Temis, Bogotá 2001.

Garza García, César Flores Carlos. *Derecho Constitucional Mexicano*. Editorial McGraw-Hill, México, 1977.

González Oropeza, Manuel. Constitución y Derechos Humanos, Orígenes del Control Jurisdiccional, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México, 2009.

Gutiérrez Zapata, Iván Carlo. Los problemas del control directo de constitucionalidad, www.juridicas.unam.mx.

Hamilton, Alexander. *El Federalista*, Fondo de Cultura Económica, México, 1997.

Highton, Elena I. *Sistemas Concentrado y Difuso de Control Constitucional*, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Instituto Iberoamericano. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Proceso y Constitución, Número 1, Editorial Porrúa, México, 2004.
Jacobó Ortega, Jesús Edgar. Control Jurídico de Constitucionalidad, Monografía, México.

Kelsen, Hans. Teoría General del Estado, Editorial Labor, trad. Luis Lagaz y Lacambra, Editorial Nacional, México, 1934.

Kelsen, Hans Teoría pura del Derecho. Editorial Porrúa. México. 1993.

Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional), UNAM, México, 2001.

Meléndez, Susana. Tipos de Controles Constitucionales, El Salvador, 2013.
Montesquieu. Del espíritu de las leyes, trad. Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Barcelona Altaya, 1987.

Ohlinger, Theo. Hans Kelsen y el Derecho Constitucional Federal Austriaco. Una retrospectiva crítica. FERRER MAC-GREGOR, coordinador. Editorial Porrúa, México, 2001.

Orozco Mendoza, Carlos Alberto. Control concentrado, control difuso y control de convencionalidad. Universidad Panamericana. Facultad de Derecho. México. 2014.

Pegoriano, Lucio. Ensayos sobre justicia constitucional, la descentralización y las libertades, Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional.

Pérez Lozano, Andrés. El Control de Convencionalidad en el Sistema Jurídico Mexicano. Editorial Novum. México, 2011.

Reyes Reyes, Pablo E. La acción de Inconstitucionalidad, Editorial Oxford, México, 2000.

Schmitt, Carl. Teoría de la Constitución, Editorial Nacional, México, 1966.

Soberanes Fernández, José Luis. La Reforma Judicial de 1991, en Crónica Legislativa, Cámara de Diputados, año IV, Nueva Época, Número 2, Revista ARS IURIS, Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Número 13 Especial, Reforma Judicial, México, 1995.

Suárez Camacho, Humberto. El Sistema de Control Constitucional en México, Editorial Porrúa, Cuarta Edición, México, 2014.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Competencia del Poder Judicial de la Federación, México, 2011.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Control de convencionalidad y el Poder Judicial en México, mecanismo de protección nacional e internacional de los derechos humanos, México.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Los Tribunales Constitucionales y la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tercera Edición, Aquarela Gráficos, México, 2014.

Tajadura Tejeda, Javier. La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Volumen I.

Tusseau, Guillaume. Para acabar con los “modelos” de jurisdicción constitucional, un ensayo de crítica, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Editorial Porrúa, México, 2011.